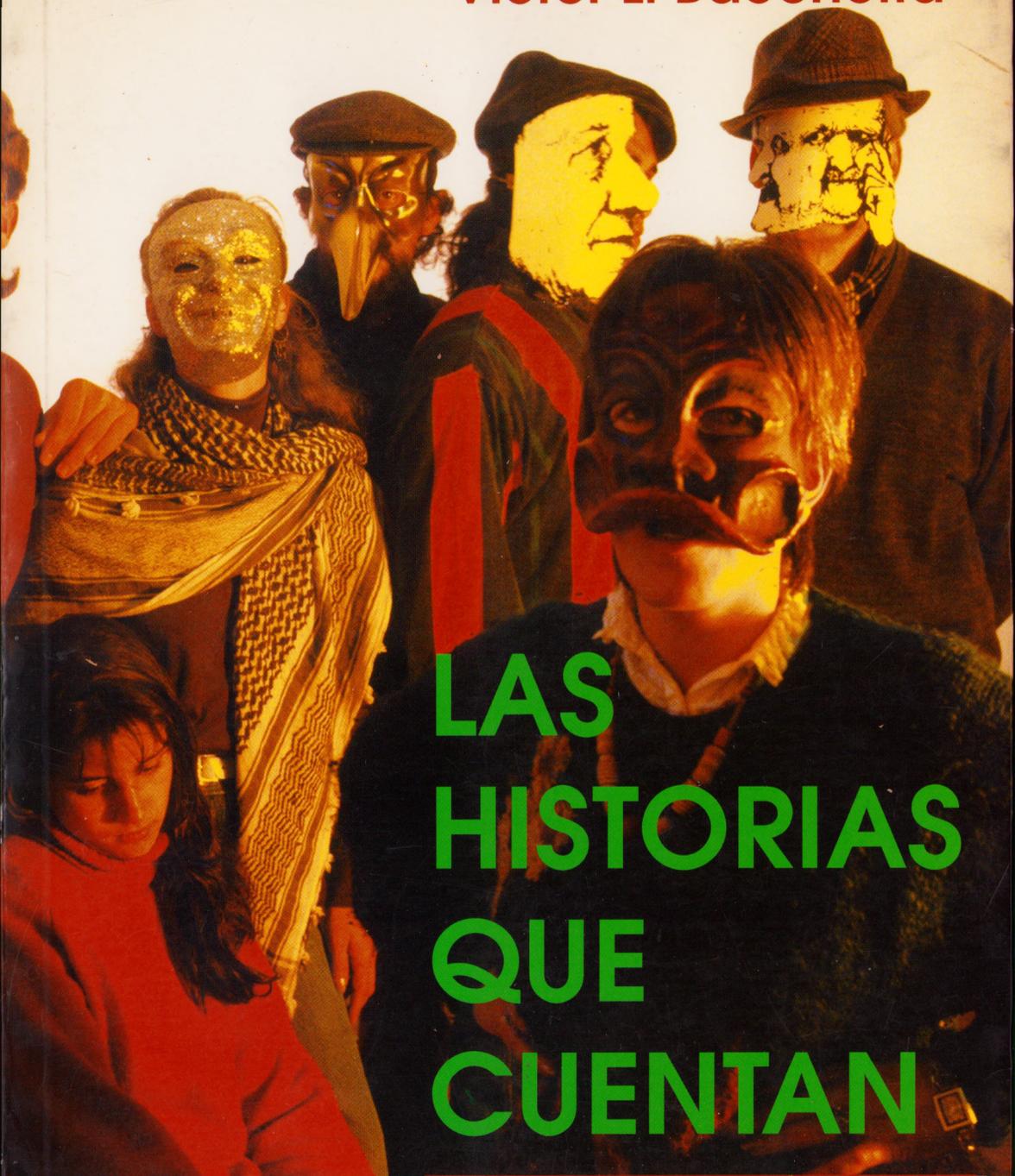


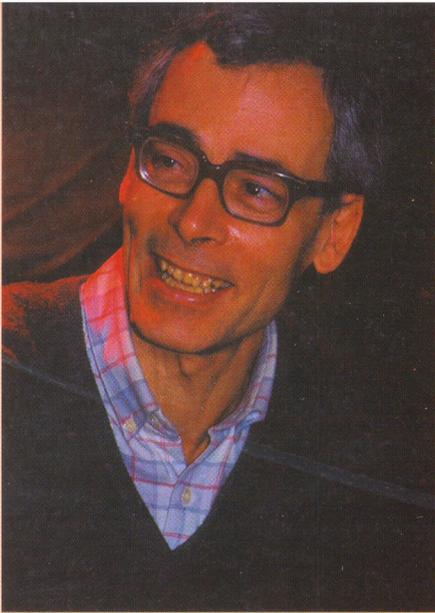
20 años después

Víctor L. Bacchetta



LAS HISTORIAS QUE CUENTAN

Testimonios para una
reflexión inconclusa



Víctor Leteo Bacchetta Grezzi

nació en Montevideo, Uruguay, en 1943. Dejó inconclusos los estudios de Ingeniería y, desde 1968 en adelante, se dedicó al periodismo. Trabajó en los diarios: "Extra", "De Frente" y "Ya"; fue colaborador de los semanarios: "Marcha", "Sur", y "Respuesta", hasta 1973. Entre 1974 y 1977 colaboró con las revistas: "Cuestionario" y "Crisis" de Buenos Aires, Argentina. Entre 1977 y 1979 integró la redacción de "Chile Informativo", boletín de los comités de solidaridad con la resistencia antidictatorial chilena. En 1982 fue colaborador del "Diario de Barcelona" de España; de los diarios: "Uno más Uno" y "Excelsior", y de las revistas "Cuadernos de Marcha" y "Territorios" de México. De 1983 en adelante fue corresponsal, en Brasil, de "Noticias Aliadas" de Perú, "Nueva Voz" de Suecia; "Latin American News Service", de Estados Unidos, "Sudsich" (Visión del Sur), de la radio DRS de Suiza, la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI) con sede en México; y "Brecha", de Uruguay. En 1986 y 1987 fue redactor y asistente de edición de "Cuadernos del Tercer Mundo", en Río de Janeiro.

sigue en segunda solapa...

20 años después

**LAS
HISTORIAS
QUE
CUENTAN**

**TESTIMONIOS PARA
UNA REFLEXIÓN INCONCLUSA**

Víctor L. Bacchetta

© Copyright. Víctor L. Bacchetta.

© Copyright. **Instituto del Tercer Mundo**, 1993.
Juan D. Jackson 1136, 11200 Montevideo, Uruguay.
Teléfonos: (598.2) 49 61 92
Fax: (598.2) 41 92 22
Correo electrónico: item@chasque.apc.org

Diseño: © Carlos Callero
Fotografías: © Carlos Amérigo
Máscara en primer plano: Enrique Lima
Máscaras dibujadas: © Eduardo Sartós

Todos los derechos reservados.

Cualquier reproducción total o parcial de este libro deberá contar con la previa autorización del autor.
Queda hecho el depósito que marca la ley.
Edición amparada al Art. 79 de la Ley 13.349 (Com. Papel).
Editado e impreso en Uruguay.

A Pablo y Sebastián

Introducción

En enero de 1974, me trasladé a la Argentina llevando conmigo unas tres carpetas repletas de boletines, volantes, recortes, apuntes, etc. Eran documentos reunidos por los G.A.U. durante la huelga general contra el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Se me había confiado la tarea de escribir una crónica sobre los acontecimientos de ese momento.

Un año después, el trabajo fue publicado en Buenos Aires por «Achaval Solo», bajo el título «Uruguay. Imperialismo y estrategia de liberación. Las enseñanzas de la huelga general» y la firma de Hugo Lustemberg. El título rimbombante fue una exigencia del editor, para darle mayor relevancia al texto, y la firma fue un producto de las circunstancias.

En aquellos momentos, los agentes de la dictadura uruguaya actuaban en Buenos Aires como si fuera su propia casa. Como yo iba a permanecer en la Argentina, se consideró conveniente que el libro fuera firmado con otro nombre. El seudónimo no lo permitían las leyes argentinas, por lo que la firma recayó en un compañero que estaba dejando el país.

El libro circuló mayormente en el exilio uruguayo y suscitó algunas duras polémicas con el Partido Comunista, que se dirigieron contra Lustemberg, hasta que se «descubrió» al verdadero autor. En realidad, no considero que el nombre del autor tuviera gran importancia, porque el texto reflejaba, en lo fundamental, la opinión de una organización política.

Claro que aún dentro de un mismo agrupamiento político siempre existen diferentes formas de encarar un problema y vaya si las había. Pero más allá de la visión particular de ese libro, creo que tuvo el mérito de reunir la más amplia información y documentación disponible en aquellos años sobre un momento clave de la historia uruguaya contemporánea.

Desde entonces hasta el presente, en especial después de 1985, se han publicado muchos trabajos acerca de ese período de la vida del país. Sin embargo, poco se agregó al conocimiento de lo ocurrido entre el 26 de junio y el 11 de julio de 1973, cuando la sociedad civil vio consumado el golpe de Estado y se jugó las últimas cartas para impedirlo.

Fue la prueba final de la verdad, para un país que, cada vez más, venía viviendo en la mentira. La mayoría de los representantes de los diferentes

sectores de la sociedad vieron adónde podía conducir ese proceso pero no creyeron que llegaría a tanto, sobre todo por tratarse del Uruguay. E incluso, cuando el terror llegó, creyeron que duraría poco.

En esos 15 o 16 días del 73 se condensaron diez años, o más, en donde el Uruguay venía enfrentando la mayor crisis de su historia. Simultánea con la crisis de América Latina, aunque con raíces y características propias. Esa crisis no se ha superado con los remedios puestos en práctica hasta hoy y su agravamiento amenaza ahora la identidad nacional.

No es posible vivir del pasado, pero es preciso conocerlo para encarar el futuro. El terror y el error que lo hizo posible tienen sus propios medios de negación. Si reconstruir la memoria es un requisito para la salud personal y social, romper los silencios de la historia es la condición para recuperar la salud de una nación y creer en un proyecto de país.

Este no es un ensayo político o histórico para exponer las ideas del autor. Es un aporte a la reconstrucción de algunos hechos decisivos de ese momento que han permanecido hasta hoy en la oscuridad. Optamos por hacerlo a partir del testimonio de sus protagonistas, para que la historia quedara abierta a la discusión. Por favor, un debate para aprender algo nuevo; no para juzgar a alguien o para reafirmar algunas ideas preconcebidas.

Los entrevistados tienen un denominador común: en ese momento: todos rechazaron el golpe de Estado. Tras 12 años de dictadura, la democracia es hoy un valor reafirmado. Pero un régimen autoritario no se explica sólo por el poder y la eficacia de los golpistas, sino también por las circunstancias de la sociedad que lo hicieron posible. Ningún sistema de gobierno es viable si no cuenta con un mínimo y sólido consenso social.

El momento resultó oportuno para plantear el tema, porque casi todos los interpelados estuvieron dispuestos a hablar. Primera constatación: son muy pocos los que optaron por seguir guardándose una opinión o un hecho que nos involucró a todos. Segunda constatación: los temas del pasado se unieron de manera directa, natural, con el presente y el futuro.

A través del relato, el lector percibirá que hay formas muy diferentes de vivir y contar después la misma historia. Nos hacemos responsables por la forma y la organización del texto. Nos comprometimos, en cambio, a dar con fidelidad las opiniones de los protagonistas. Estas historias no se quedarán aquí. Siguen definiendo el destino de este Uruguay.

Víctor L. Bacchetta

Agradecimientos:

- A todos los entrevistados, que dan sentido a este libro: Antonio Aduorián, Daniel Baldasari, Hugo Batalla, Jorge Batlle, Eugenio Bentaberry, Leopoldo Bruera, Gerónimo Cardoso, José Pedro Cardozo, Pablo Carlevaro, Hugo Cores, José D'Elía, Salvador Escobar, Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Forteza, Adolfo Gelsi Bidart, Ernesto Goggi, Federico Gomensoro, Washington Hourcade, Ignacio Huguet, Luis Iguiní, Alvaro Jaume, Raúl Lago, Jorge Landinelli, Víctor Licandro, Samuel Lichtensztein, Antonio Marchesano, José Luis Massera, Luz de Fuentes de Ossimani, Carlos Partelli, Carlos Julio Pereyra, Jaime Pérez, Américo Plá Rodríguez, Mario Plasencia, Eduardo Platero, Horacio Polla, Héctor Rodríguez, Matilde R. de Gutierrez Ruiz, Luis Romero, Víctor Semproni, Líber Seregni, Jorge Suarez, Juan Angel Toledo, Ramón Valdés Costa, Amilcar Vasconcellos, Alembert Vaz, Eduardo Viera y Rúben Villaverde

(no aceptaron la entrevista solicitada: Félix Díaz, Carlos García, Juan Pivel Devoto, Julio M. Sanguinetti, Walter Santoro, Jorge Sapelli y Vladimir Turiansky)

- A Alberto Couriel, Manuel Flores Silva y Pedro Seré, quienes me ayudaron, con sus experiencias y opiniones, a interpretar mejor hechos y actitudes de protagonistas a los cuales estuvieron muy cercanos.

- A "Olguita" Senatore, sin cuya dedicación y tenacidad para obtener las entrevistas, sus observaciones críticas al trabajo y su calor humano, no creo que hubiera podido ser capaz de concluirlo.

- A mis padres y los amigos Roberto, Cristina, Nené, Guillermo, Elina, Alvaro, Magola, Brenda, Dieter, Daniel y Carlos, que me dieron el apoyo y el afecto para confiar en que el esfuerzo podía valer la pena.

INDICE

Primera Parte	
LA HISTORIA CONTADA	13
Capítulo I Las últimas etapas del golpe	15
Capítulo II Velando el cadáver de la República	25
Capítulo III ¿Era posible una resistencia armada?	31
Capítulo IV La izquierda y los sindicatos	39
Capítulo V La decisión del movimiento sindical	45
Capítulo VI La medida del enfrentamiento	51
Capítulo VII "Diálogo", conversaciones y silencio	61
Capítulo VIII La guerra del Partido Nacional	71
Capítulo IX Colorados, liberales y realistas	77
Capítulo X Los estudiantes y la Universidad	83
Capítulo XI La conciliación imposible	93
Segunda Parte	
CRONICA DE LOS HECHOS	97
Tercera Parte	
REFLEXIONES	157
Capítulo I El levantamiento de la Huelga General	159
Capítulo II Reflexiones de hoy, por el ayer y el mañana	165



Primera Parte

LA HISTORIA CONTADA

Las últimas etapas del golpe

«No es un rayo en un cielo sereno y no caben ahora las sorpresas que algunos manifiestan y las tardías admoniciones que otros desparrraman. Tampoco y menos la tolerancia o aceptación del hecho consumado, que en ciertos coqueteadores les asoma por arriba de la ropa» (Carlos Quijano, «MARCHA», 9/2/1973)

El 19 de enero de 1973, la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas emitió una declaración pública en la cual denunciaba la existencia de graves irregularidades en la Junta Departamental de Montevideo. En el mismo comunicado, se lamentaba la lentitud de procedimientos del Poder Ejecutivo, o sea la Presidencia, en la investigación y eventual sanción de los responsables de las referidas irregularidades, a pesar de las reiteradas advertencias hechas con anterioridad por los mandos castrenses.

La actitud de los jefes militares constituía un acto de insubordinación hacia su mando natural y supremo, el presidente de la República, así como una clara violación de la Constitución, por tratarse de una ingerencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden político que les estaba vedada por la Ley Fundamental. Por otra parte, las irregularidades señaladas no eran novedosas; habían sido denunciadas con anterioridad, sin éxito alguno, por los representantes del Frente Amplio en la Junta Departamental.

Esta vez, la reacción del oficialismo fue inmediata; reacción de susto, sin cuestionar la ilegalidad del planteo militar. Se nombró rápidamente una Comisión Investigadora, mientras la dirección de los partidos políticos se comprometía a efectuar en su seno las depuraciones que fueran necesarias. La comisión confirmó, entre otras irregularidades, designaciones ilegales de funcionarios, concesión fraudulenta de obras y utilización de rubros de la comuna para cubrir los gastos personales de los representantes.

La mayoría de los representantes implicados en las irregularidades pertenecían al Partido Colorado, en el gobierno, en especial, al sector del ex-presidente Pacheco Areco y de su sucesor, Juan María Bordaberry. Como

resultado de la operación, un triunfo político y moral de los militares, que los habilitaba para dar nuevos pasos en ese plano. En los días siguientes, el senador colorado Amilcar Vasconcellos denunció, en una Carta Abierta al presidente Bordaberry, la existencia de una conspiración militar.

La respuesta del presidente, también pública, el 2 de febrero, tuvo un tono tranquilizador. Bordaberry pretendía dar la imagen de que no creía en tales alarmas y que controlaba completamente la situación. No obstante, se supo que los jefes militares querían dar su respuesta a Vasconcellos y que Bordaberry alegaba que no era necesario. El ministro de Defensa, Armando R. Malet, abogado y político que tenía la confianza de los militares, renunció el 7 de febrero y en su lugar fue designado el general Francese.

Francese se había desempeñado en esa misma cartera en los gobiernos de Gestido y Pacheco Areco. En este último también ocupó el Ministerio del Interior. Era un militar de confianza de Bordaberry, decidido a mandar y a hacerse respetar, lo que ponía en peligro el pacto de no alteración de los mandos militares, que el ministro saliente había respetado desde noviembre del año anterior. Al día siguiente de asumir Francese, el comandante en jefe del Ejército, general César Martínez, debió pedir el retiro.

En ese mismo día, la prensa local había publicado la respuesta de los comandantes en jefe a la Carta Abierta de Vasconcellos, en la que aquellos anunciaban a la vez su desconocimiento de la autoridad del nuevo ministro de Defensa. La declaración justificaba la nueva insubordinación alegando que las fuerzas armadas no estaban dispuestas a seguir cumpliendo el papel de *«brazo armado de grupos e intereses económicos y/o políticos»*. La crisis institucional estaba desatada nuevamente y era inocultable.

Lo que la mayoría de los jefes militares no estaba dispuesta a seguir era el camino del general Martínez. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, al mando del coronel Néstor Bolentini, se declararon en rebeldía y exigieron la renuncia de Francese. En un primer momento, la Marina no acompañó a las otras fuerzas y ocupó el puerto y la Ciudad Vieja de la Capital. Por cadena de radio y televisión, Bordaberry convocó a la población a *«la defensa de las instituciones»* y afirmó que mantendría al ministro en su cargo.

El Frente Amplio fijó su posición ante la crisis el 9 de febrero, en un acto muy concurrido en el barrio de La Unión. El presidente del frente hizo una reseña del proceso de deterioro institucional alentado por los gobiernos de Pacheco y Bordaberry, para concluir que el llamado presidencial carecía de valor político. *«La renuncia del Sr. Bordaberry abriría una perspectiva de diálogo»*, concluyó Seregni, un diálogo que haría viable, según sus palabras, *«la interacción fecunda*

entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la Patria en decadencia.

El Frente Amplio no explicitó en ese momento si buscaba la sustitución de Bordaberry por los carriles constitucionales, con lo que reforzó la idea de que estaba dando crédito a la sublevación militar. La mayoría de los partidos frentistas decidió privilegiar las definiciones programáticas y de clase -la contradicción fundamental oligarquía-pueblo-, en desmedro de la legalidad democrática, que estimaba reducida a algo meramente «formal».

Unos días antes de la crisis, la CNT había llamado a permanecer alerta para aplicar la decisión de huelga general en caso de golpe de Estado. Cuando la insubordinación militar fue un hecho, la dirección de la central consideró que la medida no era apropiada en ese momento. En forma similar al Frente Amplio, la CNT entendió que la acción sindical sería interpretada como un apoyo al gobierno oligárquico de Bordaberry, a quien consideraba principal responsable del «vaciamiento» de las instituciones del país.

Los llamados a la militancia del Frente Amplio -para que permaneciera alerta y movilizada en sus organismos de base, sindicatos, etc.-, no tuvieron resultados prácticos. El Parlamento estaba en receso, pero ni siquiera tuvo quorum la Comisión Permanente. Los golpistas dieron a conocer entonces los Comunicados 4 y 7, con postulados políticos y programáticos que sirvieron para aumentar la confusión entre los partidos de la izquierda, y permitieron jugar más a su favor la pasividad general de la población. De esta manera, la crisis se dirimió exclusivamente entre sus actores iniciales.

El Comunicado Nº 4, emitido el 9 de febrero, proclamó el compromiso de las Fuerzas Armadas de fomentar las exportaciones, moralizar el servicio diplomático, eliminar la «*deuda externa opresiva*» y erradicar el desempleo, atacar la corrupción y los ilícitos económicos, racionalizar los servicios públicos, efectuar una redistribución de la tierra, promover la creación de nuevas fuentes de trabajo, eliminar la «*cuota política*» en la provisión de los cargos públicos, aumentar y redistribuir el ingreso nacional, combatir los monopolios, dar apoyo crediticio a sectores prioritarios, sobre todo medios y pequeños empresarios y cooperativas, controlar la evasión fiscal y la inflación, hasta «*superar las causas estructurales y profundas*». Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas se comprometían a «*extirpar todas las formas de subversión*» y a intervenir en todo organismo o actividades relacionadas con la defensa de la «*seguridad y soberanía nacional*».

Para alcanzar tales postulados, las Fuerzas Armadas se ajustarían, de acuerdo con la proclama, a los siguientes preceptos:

«a) Manteniendo permanentemente total cohesión en las FF.AA., vigilar la conducción Nacional en procura de los Objetivos fijados, gravitando en las decisiones que afectan al desarrollo y la seguridad, mediante el mantenimiento de un estrecho contacto con el Poder Ejecutivo, y la presentación oportuna a través del planteamiento de la posición que las FF.AA. adopten en cada caso;

b) Manteniendo a las FF.AA. al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad a poner en peligro la seguridad. Previa anuencia del Poder Ejecutivo, iniciar una política de realizaciones eficaces y concretas, apoyando o tomando a su cargo planes de desarrollo e interés nacional, aprovechando sus capacidades técnico-profesionales»;

c) Proceder en todo momento de manera tal de consolidar los ideales Democrático Republicanos en el seno de toda la Población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida». (en esos años, el marxismo-leninismo era la base doctrinaria fundamental y explícita de la mayor parte de la izquierda uruguaya).

El Comunicado Nº 7 fue emitido el día siguiente para salvar omisiones del Nº 4, como la de no haber mencionado *«la preservación de la soberanía y la seguridad del Estado»*, que era precisamente la atribución constitucional específica de las Fuerzas Armadas. La proclama estableció que *«las FF.AA. ni se adhieren ni ajustan sus esquemas mentales a ninguna filosofía política partidaria determinada»* y declaró la aspiración de *«crear y consolidar en todos los uruguayos la MISTICA DE LA ORIENTALIDAD»*, cuyas facetas básicas definió como: el patriotismo, la austeridad, el desinterés, la generosidad, la honradez, la abnegación y la firmeza de carácter (sic).

La convocatoria del presidente a defender las instituciones congregó menos de 200 personas frente a la Casa de Gobierno. Los golpistas fueron ganando posiciones, hasta lograr la renuncia del comandante en jefe de la Marina, y Bordaberry terminó negociando un nuevo acuerdo con las Fuerzas Armadas. En la base aérea militar de Boisso Lanza, el presidente pactó la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y la designación de nuevos titulares en las carteras de Defensa e Interior.

Después de la crisis de febrero, en la izquierda uruguaya se desarrolló una polémica sobre el significado de los comunicados 4 y 7, tomados como una expresión de la posición de las Fuerzas Armadas. El Partido Comunista y otros sectores moderados de la izquierda prefirieron dar mayor importancia al Comunicado Nº 4, para destacar que sus propuestas coincidían en muchos aspectos con las del Frente Amplio y la CNT. Los sectores más radicales, en

cambio, desconfiaban del sentido más demagógico que real de tales proclamas e insistieron en desarrollar la movilización popular, para obligar al gobierno y a los militares a definirse en concreto.

En la Plenaria Nacional de Delegados de la CNT, convocada ese mes, el dirigente textil Adrián Montañéz presentó una propuesta de Plataforma de Acción Inmediata, acompañada por un plan de movilización creciente y en ofensiva de todo el movimiento sindical. La tendencia mayoritaria, orientada por el Partido Comunista, rechazó esta proposición, con el argumento de que era necesario luchar por todo el Programa y no sólo por algunas medidas del mismo. Si la CNT debía o no desarrollar un Plan de Lucha por aspectos de su Programa de Soluciones a la Crisis fue uno de los temas centrales de las discusiones de los sindicatos entre 1968 y 1973.

En cuanto a la resolución de huelga general y ocupación de los lugares de trabajo, la Mesa Representativa Nacional Ampliada de la CNT puntualizó, el 15 de febrero, que *«tal acción se habrá de aplicar en las condiciones señaladas en dichas resoluciones en la misma medida en que contribuya a avanzar en favor de los intereses populares y en el cumplimiento del Programa de Soluciones a la crisis y no para colocar a la clase obrera al servicio de los intereses de la oligarquía en el poder»*. Hasta ese momento, los Congresos de la CNT se referían al *«golpe de Estado»* a secas, sin hacer distinciones políticas o de clase sobre el golpe en sí.

El general Seregni dirigió, el 17 de febrero, una reunión de militantes de dirección intermedia, para definir las características de las acciones a desarrollar en los meses siguientes. *«El conflicto entre el pachequismo y los militares no está dirimido. Es sólo la primera fisura ... El poder pachequista-pactista tiene la confianza de amainar pronto los aires de fronda que soplan en las Fuerzas Armadas ... La línea de acción que se ha trazado el Frente Amplio consiste en prestar su **apoyo crítico** a todas las instancias ... que beneficien la causa popular»*, afirmó el dirigente.

«Cualquier solución necesita del apoyo del pueblo -agregó Seregni, en la misma intervención-, de un pueblo conciente y alerta, capaz de decidir su propio destino». «No puede haber soluciones nacionales sin que el pueblo organizado participe y decida», concluyó, pero las movilizaciones frentistas no sufrieron grandes cambios, por el peso en su seno de los sectores que daban un margen de crédito a las proclamas militares.

El 1º de marzo, al cumplirse un año de su gobierno, Bordaberry divulgó el *«Plan de Desarrollo»* de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El plan hacía un diagnóstico de la situación uruguaya y enumeraba las medidas para enfrentarla,

coincidentes en rigor con las recetas del FMI. Se expresaba el propósito de aplicar una política de privatización del aparato estatal y de apertura al capital extranjero. Al conocerse que el Poder Ejecutivo había vendido en secreto, en 1972, un quinto de las reservas de oro del país, para hacer frente a obligaciones de la deuda externa, se produjeron diversas reacciones políticas de condena al gobierno Bordaberry..

En forma paralela, por orientación de la dirección de la CNT, diversos sindicatos comenzaron a llevar sus problemas a las dependencias militares. Según esas directivas, los conflictos parciales debían ser planteados en el cuartel de la zona y los generales en Boisso Lanza o el ESMACO (Estado Mayor Conjunto). *«Una delegación gremial de la Administración Autónoma y Descentralizada presentó una nota a la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional pidiendo ser escuchada para exponer sus puntos de vista sobre las irregularidades que se están investigando en algunos entes autónomos»*, informó «El Día», en su edición del 4 de marzo.

«Entendemos defender con esto el patrimonio de los Entes y con ello la seguridad nacional, dijeron los gestionantes de la audiencia», agregaba la noticia divulgada por el matutino, sin emitir ningún comentario. En realidad, se trataba de un hecho inédito en la historia uruguaya y una de las formas como algunos sectores de izquierda intentaron influir en la posición de las fuerzas armadas. En los países latinoamericanos donde las dictaduras eran frecuentes - como en Argentina, por ejemplo-, ésto era conocido como *«ir a golpear a la puerta de los cuarteles»*. Una actitud de los civiles que había precedido invariablemente al golpe de Estado.

Con la presencia de la plana mayor de las Fuerzas Armadas, el 10 de marzo, se divulgó por cadena de radio y televisión un comunicado que, tras aludir a *«grupos privilegiados»*, sin nombrarlos, realizó un ataque general a los representantes políticos. En esos mismos días, Bordaberry divulga una carta abierta a Ferreira Aldunate, cargada de acusaciones, y recurre a la televisión para realizar otro ataque a la CNT.

El 28 de marzo, una delegación de la CNT se entrevista con la Junta de Comandantes en Jefe de las FFAA, informando ,luego, por medio de una declaración pública. Según la CNT, la reunión se desarrolló en términos cordiales, expresándose coincidencias y distintos puntos de vista sobre la situación nacional. El 9 de abril, la Junta de Comandante en Jefe emite un comunicado en el cual aclara que, a pesar de las coincidencias manifestadas por la CNT con los Comunicados 4 y 7, *«los caminos preconizados por ambas instituciones son irreconciliables»*.

La declaración de los comandantes agrega que *«... la CNT recurre para lograr sus conquistas al arbitrio de paros y huelgas», «no se le reconoce (a la central) facultad política de exigir y/o presionar el cambio irregular de las autoridades constitucionalmente elegidas o legalmente designadas ...»,* y concluye que *«si el poder político entendiera conveniente promulgar una ley de organización sindical, no haría otra cosa que cumplir con los mandatos establecidos en los artículos 53 y 57 de la Constitución».*

La CNT responde al día siguiente. La declaración de la central reafirma que *«los trabajadores no se consideran ajenos a ninguno de los problemas sociales y políticos que conmueven al país»* y defiende la legitimidad de *«el reclamo de la renuncia de Bordaberry para abrir, a través de los mecanismos constitucionales correspondientes, tal como se precisó en la reunión, y no por vías «irregulares», un camino para el reencuentro de los orientales».* La central precisa asimismo que en la reunión con los comandantes en jefe no se tocó el tema de la reglamentación sindical.

El 25 de abril ingresa al Parlamento el pedido del Poder Ejecutivo de desafuero del senador Enrique Erro, basado en un expediente de la Justicia Militar que pide su procesamiento por presunta vinculación del legislador con el MLN (Tupamaros).

Mientras tanto, en los sindicatos se discutía el reclamo de un nuevo aumento general de salarios y la respuesta ante las intenciones anunciadas de reglamentar el derecho de huelga. Desde el comienzo del año, versiones periodísticas y extraoficiales habían hecho saber el propósito del gobierno de poner en marcha la reglamentación sindical. También trascendió en esos días la realización de una reunión entre algunos altos mandos militares y empresarios e inversionistas extranjeros, miembros del grupo Business International, en donde se había analizado ese tema.

Versiones posteriores confirmaron, inclusive, la intención del Poder Ejecutivo de implantar la reglamentación sindical por decreto, en forma paralela a la discusión parlamentaria del proyecto de ley. Más allá de la posición tradicional del movimiento sindical, opuesta a cualquier tipo de limitación de los derechos constitucionales, los debates se centraron en torno a las medidas de lucha a adoptar según las distintas alternativas que siguiera el proyecto. Y aquí resurgieron las divergencias.

Las dos posiciones en juego dentro del movimiento sindical no habían variado sustancialmente, pero a lo largo de 1972 y en el transcurso de 1973, había crecido considerablemente el grupo de sindicatos que propugnaba un cambio en las orientaciones de la central. Los militantes sindicales de la Corriente

l'frenteamplista y de la Resistencia Obrero-Estudiantil, con un origen común en la Tendencia Combativa de los años 60, aplicaban métodos más democráticos de consulta y organización de las bases sindicales, que redundaban en una participación mayor de los trabajadores en las decisiones y en un respaldo más sólido a sus direcciones.

Los sectores combativos consideraban la implantación por decreto de la reglamentación sindical como «*situación equivalente*» al golpe de Estado y, en consecuencia, proponían responder con la huelga general. La mayoría de la dirección de la CNT era partidaria, en cambio de realizar un paro general en calidad de protesta. «*Un saludo a la bandera*», fue el comentario irónico de un sindicalista. La polémica sindical se agravó inclusive porque la dirección de la central quiso conmemorar el 1º de Mayo en tono festivo, con la presencia de carros alegóricos a la actividad de cada gremio.

De cualquier manera, los acontecimientos políticos de mayo y junio se centraron en el pedido de desafuero de Erro. En sucesivas y prolongadas sesiones del Senado, legisladores de los distintos sectores políticos fueron demoliendo la fundamentación del pedido y las «pruebas» presentadas por el Poder Ejecutivo. Cuando los senadores solicitaron una entrevista con las personas detenidas cuyas declaraciones involucraban a Erro, Bordaberry se negó alegando que la Justicia Militar no lo permitía.

La Justicia Militar dijo que sólo se podían hacer preguntas por escrito y no interrogatorios directos. Poco después, permitió que una comisión de senadores viera a Amodio Pérez. El ex-dirigente tupamaro había pasado a colaborar con las Fuerzas Armadas y era uno de los acusadores de Erro en el expediente militar. Tras una serie de incidentes, debido a las restricciones impuestas a los senadores en la entrevista con Amodio Pérez, el senador Zelmar Michelini decidió retirarse del encuentro organizado en el ESMACO, alegando total falta de garantías en el procedimiento.

La Junta de Comandantes en Jefe reiteró, pocos días después, el pedido de desafuero de Erro, con nuevos ataques al Parlamento. La Unión Nacional Reeleccionista (UNR), sector colorado liderado por Pacheco Areco, planteó por su parte el inicio de un «juicio político» a Erro. El 24 de mayo, muere por torturas, en un cuartel de Durazno, Oscar Felipe Mendieta. El día 31, el Poder Ejecutivo implanta Medidas Prontas de Seguridad, al vencer la suspensión de garantías concedida por la Asamblea General.

El 21 de junio, la Cámara de Diputados rechazó, por 48 votos en 49 presentes, el juicio político contra el senador Erro. Al haber declinado el Senado su competencia para juzgar el caso, quedaron agotadas las vías constitucionales

en vigor. A partir de ese momento, crecen los rumores de que los mandos militares están dispuestos a detener a Erro, a pesar de las decisiones del Parlamento. En los días siguientes se producen sucesivas entrevistas entre Bordaberry y los jefes castrenses. Desde el 26 de junio, trasciende la inminencia del golpe de Estado.



Velando el cadáver de la República

En la noche del 26 de junio, desde el Palacio Legislativo se hicieron los últimos intentos para detener el golpe de Estado. El senador Alembert Vaz, del sector nacionalista Por la Patria, recuerda haber concertado con el vice-presidente de la República, Jorge Sapelli, una conversación con el ministro del Interior. El coronel Bolentini aceptó concurrir a la sede del Parlamento, pero indagado sobre la posibilidad de restablecer un diálogo, contestó que el juego estaba cerrado, que era imposible volver atrás.

Cuando trascendió en el Parlamento la inminencia de su disolución, el Senado interrumpió la sesión que estaba desarrollando ese día. Confirmada la noticia, en clima de tensión y nerviosismo, se decidió realizar una nueva convocatoria de la Cámara Alta, para las 22 y 30 horas, suscripta por los senadores F. Rodríguez Camusso, D. Ortiz, C. J. Pereyra, J. Jaso Anchorena, A. Vasconcellos, W. Ferreira Aldunate, A. Vaz, E. Paz Aguirre y E. Rodríguez, destinada a dejar sentada la posición sobre los hechos.

La sesión no podía ser convocada con ese temario, así que se eligió el mismo por el cual el Senado había quedado sin quorum algunas horas antes. Muchos senadores habían dejado un teléfono para que se los llamara al estar por comenzar la sesión. El senador del PDC Plá Rodríguez, suplente de Juan Pablo Terra, dice que se impresionó al entrar en la sala del Senado; aquello le pareció *«un velatorio, el velatorio de la República»*.

Según el relato del senador demócrata-cristiano, en el recinto de la Cámara Alta se había congregado unos sesenta diputados, parados en un semicírculo detrás de los sillones de los senadores. Todos en silencio, al igual que algunos asistentes desde las barras. «Era un silencio sepulcral», dice Plá, porque se sabía que, a esa altura, nada se podía hacer para impedir el avasallamiento de las instituciones democráticas.

A las 0 horas y 25 minutos del 27 se logró quorum, gracias al senador Caminillo Mederos, quien asistió enfermo, contra las indicaciones de su médico. Comenzó así la 31a. Sesión Ordinaria-Extraordinaria, que sería la última de la XLI Legislatura. Asumió la Presidencia el senador Eduardo Paz Aguirre, por ausencia del titular, Jorge Sapelli, quien comunicó que estaba esperando una llamada del presidente de la República.

Presentes los senadores Costanzo, Ferreira Aldunate, Grauert, Hierro Gambardella, Jaso Anchorena, Mederos, Ortiz, Paz Aguirre, Pereyra, Plá Rodríguez, Rodríguez Camusso, Rodríguez, Santoro, Vasconcellos, Vaz y Zabalza, el presidente dio la palabra a Carlos Julio Pereyra, porque de acuerdo con la convocatoria formal, proseguía una exposición del senador rochense sobre «algunos aspectos de la política de Ancap». El primero en pedirle una interrupción fue Wilson Ferreira Aldunate.

El dirigente de Por la Patria, sector mayoritario del Partido Nacional, dijo que era casi noticia de dominio público lo que calificó como «un triste proceso que finalizaría con la violación, por parte de Juan María Bordaberry, de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a las libertades públicas. Si eso llegara a confirmarse, como mucho tememos que ocurra, habría que decir «como es corriente en estos casos» que a Bordaberry y sus cómplices los juzgará la Historia».

«Se ello llegara a confirmarse «reiteró «el Wilson», como era llamado popularmente el líder del nacionalismo», Sr. Presidente, nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el Sr. Bordaberry, enemigo de su pueblo». Ferreira Aldunate concluyó: «Los señores senadores me permitirán ... y perdonarán que yo, antes de retirarme de Sala, arroje al rostro de los autores de este atentado, el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República: ¡el Partido Nacional! ¡Viva el Partido Nacional!».

Plá Rodríguez recuerda que, al comenzar la sesión, preguntó a Ferreira Aldunate cuál era su posición y éste le dijo que iría a «declarar la guerra al gobierno, por cielo, mar y tierra», pero confiesa que el discurso del líder nacionalista lo decepcionó en parte. «Si en lugar de vivir al partido hubiera dicho «¡Viva la democracia!» no tengo duda que, por su prestigio, todos se hubieran puesto de pie para aplaudirlo», explica.

Luis Hierro Gambardella, por la Lista 15 del Partido Colorado, expresó a continuación: «Yo que inicié mi vida cívica luchando contra una dictadura (se refería al golpe del ex-presidente Gabriel Terra, en 1933) y quizá la concluya esta noche luchando contra otra, invoco a Baltasar Brum y arrojo a la sombra cobarde

de los tiranos la imagen siempre luminosa de Baltasar Brum como nuestro compromiso con la historia de la Nación, como nuestro mandato, como nuestras ganas de vivir y de morir».

«También le decimos, a quien quiera ser tirano, que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Brum, nuestra lucha, nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra sangre y con nuestra muerte, si ello fuera necesario», finalizó Hierro Gambardella. El senador Carlos Julio Pereyra, el dueño formal de la palabra, decidió intervenir en este momento.

El dirigente del Movimiento Nacional de Rocha expresó: «Creo que la libertad es tan eterna como el hombre y tan inmortal como las conquistas espirituales que el hombre ha conseguido a través de toda su evolución. En consecuencia, quiero señalar mi profunda fe en el pleno resurgimiento de las libertades públicas, porque el pueblo uruguayo no sabe vivir sin ellas». Y concluyó, siempre en medio de aplausos: «Por ello no podrán apagar la luz de la libertad ninguno de los tiranos o aspirantes a tiranos que esta noche están tramando la muerte de la República. Ella no morirá».

A continuación intervino el senador nacionalista Zabalza, siempre en términos de dura condena a los golpistas, encamados en Bordaberry y sus socios, sin mencionar concretamente a las Fuerzas Armadas. «En tanto se desarrollaba la sesión, llegaban rumores de posibles detenciones: Wilson Ferreira, Vasconcellos, Enrique Rodríguez, Juan Pablo Terra, Batalla, Carlos Julio Pereyra, etc.», explica el propio Pereyra, quien acordó con Wilson que «si salíamos del país- nos encontraríamos en Buenos Aires».

Ferreira Aldunate hizo un intento de irse del lugar, frenado por algunos colegas, con el argumento de que la sesión quedaba sin quorum. En un primer momento, el líder de Por la Patria permaneció, de pie, mezclado entre los diputados, pero algunos minutos después, se retiró igual, seguido por Carlos Julio Pereyra. Los dos principales dirigentes del nacionalismo salieron con la determinación de dejar el país. El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, de Por la Patria, esa noche entró en la clandestinidad y tres días después viajó también hacia Buenos Aires.

Los funcionarios auxiliares del Senado advirtieron al presidente que no había quorum para seguir la sesión. Se produjo cierto nerviosismo, porque era evidente que no había número suficiente. «Yo cuento que hay quorum, ¡así que se acabó!», declaró Paz Aguirre, haciendo caso omiso de la formalidad. De ahí en adelante, en rigor, la sesión extraordinaria había terminado, pero todavía quedaban senadores sin pronunciarse

Tomó la palabra Amilcar Vasconcellos, principal responsable de las denuncias hechas en el Parlamento sobre los propósitos golpistas de los militares. El dirigente colorado se refirió en forma explícita a los rumores sobre su posible detención. «Quiero decir -comenzó el senador-, que hago responsable, de hoy para siempre, a todos los que intervengan en esto, de la menor arbitrariedad que cometan contra mí. Nací en la frontera y soy hombre que no olvida agravios y que sé devolverlos».

«Cosa curiosa es que quienes se ofendieron y se agraviaron hace poco porque dijéramos que estaban preparando en la sombra estos hechos (...) lleguen a este término de confirmación pública (...) de que todos aquellos motivos presentes de agravio, no eran otra cosa que la máscara con que pretendían tapar sus verdaderas intenciones», agregó Vasconcellos, para terminar en forma semejante a Ferreira con «un grito que es de paz, pero también de guerra, el inmortal de: ¡Viva Batlle!».

Después de Rodríguez Camusso, Ortiz y Santoro, el senador Enrique Rodríguez, expresó: «Suena ridículo que, según se anuncia en el decreto que pasará a la historia de la ignominia y, seguramente también, de la ignorancia de los acontecimientos de hoy día en nuestro país, se diga que estas medidas se basarían en una pretendida omisión del Parlamento de no se sabe qué deberes de genuflexión frente al Poder Ejecutivo, porque a éste se le había ocurrido que determinados legisladores debían ser despojados de sus fueros».

El dirigente del Partido Comunista añadió: «nunca podrán demostrar que el Parlamento es el responsable de la tragedia que vive el país, de la inestabilidad política, del surgimiento de la sedición». Rodríguez finalizó señalando que «en este momento podemos y debemos unirnos todos en este problema fundamental (...) Nadie sabe lo que puede esperarnos cuando salgamos del Parlamento y ya no tengamos inmunidades parlamentarias que, por otra parte, nunca nos han preocupado demasiado. Nos preocupa el hecho de que se ha vulnerado la democracia en uno de sus instrumentos esenciales en el régimen en que vivimos ...».

Una intervención singular fue la del senador Jaso Anchorena, pues había ingresado a la Cámara ese día, en lugar de Washington Beltrán. «Hace muy pocas horas hemos prestado juramento incorporándonos a este Alto Cuerpo y hemos prometido defender la Constitución y la ley. Pocas horas han pasado, pero no por pocas menos duras y dolorosas. En estos momentos, liberados del Reglamento y de todo protocolo, sólo queremos reiterar el juramento de defender las instituciones porque, en definitiva, no hemos sido ungidos, por la ciudadanía popular, para otra cosa».

Luego de las intervenciones de Alembert Vaz, Plá Rodríguez, Mederos, Costanzo y Grauert, Paz Aguirre pidió su turno. «Tengo conciencia de que ésta es una sesión histórica y muchos la recordarán en el transcurso de las horas oscuras que agobian a la Nación. Todo el pueblo uruguayo la recordará cuando este Parlamento por sobre las efímeras sombras de los golpistas reabra sus puertas, como sin duda alguna lo hará, para dar paso a los diputados y senadores, nosotros u otros, que retomen con la bandera indoblegable de la libertad, la expresión de un pueblo que es único e intransferible dueño de su destino», dijo el presidente del acto.

La reunión del Senado se dio por terminada a la 1 y 40 minutos del 27 de junio. Legisladores, asesores y espectadores abandonaron el Palacio sin ser molestados. El contingente militar que arribó para hacerse cargo del Parlamento, encabezado por los generales Cristi y Alvarez, lo hizo algunas horas después. De acuerdo con una versión que circuló desde entonces, los interventores buscaron con afán, pero sin éxito, la reserva de «whisky» y los «bulines», que revelarían la corrupción de la clase política uruguaya y darían una justificación más a los propósitos del golpe militar.



¿Era posible una resistencia armada?

Desde 1964 estuvo planteada la posibilidad de un golpe militar en el Uruguay y desde entonces se hicieron contactos, coordinaciones y planes, para defender las instituciones democráticas con algún tipo de resistencia armada. Hasta 1968 no hubo peligro real de golpe de Estado, pero desde la renuncia del general Líber Seregni, jefe de la Región Militar Nº 1, seguida por la de otros altos oficiales de gran prestigio, el avance del golpismo dentro de las fuerzas armadas parece ser inexorable.

Las fuertes tensiones políticas desatadas en la campaña electoral de 1971 hicieron que grupos ideológicos muy dispares -militares en actividad, el MLN y el Partido Comunista-, aceptaran unir sus fuerzas para impedir un eventual intento de desconocer el resultado de las urnas. El «plan de 1971» llegó a ponerse en marcha pero las circunstancias que lo habían justificado no se produjeron. Algunos de sus protagonistas revelan hoy aspectos de ese plan y dan sus impresiones sobre su eventual eficacia.

¿De ahí en adelante, qué pasó? En este capítulo intentamos, sobre todo, responder a esa pregunta, para dar una idea de la evolución de las fuerzas en el plano militar y su situación real en la fase final del golpe de Estado.

Los sectores militares legalistas

Para explicar el origen del golpismo en las fuerzas armadas uruguayas, el general Líber Seregni se remonta a los años 50, al final del gobierno de Luis Batlle. «*Se había generado un fuerte sentimiento anti-batllista*», dice Seregni, quien como sub-jefe del Estado Mayor del Ejército tuvo a su cargo la ceremonia de trasmisión del mando en 1959. «*Corrieron rumores de que el gobierno no entre-*

garía el poder y, a pesar de los desmentidos, hubo sectores que participaron en el desfile con armas cargadas», agrega.

El general Mario Aguerrondo fue la figura emblemática de ese grupo, al que se asociaron nombres como Alberto Ballestrino, Julio Vadora, Esteban Cristi, Gregorio Alvarez y los hermanos Zubía. «Blancos» y de «ultraderecha», en un Ejército «colorado» y «legalista», parecía difícil que pudieran llegar a posiciones determinantes. Algunos de ellos adquirieron notoriedad en 1964 por participar en una reunión con empresarios donde se discutió el golpe de Estado, pero el incidente no tuvo consecuencias inmediatas.

El gobierno de Pacheco Areco desencadenó en 1968 un enfrentamiento con los sindicatos, los estudiantes, los partidos de izquierda y la guerrilla, que lo llevó a cuestionar cada vez más la legalidad vigente. El Parlamento y las Fuerzas Armadas resistieron al inicio este cambio. El Poder Ejecutivo pasó a gobernar por decreto, que requería mayorías legislativas especiales para anular sus medidas. Paralelamente, el presidente buscó involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas populares.

Identificados con la legalidad, los mandos militares resistieron estas acciones. Un hecho ejemplar se dio a raíz de la convocatoria de una asamblea del Centro Militar para realizar un «*homenaje al soldado muerto en la lucha contra la guerrilla latinoamericana*». Una asistencia masiva a la asamblea, incentivada por los mandos, con el general Liber Seregni al frente, ocupando la jefatura clave de la Región Militar N°1, votó en contra del homenaje, por considerarlo una ingerencia indebida en cuestiones políticas.

Sin embargo, las decisiones de Pacheco Areco colocaban a los mandos legalistas frente a la disyuntiva de obedecer órdenes inconstitucionales o desobedecer al presidente, Mando Supremo según la ley también. Si en algún momento los mandos legalistas pueden haber tenido condiciones para dar un golpe de Estado debe haber sido éste, pero al mismo tiempo hacerlo hubiera sido una forma de ir contra sus propios principios. El general Seregni optó por la tercera alternativa, retirarse de las Fuerzas Armadas.

Seregni fue seguido en su decisión por el retiro voluntario de varios altos oficiales, el general Licandro, el coronel Irastorza y otros. El capitán Gerónimo Cardoso, en actividad entonces en la Fuerza Aérea, dice que estos hechos marcaron el inicio de una depuración política en todos los niveles. «*Los oficiales jóvenes criticábamos esta actitud, sentíamos que nos dejaban solos frente a la derecha*», dice Cardoso, al recordar el rompimiento de la camaradería militar y la creciente hostilidad interna.

Un protagonista del plan antigolpista de 1971, Cardoso considera que los contactos trajeron consecuencias negativas para el sector de militares legalistas que estaba en actividad. *«En las tareas de coordinación se perdió la compartimentación de determinadas estructuras»*, comenta. El ex-capitán indica que el MLN documentó por escrito reuniones y nombres, que cayeron después en manos de los servicios de inteligencia militar y facilitaron la tarea de desarmar las posibilidades de acción antigolpista.

Por otra parte, los preparativos de ese plan le permitieron al sector legalista conocer con mayor exactitud la potencialidad de las fuerzas que disponían. *«Si el golpe se hubiera producido en ese momento, nos habrían pasado por arriba»*, concluye sin vacilación Cardoso. El ex-militar recuerda que al grupo de la Fuerza Aérea se le encargó el copiamiento del Aeropuerto de Carrasco, la Base Aérea N°1, en donde debía recibir sendos mensajes de grupos de apoyo del MLN y del PC, que nunca le llegaron.

«La estructura antigolpe sólo sirvió para comprometernos en términos políticos», prosigue Cardoso, quien integró el primer grupo de oficiales (14 de la Fuerza Aérea y 3 del Ejército) detenidos en julio de 1972 y procesados por la Justicia Militar. La condenación por «motín», «encubrimiento» y otros cargos, los acusaba de *«constituir un grupo de oficiales que, al margen de sus mandos naturales, pretendía defender la Constitución, tarea ésta que constitucionalmente corresponde a las Fuerzas Armadas»*.

La depuración continuó en los meses siguientes, pero diversas fuentes aseguran que, por lo menos hasta febrero del 73, había sectores medios de la oficialidad que mantenían una expectativa de que las fuerzas armadas, cada vez más cerca del poder político, adoptarían una postura «progresista». Esta apreciación se abona con la afirmación de que los Comunicados 4 y 7 estaban dirigidos no solamente para captar un apoyo dentro de la población civil sino para contentar también a un público dentro de sus filas.

El alcance de esta apreciación parece ser una clave para explicar las conductas durante y después de la «crisis de febrero». Los conocedores del medio coinciden en que para los militares *«sin un general no se puede hacer nada»*. Las mismas fuentes agregan que, en esta ocasión, el general sobre el cual se centraban las expectativas era Gregorio Alvarez, jefe del ESMACO, y que Boisso Lanza mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar. De ahí que algunos llamaron este pacto como *«la traición del Goyo»*.

Los que conocían al Ejército y sus generales desde adentro no dudaron. Los generales frentistas Seregni y Licandro insisten hasta hoy con que los únicos

beneficiados fueron los servicios de inteligencia militar. Sectores importantes del Frente Amplio, en base a los procesos de Perú y Bolivia, sin paralelo con el del Uruguay, pasaron a jugar desde entonces la carta de la corriente militar «progresista». Durante un buen tiempo, los jefes militares pudieron aprovecharse plenamente de esta confusión.

«Entre febrero y junio del 73 se produjo un golpe de Estado por etapas», dice Gerónimo Cardoso. Tras el ascenso de los sectores reaccionarios en los puestos de mando, se restableció la centralización del mando en el Ejército y se desplazó a sectores institucionalistas de la Marina y la Fuerza Aérea. A la altura en que se produjo el golpe del 27 de junio, los sectores legalistas de las fuerzas armadas estaban completamente desarticulados y sólo fueron factibles conductas individuales, sin mayor peso real.

La situación del MLN (Tupamaros)

En la fase definitiva del golpe de Estado en Uruguay, que arrasó con todas las instituciones democráticas del país, y cuando el pueblo uruguayo se jugó todas sus reservas de lucha, ¿cuál era la situación de la mayor organización armada de la izquierda y qué papel jugó en tal circunstancia? *«En el momento histórico del pueblo uruguayo, toda la dirección del MLN estaba presa en el Penal de Libertad»,* dice, sin esconder la amargura, Fernández Huidobro, uno de los que pasó el golpe y la huelga general en aquel lugar.

El dirigente tupamaro recuerda los contactos efectuados con militares y el Partido Comunista en 1971 ante la eventualidad de un golpe de Estado. *«Se distribuyeron tareas, se le comunicó al MLN y aceptamos. No nos pareció un plan descabellado. Otra cosa era su viabilidad ...»,* comenta. Al comenzar a planificar su tarea, explica Fernández Huidobro, el MLN pudo comprobar que no estaba capacitado para pasar, en el tiempo disponible, de un accionar de tipo guerrillero a una confrontación de carácter militar.

Si lo que se pretendía era defender una posición fija o detener a una fuerza militar regular, era necesario pensar en otra escala totalmente distinta en términos de hombres, organización y armamento. El dirigente del MLN dice que el plan diseñado en ese momento terminó siendo otro, consistente en la instalación de algunas trampas «cazabobos», que producen explosiones de impacto psicológico, con el fin de confundir al enemigo.

Los Tupamaros desataron su mayor ofensiva en abril del 72; sufrieron una aplastante derrota política y militar, incluso con la desertión de miembros

importantes de la dirección, como Amodio Pérez y Piriz, quienes pasaron a colaborar con las Fuerzas Armadas. A la altura de junio del 73, el MLN no tenía ninguna capacidad operativa en el país y lo que se había salvado de su gente, sus finanzas y su armamento, estaba en Chile, en su mayor parte, en Argentina y en Cuba, a la espera de un eventual retorno.

Los presos del Penal de Libertad supieron de la inminencia del golpe uno o dos días antes del 27 de junio, porque fueron trasladados entonces para declarar en un Juzgado de la capital y varios de ellos pudieron recoger los rumores que circulaban en los medios políticos. La noticia de la disolución de las cámaras la tuvieron en el penal en la misma madrugada del miércoles 27, a través de las pequeñas radios portátiles conservadas a escondidas de sus superiores por los soldados a cargo de la guardia.

Los guardias escucharon el comienzo de la cadena oficial propalando música folklórica y entendieron que se estaba por anunciar algo muy importante. La noticia de la huelga llegó unas horas después. En los días siguientes, dentro del penal no se registraron cambios sustanciales. Los presos percibieron cierta tensión entre los militares, pero éstos aparentaban total normalidad en los hábitos del penal. *«Todo indica que buscaban evitar que allí surgiera un foco más de conflicto»*, explica Fernández Huidobro.

El dirigente tupamaro recuerda que el oficial de la Fuerza Aérea Echeverry, entonces Jefe de Inteligencia Militar en el penal, buscaba cualquier excusa para llevar a alguno de ellos a su despacho y permitirles escuchar la radio, como por descuido. *«¡Ojalá aguanten!»*, comentaba el oficial cuando se oía por el aparato alguna noticia de la huelga general. Los presos usaban entonces la ocasión para preguntarle qué estaba pasando entre los militares y qué era lo que estaba haciendo él, Echeverry, para apoyar la huelga.

Con una visión preponderantemente militar de la situación, los dirigentes del MLN consideraban que la fuerza decisiva para obligar a los golpistas a negociar o mismo para derrotar al golpe de Estado en ese momento sólo podría lograrse de entrar en acción algún sector militar disidente y/o el aparato armado que disponía el Partido Comunista. Para los tupamaros, si ninguno de estos dos factores entraba en escena, la huelga general estaba condenada ineluctablemente a la declinación y el fracaso.

Levantada la huelga general y consolidado el golpe militar, la dirección del MLN mantuvo aún cierta expectativa sobre cuál sería la conducta del nuevo régimen. Por su experiencia en las conversaciones con militares, Fernández Huidobro asegura que muchos oficiales también tenían esa expectativa. *«El contenido de los Comunicados 4 y 7 estuvo destinado al público externo e*

interno de las fuerzas armadas», acota. La expectativa de los tupamaros se mantuvo hasta setiembre, poco después del golpe en Chile.

Entonces los dirigentes históricos del MLN fueron dispersados y aislados, en condiciones severísimas, por diferentes unidades militares, bajo la calidad de «rehenes». *«La derecha se había consolidado y estaba fuerte»*, concluye Fernández Huidobro, aunque sigue pensando que una de las razones de esa medida fue el temor a su influencia sobre oficiales y soldados. El tupamaro afirma que un informe militar interno los calificaba en ese momento como poseedores de una *«alta velocidad de convencimiento»* (sic).

El «brazo armado» del Partido Comunista

Desde junio de 1964, cuando trascendió la existencia de una amenaza de golpe militar, el Partido Comunista elaboró un plan para enfrentarlo, que incluyó la creación de un contingente armado propio. Fue organizado como un grupo clandestino separado de la estructura legal del partido, forma habitual en los partidos comunistas pro-soviéticos de entonces. En la literatura de izquierda de la época, esta forma de organización era denominada el «brazo armado», para diferenciarla de los grupos guerrilleros, en los cuales todo el «cuerpo» era una estructura político-militar única.

Los planes de acción del contingente armado del PC estaban inscriptos dentro de su concepción estratégica, que era apoyar la lucha del movimiento organizado de masas y, si se ponía en juego la toma revolucionaria del poder, participar en una insurrección. En uno como en otro caso, la estrategia del PC contaba asimismo, como factor decisivo del triunfo, con una división en las fuerzas armadas del régimen establecido. Era el modelo de la revolución rusa, aunque en esa situación la rebelión militar había sido provocada por la derrota de las tropas zaristas en la guerra europea.

Los preparativos del PC se dirigían, por tanto, a obtener el control de centros económicos y servicios claves, con el apoyo de los sindicatos, para desatar desde allí acciones de resistencia y ofensiva. Al mismo tiempo, esa acción se inscribía dentro de un plan de mayor envergadura, dentro del cual participarían militares propiamente dichos, reclutados con anterioridad o conquistados en la batalla. El «brazo armado» del PC parece haber llegado a contar unos miles de activistas, incluyendo los ocupados en el servicio de sanidad, las comunicaciones y la producción de armas.

En el correr de 1971, militares legalistas, el MLN y el PC mantuvieron contactos para coordinar un plan antigolpista ante la eventualidad de que se intentara desconocer el resultado de las elecciones de ese año, en las que se veía posible el triunfo del Frente Amplio. Mientras el MLN debía impedir el acceso de fuerzas del interior a la capital, los militares legalistas y el PC se encargarían de copar Montevideo. El día de las elecciones, el plan se puso en marcha, pero fue desactivado al final de la jornada, al no producirse las circunstancias que habían justificado su existencia.

El plan antigolpe del 71 quedó obsoleto el mismo día de su tentativa de ejecución, porque al ponerse en marcha perdió el secreto necesario en todo plan para triunfar. En los 19 meses siguientes, hasta el golpe final del 27 de junio de 1973, los militares legalistas y el MLN sufrieron un debilitamiento irreversible de sus fuerzas. Sólo el PC mantuvo intacto su «brazo armado» y no suspendió las tareas de organización. El plan de enfrentamiento armado a un golpe de Estado no podía incluir ahora al MLN, pero el PC siempre siguió contando con la división de las fuerzas armadas.

Al iniciarse la huelga general del 73, los miembros del «brazo armado» del PC se prepararon para entrar en acción, pero la orden que recibieron fue de «esperar». La expectativa se mantuvo por algunos días más, hasta que se tuvo la certeza de que no habría nueva orden. «*Estábamos en el puesto, pero no sabíamos para qué*», comenta hoy Jorge Suarez, quien era entonces uno de los responsables de «las centurias comunistas». Suarez agrega que su sector no recibió nunca ninguna explicación especial, más allá de la que la dirección del PC divulgó una vez levantada la huelga general.

De acuerdo con documentos oficiales del PC, en la madrugada del 27 de junio, la dirección «*aconsejó promover una política con las masas tendiente a diferenciar sectores militares de los grupos fascistas y de los generales que encabezaban la dictadura*». En el transcurso de la huelga general, varios dirigentes comunistas conversaron con oficiales de las fuerzas armadas, en una tentativa de confirmar la existencia de sectores militares que pudieran sumarse a la resistencia. No se produjo ninguna circunstancia en que tales esfuerzos hicieran viable la diferenciación buscada.

Este hecho sería suficiente para explicar por qué el «brazo armado» del PC no entró en acción durante la huelga general. Sin embargo, ex-miembros de ese grupo hoy dicen más: «*al final, fue una suerte que no tuviéramos que actuar*». ¿Porqué? «*Desde antes del 73, la infiltración de la inteligencia militar era muy grande a diversos niveles del partido*», explican. En 1975 y 1976, cuando las

fuerzas armadas desataron la mayor ofensiva represiva contra el PC, desmontaron toda su estructura armada.

La idea que sugieren esos comentarios es que si el «brazo armado» del PC hubiera tenido que actuar contra el golpe del 27 de junio de 1973 habría sido fácilmente desbaratado y, posiblemente, los sacrificios y las pérdidas humanas hubieran sido aún mayores de lo que fueron después. Esta es una reflexión que sólo se hace mucho después de los hechos porque, hasta 1975, por lo menos, la dirección del PC no tenía idea de hasta dónde habían llegado los agentes de los servicios de inteligencia militares.

La conclusión que se desprende de los hechos es que ni antes ni durante el golpe de Estado de junio del 73 existieron condiciones reales para el éxito de una resistencia armada de los sectores legalistas. ¿Habría que deducir entonces que no había ninguna posibilidad de detener a aquellos que estaban decididos a barrer con las instituciones democráticas?

En el campo político, las armas no se justifican ni se sostienen solas. La respuesta a esa pregunta hay que buscarla en otro plano, en la situación y la actitud de la sociedad uruguaya, a las cuales las Fuerzas Armadas no son ajenas. Por eso es una ligereza afirmar que el golpe era inevitable o que la dictadura duró 12 años sin apoyos sociales ni políticos.



La izquierda y los sindicatos

Desde su constitución en 1971, el Frente Amplio fue la mayor alianza alcanzada hasta entonces en Uruguay por los grupos y partidos políticos de izquierda y centro-izquierda, agrupando desde sectores desprendidos de los partidos tradicionales, nacionalistas y colorados, y demócrata-cristianos, hasta socialistas, marxistas-leninistas e independientes.

Los Comités de Base, agrupamientos barriales de sus adherentes, sin distinción partidaria en su composición, fueron un factor político decisivo para la creación del Frente y sus movilizaciones, pero el Frente se debatió muchas veces en la dualidad de ser, por un lado, una coalición de partidos y, por el otro, una fuerza con adherentes sin filiación previa.

En el Frente Amplio se crearon tres grandes tendencias: la primera, Partido Comunista, FideL, Partido Socialista, Rodríguez Camusso y el POR (trotskista); la segunda, Partido Demócrata Cristiano, que con la Lista 99 habían formado el Frente del Pueblo; y tercera, la Corriente, Enrique Erro, Zelmar Michelini, Alba Roballo, «26 de marzo», y los GAU.

La presidencia del general (R) Líber Seregni -prestigiado por su retiro durante el gobierno de Pacheco Areco y su conducta de respeto a la legalidad institucional-, dió al Frente Amplio la posibilidad, al no provenir de ninguno de los partidos de la alianza, de un liderazgo político nuevo, desaprovechado muchas veces por el peso del juego partidario interno.

Junio de 1973 fue uno de esos momentos en donde la dirección personal de Seregni jugó un papel decisivo sobre toda la izquierda y, en consecuencia, sobre la definición de una huelga general y una resistencia que trataron de frustrar el golpe militar. En la crisis de febrero, en cambio, Seregni reflejó los dilemas y confusiones existentes en el seno del frente.

Confusiones en la izquierda

«No caben desconfianzas ni reticencias frente a la clase obrera ... Por lo mismo constituye un error la apreciación negativa del marxismo-leninismo, que es, por esencia, la ideología del proletariado. No es casual que la clase obrera y su vanguardia, inspirándose justamente en el marxismo-leninismo, han estado siempre en la primera fila del combate por transformaciones profundas y que exista una coincidencia objetiva con muchos de los puntos que plantean las FF.AA.

Estas opiniones, que el Partido Comunista expresa con la franqueza que caracteriza sus proceder, no invalidan, en lo más mínimo, la apreciación positiva de esos documentos programáticos y, más generalmente, de la postura que adoptan las FF.AA. Sin duda, los hechos ocurridos en estos días han asestado un duro golpe a la política pachequista y el país atraviesa un momento que, mirado en la perspectiva histórica, tiene un signo positivo».

(editorial de «El Popular», febrero de 1973).

«Más allá de que algunas explicaciones del momento no fueran las más felices, más allá de que determinadas frases resultaran algo ilusorias, creo que la posición, en lo esencial, fue justa. El vaciamiento de las instituciones era tal que defender a Bordaberry era defender a la «rosca». Discrepamos con Quijano, que discrepó con la CNT y el Frente Amplio», reafirma hoy Eduardo Viera, sin alterar su posición de 1973, cuando era el director de «El Popular» e integrante del Comité Ejecutivo del Partido Comunista.

La posición adoptada por el PC en la «crisis de febrero» fue el origen de fuertes divergencias internas, pero no trascendieron ese ámbito por varios años, por obra de la gran disciplina partidaria. Luis Iguini, dirigente de COFE y miembro del secretariado de la CNT en 1973, recuerda que esa discusión continuó en la prisión donde, entre los comunistas, era usual intercambiar ironías como la de que los Comunicados 4 y 7 habían quedado reducidos a las rejas de la celda, que tenían 4 y 7 barrotes cruzados.

Pero dentro del Frente Amplio no fue sólo el Partido Comunista el que tuvo esa interpretación de los hechos. «En febrero, nos mantuvimos dentro de los límites del Frente Amplio», dice Jaime Pérez, entonces primer secretario del Comité de Montevideo del PCU. «La situación de las Fuerzas Armadas era de asamblea, la apreciación no fue producto de mala información, sino de desconocimiento de cómo funciona el Ejército», agrega.

«Quizás no tuvimos una visión muy clara en ese momento, pero integró un eslabón de la cadena que condujo al golpe de Estado»—admite hoy José Pedro Cardozo, ex-senador y dirigente del Partido Socialista, miembro de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio. El Partido Demócrata Cristiano adoptó una postura semejante, reflejada en los editoriales del diario *«Ahora»* en los que se comenzó a desarrollar la «teoría del tutelaje militar».

«Que el pedido de renuncia de Bordaberry era para que se siguieran los caminos constitucionales, o sea su sustitución por el vice-presidente, Sr. Jorge Sapelli, puede ser que no se haya explicitado claramente, pero era lo que teníamos en la cabeza todos nosotros», dice Héctor Rodríguez, dirigente de los GAU y de la Corriente en aquel momento. El hecho es que ese aspecto no aparece en los discursos y declaraciones de la época.

El entonces diputado de la Lista 99, Hugo Batalla, señala que discrepó explícitamente con la posición del Frente Amplio en ese momento. *«Quiero decirle que yo estoy profundamente en desacuerdo con su discurso, no tanto por lo que dijo, que yo puedo compartir, sino por lo que debió decir y no dijo»*, manifestó a Seregni. A diferencia también de otros dirigentes de su sector, Batalla dice que nunca tuvo expectativas en los militares.

Desde fuera del Frente Amplio en ese momento, el dirigente de la ROE (Resistencia Obrero-Estudiantil) Hugo Cores considera que *«muy distinto hubiera sido si se hubiera ejercido una actitud enérgica de defensa de las instituciones, si se hubiera mostrado que no se permitiría un proceso de ese tipo»*. Cores afirma que *«el viraje político del Partido Comunista trastocó al conjunto de alianzas del sistema político tradicional»*.

«El Frente Amplio señaló la responsabilidad de Bordaberry y ésto tal vez confundió, porque no era un apoyo a las Fuerzas Armadas», admite el general (R) Víctor Licandro, asesor de Seregni. *«Algunos sectores creían ver que las Fuerzas Armadas estaban en la misma dirección de los peruanos. Fue un gran error de valoración de ese momento. Pero los militares del Frente Amplio nunca nos confundimos en esa dirección»*, agrega.

Para el general Licandro, las Fuerzas Armadas aplicaron estrictamente las reglas de la guerra enseñadas en los manuales de instrucción militar. *«El plan denunciado por Vasconcellos era verdad., el Parlamento y los partidos políticos no reaccionaron. Las Fuerzas Armadas fueron colocando agentes en todos los sectores de la sociedad, en algunos casos en puestos importantes. En el momento del golpe, estaba todo listo»*, comenta.

Como ejemplo de un eficiente trabajo de inteligencia, Licandro señala que los militares hablaban con todo el mundo y estaban en todos lados, pero los sectores legalistas no llegaron nunca a tener informaciones precisas de lo que sucedía dentro de las Fuerzas Armadas. *«Tenían planificado inclusive el funcionamiento de los servicios esenciales, en caso de que los sindicatos no hubieran estado dispuestos a mantenerlos»*, asegura.

El liderazgo de Seregni

La coyuntura del 27 de junio de 1973 es uno de los momentos, más bien escasos, en que el general Seregni ejerció un liderazgo personal indiscutible dentro del frente. Su Mensaje Nº1 a la Militancia Frenteamplista definió los objetivos de la resistencia y de la huelga general, como la destitución de Bordaberry y el restablecimiento de la legalidad democrática. Por otra parte, Seregni y Ferreira Aldunate habían coincidido en los últimos días sobre el carácter de la situación y ello explica sus acuerdos posteriores.

El presidente del FA tiene muy presente en la memoria los días previos al 27 de junio y su impresión de que el golpe de Estado era inevitable. En la mañana de ese mismo día comenzó la elaboración del mensaje. *«Sentimos la necesidad de alertar a la militancia»*, explica hoy, pero la sensación que nos queda es que era mucho más. Desde la década del 50, Seregni venía siguiendo muy de cerca los acontecimientos dentro de las Fuerzas Armadas, sabía que el golpe era factible y se había preparado para ese momento.

«La decisión de la huelga general fue forzada», admite Seregni y agrega una justificación muy asociada con su formación militar: *«cuando llega el momento de la decisión siempre hay vacilaciones»*. Explica la necesidad de alguien que deba asumir la iniciativa en los momentos más difíciles, pero ésto le permite obviar la enumeración de quiénes podían no compartir esa decisión. El presidente del Frente Amplio señala que *«algunos sectores tenían una visión idílica, querían ver algo similar al peruanismo»*.

Personas que estuvieron cerca de Seregni en esos momentos recuerdan que a la Presidencia del FA llegaron llamadas telefónicas de militantes, en particular de dirigentes sindicales del Partido Comunista, para denunciar la aparición de un mensaje «apócrifo» (sic), con la firma del general, que estaba siendo distribuido en varios lugares. Hay otras versiones de conversaciones y reacciones, pero no han sido confirmadas. Al final, la resolución de la Mesa Ejecutiva respaldó a Seregni y sepultó las discrepancias imaginables.

Hugo Batalla, el sustituto natural del líder de la 99, Zelmar Michelini, quien se encontraba en Buenos Aires, participó en los contactos del Frente Amplio con el Partido Nacional. Una imagen risueña de esos momentos fue para Batalla la llegada de Pivel Devoto a la casa de Seregni, vestido con un sobretodo negro hasta los pies, boina de vasco y lentes negros. *«Todo el mundo podía decir: ese es Pivel»*, comenta el ex-dirigente frentista.

En cuanto al intento de convocar a la Asamblea General, el presidente del Frente Amplio dice que no lo sorprendió su fracaso. *«Hubo un desarme, una aquiescencia del Poder Legislativo, como cuerpo»*, la misma opinión que le mereció la actitud del Parlamento en la crisis de febrero. Esto no alteró, sin embargo, su posición sobre cuál debía ser la salida del golpe de Estado. *«No podía haber ni abdicación, ni componenda»*, afirma Seregni, frente a tesis políticas que concebían una transacción con los golpistas.

«Tenían miedo de que la CNT terminara apoyando a algún sector militar golpista. Yo podía dar garantías por los sindicatos, pero no por el partido», comenta hoy Luis Iguini, ex Secretario de Relaciones Internacionales de la central, a cargo de contactos políticos, al recordar las desconfianzas de los diputados de la Lista 15, Julio M. Sanguinetti y Antonio Marchesano, sobre las intenciones de la CNT en medio de la huelga.

El profesor José Luis Massera, encargado de hacer contactos con altos ex-jefes militares durante la huelga, confirma las expectativas del PC de que hubiera mandos dispuestos a apoyar al movimiento sindical. Massera relata hoy algunos detalles de esos contactos, hechos en la residencia del propio militar, con un cafecito de por medio, en un clima cordial. La escena explica la sensación de entonces y la reflexión de hoy.

«Había una buena dosis de ingenuidad. No teníamos un cuadro objetivo de la situación», dice Massera, quien redactó con Arismendi el documento de agosto del 73 del PC, que admitía aún la posibilidad de un vuelco favorable. El Partido Comunista acabaría por caracterizar a la dictadura como fascista en 1975, pero no abandonó totalmente las expectativas hasta 1976, cuando sufrió los golpes más demoledores de la represión.

A pesar de no haber condiciones para una resistencia armada, sabiendo que la estrategia de la huelga era predominantemente pasiva, Seregni afirma que confiaba en la posibilidad de un resultado favorable de la huelga general. *«Pero no sólo importaban las fuerzas de ese momento -acota-, era necesario adoptar una posición con vistas al futuro»*. De la misma manera que pesó en forma decisiva para el lanzamiento, el presidente del FA analizó fríamente la evolución de la huelga y llegó a la conclusión de que estaba perdida.

Para Seregni, el factor fundamental que decidió la derrota de la huelga general fue el fracaso de la paralización del transporte en la capital. En ese momento, también se guió por un razonamiento militar: *«cuando una batalla se está perdiendo, es mejor poder decidir uno la retirada, para que la derrota no sea tan grave y afecte menos el futuro».*

El presidente del Frente Amplio se reunió con el Comando de la CNT y con León Duarte, del sindicato de FUNSA, para analizar la situación. Seregni y la dirección de la CNT acordaron en ese momento la convocatoria de la manifestación del 9 de julio, en el centro de Montevideo. La acción sería el momento culminante de la resistencia: creaba condiciones de negociación o se haría necesario pasar a una nueva etapa.

Acompañado de Licandro y Zufriategui, Seregni participó en persona en la manifestación, hasta que por el aumento de la represión le recomendaron que se retirara. El líder frentista reconoce que lo sorprendió la dureza con que actuó la represión ese día y está convencido de que entre los golpistas predominó la posición más dura, la de hacer una demostración de fuerza con el fin de amedrentar a la masa de la población.

«Mirada a la distancia -reflexiona Seregni-, la decisión de la huelga en 1973 fue como el Voto en Blanco en 1978. Fueron hitos distintivos de la determinación, la voluntad política del Frente Amplio». La proposición del Voto en Blanco, cuando la dictadura convocó a elecciones para designar las autoridades de los partidos políticos, fue otra decisión personal de Seregni, tomada en la prisión. El PC, el PS y la 99 optaron por el «voto útil», mientras el resto del Frente acompañó la decisión del líder..



La decisión del movimiento sindical

El definitivo golpe de fuerza dado el 27 de junio por Bordaberry y las Fuerzas Armadas -al final de un largo camino, iniciado el 13 de junio de 1968, cuando Pacheco Areco implantó, por decreto, las primeras Medidas Prontas de Seguridad-, puso en marcha, de manera inexorable, la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo, que los sindicatos y la CNT habían resuelto aplicar en caso de golpe de Estado.

Esta vez, la situación no presentaba ninguna ambigüedad -sobre todo debido a la disolución del Parlamento, en ese momento la expresión del arrasamiento de las instituciones democráticas-, pero la huelga general fue objeto en los años anteriores y en los meses previos de numerosas polémicas, que incluso hicieron dudar de si podría ser llevada realmente a la práctica. Pero, en efecto, el 27 de junio de 1973 no podía haber dudas.

Claro, no hubo duda de que se trataba de un golpe de Estado, pero eso no quiere decir que no estuviera en tela de juicio, como lo estuvo desde la «crisis de febrero», el carácter «progresista» o no de ese golpe, así como los objetivos y alcances de esta huelga general. Todo esto determinó las características de la acción sindical, desde las instancias de decisión y la forma de desplegar sus fuerzas hasta el resultado final.

Espontaneidad y convicciones

Algunas evaluaciones hechas con posterioridad a los acontecimientos llegaron a afirmar que la huelga general se había iniciado por una decisión espontánea de los trabajadores. También se puso en duda la disposición de los militantes sindicales del Partido Comunista, integrantes de la mayoría de la dirección de la CNT, para aplicar la medida en ese momento

No hubo espontaneidad si se entiende por tal una decisión totalmente improvisada, sobre un tema nuevo y en una dirección inesperada. Pero sí la hubo

en el sentido de que, en muchos centros de trabajo, la huelga se inició sin esperar una confirmación de arriba, porque se consideró justamente que la misma era coherente con las resoluciones de la CNT. Sobre todo hubo una decisión muy clara de los trabajadores en las asambleas de ese día.

La determinación de los trabajadores fue una confirmación del trabajo hecho por los sindicatos y la CNT, de las incontables veces que el tema había sido debatido en asambleas, plenarios y congresos. Pero no se pueden obviar las circunstancias del momento: primero, porque esa decisión de las bases no había existido en febrero y, segundo, porque la dirección de la CNT midió con gran cuidado ahora cuál era esa disposición de los trabajadores.

«Las condiciones que exigía la resolución de huelga general (disolución del Parlamento, cese de la actividad política, etc.) no se dieron plenamente en febrero», comenta hoy Héctor Rodríguez, autor de la primera propuesta del Congreso Obrero Textil (COT), de responder al golpe de Estado con la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo, aprobada desde 1964 por la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU), la antecesora de la CNT.

«El problema es que en febrero el movimiento sindical debió tener una posición propia sobre las salidas necesarias para los problemas del país y ésto generó una polémica cuyos protagonistas principales fueron Montañez y Turiansky. Mientras la posición de Turiansky tendía a alinear los sindicatos detrás de los Comunicados 4 y 7, Montañez propuso una acción independiente a partir del Programa de la CNT», explica el ex-dirigente sindical.

«Yo fui uno de los que entendí que la huelga general hubo que aplicarla en febrero del 73», dice Víctor Semproni, dirigente bancario e integrante de la Corriente Frenteamplista, quien recuerda los debates de entonces en la Comisión Directiva de AEBU. El mismo Semproni reconoce, no obstante, que *«la madurez y la conciencia de los trabajadores, en junio, era mucho mayor que en febrero, a tal punto que la huelga se aprobó sin discusión».*

Así ocurrió en la base de los sindicatos, porque la decisión no fue tan sencilla en las direcciones. Algunos sectores militantes vivieron inclusive estas vacilaciones como si se hubiera puesto en duda el golpe de Estado y, en consecuencia, la aplicación de la huelga general. Sin embargo, el problema no es posible explicarlo en forma tan sencilla. Lo que estaba en juego no era la huelga, sino el carácter de la misma, los objetivos de ese momento.

En cuanto a la actitud del Partido Comunista, varios sindicalistas que pertenecían entonces a esa agrupación tienen presente la reunión efectuada en el local central de la calle Sierra (hoy Fernández Crespo), la medianoche del 26 de junio, presidida por Gerardo Cuesta. *«Acá no hay nada que discutir, estamos*

ante la inminencia de un golpe y hay que preparar la huelga general», dijo Cuesta, nos cuenta hoy Juan Angel Toledo, uno de los asistentes.

En junio del 73, la Federación OSE integraba el Secretariado Ejecutivo de la CNT, al que había ingresado en 1970. Ruben Villaverde, dirigente de OSE y militante sindical del Partido Comunista, recuerda que en el Secretariado de la CNT se analizó en diversas oportunidades las circunstancias bajo las cuales debería aplicarse la resolución de la huelga. La condición más nítida e incontestable del golpe de Estado era la disolución del Parlamento.

«La resolución, confirmando la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo, fue dada por el Secretariado Ejecutivo de la CNT a partir de las 2 de la mañana de ese mismo día, para lo cual se había reunido en forma extraordinaria ante la certeza del golpe», dice Ignacio Hughet, en ese momento secretario general del COT e integrante del Partido Socialista, quien ocupó el lugar de Montañez en la dirección de la central.

Sin embargo, militantes de la Corriente y de la ROE coinciden en que la decisión de la CNT atravesó por varias etapas. Semproni recuerda hasta hoy una discusión en AEBU con Félix Díaz, secretario de organización de la CNT., *«No sabemos si hay condiciones»,* dijo Díaz el miércoles 27, al explicar que se haría una evaluación. *«¿Y mañana?», le preguntaron. «La prolongamos por 24 horas más»,* contestó el dirigente, según el relato de Semproni.

«No había una decisión sobre el carácter de la huelga general, se quería parar y discutir, sin decidir qué era la huelga general. La CNT se adaptó a la disposición de la gente», acota Luis Romero, de la dirección del Sindicato de FUNSA, donde predominaba la orientación de la ROE. Después de ocupar su fábrica, los dirigentes de FUNSA se dedicaron a reafirmar esa posición en la zona de Maroñas, para influir así en la definición de la central.

Los problemas de la dirección

«La orden fue de la CNT. La conducción real fue del Partido Comunista», afirma sin vacilar Eduardo Platero, principal dirigente de ADEOM y miembro de la Mesa Representativa de la CNT. Platero nos revela que hasta la huelga general no era miembro del PCU, sino que se incorporó al mismo después de encontrarse preso en el Cilindro Municipal. Las estrechas relaciones entre las políticas de la CNT y del Partido Comunista eran innegables.

Algunos ex-dirigentes políticos y sindicales rechazan enfáticamente hoy interrelaciones de ese orden, tal vez tomándolas como una manifestación más

del «viejo anticomunismo». Para otros es la descripción de una realidad, donde no sólo el PCU sino casi todos los sectores de la izquierda tenían una práctica similar en su relación con los sindicatos. Si se cambió realmente ese criterio, no cabe escandalizarse con estas apreciaciones.

La dificultad de la dirección de la CNT y del Partido Comunista para definir el carácter del golpe de Estado de junio del 73 y, por lo tanto, de la huelga general radicó en varios factores. En las polémicas de los años 69 y 70 sobre la propuesta de una huelga general, el PCU había sostenido que, en las circunstancias que atravesaba el Uruguay, una medida de ese orden ponía en juego el problema del poder, o sea que sería insurreccional.

El sindicalista comunista Mario Acosta había dicho, en 1970, en *«El Popular»*, que *«la CNT tiene ya aprobada la huelga general como respuesta a un intento golpista, intento que por su esencia avasalla a todo el pueblo e introduce la crisis en el aparato estatal; (...) en las condiciones concretas que las actuales condiciones ubican el tema en nuestro país, la huelga general no puede considerarse al margen de los problemas del poder»*.

«Un filo de la polémica de entonces (aludía a la de Acosta con Héctor Rodríguez, secretario general de los GAU) *era sobre algo que acompaña a la huelga general como la sombra al cuerpo: la idea de su transformación en huelga insurreccional y, más todavía, el problema de la toma del poder»*, escribió el dirigente del PCU Enrique Rodríguez, en su libro *«Uruguay: raíces de la madurez del movimiento obrero»*, publicado en el exilio en 1979.

Por otra parte, desde febrero de 1973, ante la creciente irrupción de las Fuerzas Armadas en la política, el PCU apostó a la existencia de una corriente militar identificada con postulados de la izquierda. A pesar de los deslindes castrenses, de «incompatibilidad» con el marxismo-leninismo y de «camino irreconciliable» con la CNT, el PCU y la central no dejaron de reafirmar «coincidencias objetivas» con los Comunicados 4 y 7.

La declaración de la CNT, de febrero de ese año, introdujo un cambio significativo en la evaluación del golpe de Estado, al incorporarle atributos políticos y de clase. *«El golpe de Estado fue una situación ambigua»*, alega Platero, en la medida que no fue cruento, partidos y sindicatos no fueron ilegalizados, la Universidad no fue intervenida, etc. En esta coyuntura, el PCU y la CNT decidieron que la huelga no sería insurreccional.

«No era huelga insurreccional, no estaba concebida como la coronación -o como el comienzo- de un levantamiento coordinado con otras fuerzas, civiles, militares ... era una gran protesta de masas ante el golpe de Estado, que tomó la forma de huelga general simultáneamente con otras múltiples manifes-

taciones y formas de lucha», escribió Enrique Rodríguez, al explicar la determinación tomada por el PCU en aquellos días de junio.

La dirección mayoritaria de la CNT ajustó a esta decisión política los objetivos de la huelga general, así como los límites de las formas de lucha a desarrollar. *«Como la huelga general no era insurreccional; se podría haber levantado al segundo o tercer día, pero las masas nos comían. En cambio, si no la levantábamos el 12 de julio, las masas nos pasaban por arriba. El PCU tenía un gran control del sentimiento de las masas»,* dice Platero.

Los restantes sectores de izquierda con peso en el movimiento sindical tampoco definieron que la huelga era insurreccional. La diferencia radicó en que apelaron a todo el potencial de lucha popular y, de esta manera, creyeron posible frenar el golpe. *«Bien conducida, hubiera logrado una diferenciación o negociación que, por lo menos, definiera un plazo para el restablecimiento de las instituciones democráticas»,* afirma Héctor Rodríguez.

«Si los hechos no se prueban, no es posible sacar conclusiones sobre qué hubiera pasado, de hasta dónde se habría llegado entonces. Me refiero a medidas enérgicas, no insurreccionales, porque no había condiciones para ésto», opina por su parte Hugo Cores, ex-dirigente bancario, que desde agosto de 1972 había sido requerido por las Fuerzas Armadas y, como dirigente del sector sindical de la ROE, seguía actuando en la clandestinidad

«La huelga general respondió a una convicción de las masas, el que se hubiera interpuesto habría sido linchado», afirma Rodríguez. *«La impusieron tres factores: primero, era parte de la cultura política de la clase obrera; segundo, el apoyo de Seregni y de Ferreira Aldunate; y tercero, el vigor como la tomaron los sectores más combativos»,* agrega Cores. Todos coinciden en una cuestión: la decisión de la gente fue un factor fundamental.



La medida del enfrentamiento

Por decisión y por situación, la estrategia de la huelga general no fue la de un enfrentamiento armado con los militares golpistas, sino de uso de las más diversas formas de resistencia ... ¿Cómo definir esta resistencia? ¿Una resistencia pasiva? No, evidentemente no lo fue, porque se pasó a la acción y la ofensiva cuándo y dónde se pudo. ¿Una resistencia pacífica, no-violenta? Tampoco, la huelga general tuvo situaciones de violencia. Quizás sólo puede afirmarse que este enfrentamiento no superó los niveles que la violencia social había alcanzado en el país en los años precedentes.

El nivel de enfrentamiento de una huelga general es una medida muy difícil de definir con anticipación y con precisión. También es muy difícil asegurar lo que habría pasado si las cosas se hubieran hecho de otra manera. La medida del enfrentamiento es política. La huelga general tuvo dirección, a veces direcciones, que decidieron de acuerdo con sus propósitos políticos. ¿Qué pasó con el transporte y los combustibles, dos sectores claves de una huelga? ¿Cómo mantener las ocupaciones, cuando no era posible ir a un choque frontal? Estos fueron tres grandes dilemas de la resistencia.

Según Héctor Rodríguez, el plan para una huelga general se comenzó a discutir en la antigua CTU, después de aprobada en 1964 como respuesta del movimiento sindical al golpe de Estado. Más tarde, la CNT creó una comisión integrada por él mismo, Gerardo Cuesta, Gerardo Gatti y Vladimir Turiansky, con el mismo fin. Rodríguez recuerda haber llegado al acuerdo de dispersar las unidades del transporte y haber tratado el control de los combustibles y de los alimentos, aunque nunca se discutieron en detalle estos dos últimos aspectos y, por lo tanto, no se definió un criterio común al respecto..

El derrumbe del transporte

¿Porqué no se dispersaron las unidades del transporte colectivo de la capital en las fábricas ocupadas? O en otra alternativa, ¿porqué no se retiró el rotor de los motores de esas unidades, que hubiera impedido su utilización por los

militares sin destruir los ómnibus? Estas son las preguntas que no se respondieron en aquel momento y que darían una explicación de porqué el transporte no jugó el papel que debía en la huelga general.

Una de las explicaciones admitidas abiertamente hoy, 20 años después de los acontecimientos, puede ser muy simple, aunque es bastante creíble a la vez. Héctor Bentancurt, principal dirigente del Sindicato de AMDET y de la Federación Obrera del Transporte (FOT), se asustó y desapareció del mapa, dejando a su gremio a la deriva. Si esto sucedió así, nos lleva a pensar que en ese gremio las relaciones eran totalmente verticales

Según uno de los asistentes a la reunión, Bentancurt estuvo en la sede central del Partido Comunista, en noche del 26 de junio, cuando Gerardo Cuesta informó a los sindicalistas presentes de la inminencia del golpe de Estado y de la determinación de organizar la huelga general prevista por la CNT. Cuando la breve reunión terminó y la mayoría se había retirado rumbo a su sindicato, parece que Bentancurt no se decidía a salir.

«*Y ahora qué hago?*», decía Bentancurt, sentado, con la cabeza entre las manos y llorando, de acuerdo con la versión de otro de los presentes en ese momento. «*Andá a cumplir con tu deber*», le habría respondido uno de sus compañeros comunistas. Bentancurt salió, pero no se sabe para dónde y fue imposible encontrarlo en los días siguientes, en el gremio o en los centros de trabajo del transporte donde se decidía la huelga.

Otro testimonio es el de Ignacio Huguet, secretario del COT y miembro del Comando de la CNT, quien se encontró por casualidad con Bentancurt, el sábado 30 de junio, cerca de la avenida General Flores. Huguet relata que se hizo acompañar por el dirigente del transporte hasta la casa de un textil que vivía en esa zona. Bentancurt alegó que estaba buscando a la dirección de la CNT para informarle que la huelga era insostenible.

¿Desapareció un hombre y se vino abajo un sindicato? Bueno, sí, esto era posible en aquel momento. Había muchos sindicatos que dependían de la presencia de una, dos o tres personas, sin estructuras intermedias y de base aceitadas y capaces de suplir la ausencia de un dirigente. Este verticalismo está vinculado a las políticas sindicales y era más frecuente en los gremios que seguían las orientaciones del Partido Comunista.

No obstante, el derrumbe moral de dos o tres dirigentes del transporte no es toda la explicación sobre lo sucedido en este sector durante la huelga general. El Comando de la Huelga y el Partido Comunista hicieron un intento de recuperar la paralización del transporte. Y para ello llamaron a Salvador Escobar, un viejo dirigente gremial de AMDET, que hasta ese momento había sido asignado a tareas organizativas en el partido

Escobar cuenta que el domingo 1º de julio le encomendaron la misión de recomponer la huelga en AMDET. *“Bentancurt hizo la del avestruz, había comenzado a dar la orientación de volver a trabajar”*, dice el ex-dirigente gremial. Desde un café cercano a los talleres, Escobar consiguió reagrupar a los trabajadores el lunes y llegar al acuerdo de paralizar las unidades el martes, en todas las estaciones, pero se convenció de que la huelga no podía ir más lejos, si se quería mantener unido al gremio.

“Si paran los azules (las unidades de AMDET), el paro está asegurado”, era la consigna que definía las condiciones de lucha en todo el gremio. Para Escobar, la respuesta del transporte al golpe de Estado, en lo fundamental, había sido dada. *“La clase obrera sola no puede, nos vamos a ir debilitando”*, era el argumento principal. Pero Escobar precisa que el Comando de la CNT fue consultado y aprobó el fin de la huelga en AMDET

“Lo sucedido en AMDET fue una sorpresa. La responsabilidad no es sólo de Bentancurt. Sería una explicación muy fácil”, dice Mario Plasencia, en ese momento secretario general de la Organización Obrera del Omnibus (Tres O), el sindicato de CUTCSA que respondía a la CNT. La situación en CUTCSA era compleja, porque existía el Sindicato Autónomo del Omnibus (SAO), con un peso similar a las Tres O, y había además 1.600 trabajadores propietarios, debido a la organización cooperativa de la empresa.

“La apropiación de un bien privado no se nos planteó nunca. Retener las unidades significaba un conflicto con la patronal”, responde Plasencia al ser indagado sobre la dispersión o la extracción de una pieza de los ómnibus para evitar que pudieran salir a la calle durante la huelga general. Los obreros que ocuparon las oficinas, los talleres y el mayor estacionamiento de ómnibus de CUTCSA, fueron desalojados el sábado 30 y no pudieron reocupar, porque los militares dejaron una guardia permanente en el lugar.

“La patronal no actuó como en un conflicto interno, respetó la actitud de los trabajadores en defensa de las instituciones, pero ellos de cualquier manera no iban a parar”, explica el dirigente de las Tres O. Después de los decretos represivos del 4 de julio y de los “plebiscitos” organizados por los militares, el sindicato autónomo se reintegró al trabajo. Las Tres O mantuvo la huelga general hasta el levantamiento determinado por la CNT, pero esto representaba a un cuarto del personal de la empresa.

“La información que teníamos en la CNT sobre el nivel de organización existente en el transporte era falsa. Tal vez para un conflicto reivindicativo había funcionado, pero en la huelga se desplomó rápidamente”, explica Luis Iguini, entonces miembro del secretariado de la central. Salvador Escobar, involucrado a cierta altura en este episodio, lamenta que hasta el presente no se

hayan abierto instancias en el movimiento sindical para analizar lo sucedido en el transporte durante la huelga general.

Diversos sindicatos propusieron al Comando de la Huelga incendiar las unidades del transporte que salieron a la calle. Disponiendo de varios miles de activistas decididos, la medida era perfectamente viable, pero la CNT descartó naturalmente la propuesta. Tanto por haber avalado la vuelta al trabajo en el gremio de AMDET, como por no considerarla una medida de enfrentamiento apropiada. Las tendencias más radicales intentaron ponerla en práctica, pero no tuvieron la fuerza suficiente.

En la fábrica La Aurora, en la asamblea de levantamiento de la huelga general, el dirigente textil Juan Angel Toledo dijo que, cuando se hiciera un balance de lo sucedido, a los dirigentes del transporte había que darles «una medalla de mierda». Toledo recuerda hoy que sus ex-compañeros comunistas denunciaron esta actitud suya a la dirección del partido. Era evidente que la responsabilidad era de los comunistas, pero no se admitía la crítica pública a un camarada, por más equivocado que estuviera.

Combustible: mezcla y/o “apagón”

En 1973, en las instalaciones de ANCAP en La Teja estaba concentrada la entrega de todos los combustibles producidos por el ente. Era por tanto un punto clave para el funcionamiento de servicios básicos de la población y de todas las áreas de la administración y la economía. En la madrugada del 27 de junio, el dirigente gremial Daniel Baldasari recuerda que, con la entrada del turno de las seis, las asambleas realizadas en cada sección decidieron iniciar la huelga y la ocupación del lugar de trabajo.

Baldasari afirma que las decisiones de la Federación Ancap estuvieron orientadas en todo momento por las resoluciones de la CNT, pero advierte al mismo tiempo que esto no significa que la central pudiera decidir al detalle lo que debía hacerse en cada lugar. El dirigente sindical no recuerda que la CNT hubiera definido con anticipación criterios de acción en ANCAP para la eventualidad de la huelga general y dice que su gremio actuó de manera más bien pragmática, decidiendo frente a cada problema.

«En el momento del golpe, los depósitos de nafta común estaban llenos, había poca nafta roja y poco gas», dice Baldasari. La cantidad de un tipo de nafta

con respecto al otro, así como la cantidad de gas existente no es la misma siempre porque, entre otros factores, dependen del tipo de petróleo usado en la refinación. *«Fue difícil resolver cada caso, cuando comenzaron a llegar pedidos de entrega de combustible de diversos sectores, hospitales, distribuidores, etc.»*, comenta el sindicalista

El viernes 29, por la tarde, un camión-cisterna militar se presentó a cargar combustible, acompañado por soldados armados, que se apostaron frente al punto de abastecimiento. La decisión de la Federación Ancap fue de no cargar ese camión, pero no resistir si los militares entraban y lo hacían por sí mismos, como sucedió finalmente. Baldasari considera que este hecho fue *«un tanteo de los militares, para ver qué pasaba»*, porque el combustible llevado, unos 2.000 litros, no servía para mucho.

Para el dirigente de la Federación Ancap, la conducta adoptada en este caso se corresponde con la decisión del movimiento sindical de no ir a un enfrentamiento violento con los militares. Al día siguiente, los militares ocupan las instalaciones de ANCAP en La Teja y, ahora sí, asumen el control total del combustible. Una pregunta que se hizo desde entonces en medios políticos y sindicales fue: ¿porqué no se mezcló el combustible refinado con el crudo, para impedir su uso por los golpistas?

La posibilidad de «contaminar» los tanques de combustible refinado con petróleo crudo, que obligaría a repetir el proceso de refinación, fue un tema polémico desde mucho tiempo antes. Entre los obreros de la refinería había opiniones divergentes, porque si bien era realizable en la teoría, la cuestión se trasladaba al tiempo y los riesgos involucrados en la operación. Con los recursos técnicos de ese momento, la «contaminación» podía detectarse con bastante rapidez por la jefatura de la planta.

Como la «contaminación» no se podía efectuar en poco tiempo, aplicar esa medida llevaba a un conflicto con el personal superior, que no acataba las decisiones de la Federación. Baldasari explica que entonces pesaron más consideraciones de orden táctico: *«En el nivel de confrontación definido en ese momento por la dirección de la huelga, no estaba planteado llegar a ese tipo de medidas. La «mezcla» habría favorecido la represión, sin un resultado favorable para el movimiento en su conjunto.»*

Y para reafirmar que la Federación Ancap actuó siempre de acuerdo con las orientaciones del Comando de la Huelga, Baldasari señala que el «apagón» de la llama de la refinería, ocurrido el tercer día de ocupación militar de la planta, se hizo cumpliendo con una decisión de la central. *«Fue una medida política, para ayudar a mantener la resistencia»*, expresa. Todos los sectores de la re-

sistencia compartieron el valor moral de esta acción, por más que no afectó el control de los combustibles por los militares.

La diferencia entre la «mezcla» de los combustibles y el apagado de la refinería es que ésta operación pudo hacerse desde afuera de la planta y en pocos minutos. De esta manera, su ejecución no requirió un enfrentamiento entre obreros, jefes y autoridades militares, a la vez que evitó una reacción capaz de impedir el apagado. Una parada normal de la refinería es un proceso de 24 a 48 horas; aquí se produjo en sólo cuatro horas.

El "apagón" fue producido por un cortocircuito en el sistema de energía eléctrica exterior de la planta, provocado por la caída de una cadena sobre uno de los transformadores. La interrupción abrupta del suministro externo y la incapacidad del equipo interno para sustituirlo hizo inevitable el apagado de la refinería, que se produjo en medio de las luces rojas y el sonar de las sirenas del sistema de alarma general de la planta.

Las autoridades afirmaron que la acción de los obreros de ANCAP había sido un «*atentado criminal*» y aseguraron que la refinería «*pudo haber volado en pedazos*» como consecuencia del cortocircuito. «*Existía riesgo de rotura de algún equipo, pero peligro de explosión no hubo nunca*», desmienten hoy ex-operarios de la refinería. Al interrumpirse la energía eléctrica, la presión de aire tiende a caer en las cañerías, no a subir como requiere una explosión. El riesgo mayor era de que quedara crudo en alguna cañería, porque se enfría y endurece, haciendo más difícil la recuperación.

Una tenue llama apareció tres días después, utilizando gases ajenos al proceso. Poner en marcha de nuevo la refinería era un trabajo de varios días, que culminó una semana después del "apagón".

¿Desalojo?: "NEGATIVO, cambio"

La "Operación Desalojo" preparada por los militares para el primer fin de semana después del golpe despertó enormes expectativas. ¿Cuál sería la resistencia que serían capaces de oponer los huelguistas? ¿Atrincherarse en las fábricas? ¿Amenazar con volarlas si intentaban la desocupación? Por otro lado, ¿Hasta dónde los militares harían uso de su superioridad bélica? ¿Una masacre tenía alto riesgo político? Estas y otras preguntas estaban en el debate de los huelguistas ... y en el de las fuerzas armadas.

La posición de la dirección mayoritaria de la CNT quedó expresada en un comunicado a las fábricas que decía, textualmente: *«El Secretariado Ejecutivo de la CNT, ante la intimación por parte del gobierno, de desalojo de los lugares de trabajo, sin haber dado solución a ninguno de los grandes problemas que motivaron la actual movilización, resuelve mantenerla en todos sus términos, con la ocupación de los lugares de trabajo, accediendo a su desalojo sólo en las circunstancias en que mantener su ocupación puede configurar situaciones de violencia. En esta eventualidad, los trabajadores se concentrarán en sus respectivos sindicatos».*

Era evidente que los trabajadores no estaban preparados para dar un enfrentamiento con soldados armados en pie de guerra. Organizarse para la resistencia activa podía desembocar, como consecuencia más probable, en una cantidad considerable de muertos y heridos, en donde las mayores pérdidas serían del lado de los trabajadores. Por este razonamiento, entre los trabajadores se llegó rápidamente a la conclusión de que la resistencia debe ser esencialmente pasiva, lo que no significaba facilitar el desalojo, pero tampoco buscando el enfrentamiento directo.

Si el desalojo era inevitable, ¿qué hacer después? La CNT proponía ir a los sindicatos, pero ¿qué hacer entonces? Esos locales podían haber sido clausurados y las asambleas estaban prohibidas por la dictadura. En medio de estas dudas, algunos trabajadores dieron, en forma espontánea, la mejor de las respuestas: **prepararse para ocupar otra vez**. Un boletín de los militantes sindicales de La Corriente (*), con el título *A los trabajadores en lucha*, se encargó de hacer llegar esa consigna a muchos lugares y, sobre todo, a las más importantes fábricas ocupadas.

«Reorganizarse y ocupar de nuevo en cuanto se pueda», fue la consigna que corrió por todos los lugares. *«No podrán poner en marcha el país sin los trabajadores»*, agregaba el volante. Era evidente que para restablecer la actividad económica era necesario convocar a los obreros a sus fábricas y allí podía reanudarse la ocupación. Inclusive los militantes que coincidían con la dirección mayoritaria de la CNT percibieron que ésta era la consigna más razonable, si de proseguir la huelga se trataba. Además, no provocaba ningún riesgo de enfrentamiento incontrolable.

Esta consigna fue uno de los grandes aciertos de la huelga general, que permitió prolongar y fortalecer la resistencia. No partió de la dirección formal de la huelga, pero con un gran sentido común y en un momento de auge de la resistencia, fue asimilada sin vacilaciones por el conjunto de los huelguistas. Al mismo tiempo, provocó una gran confusión en la estrategia represiva de los

militares. Varios oficiales se acercaron mansamente a las fábricas reocupadas y buscaron conversación con los huelguistas, para tratar de entender que era lo que estaba ocurriendo.

En algunos centros de trabajo, el número de desalojos y reocupaciones dejó en ridículo a los militares. En otros lugares de mayor valor económico o político, para impedir la reocupación dejaron una guardia permanente. Pero así reforzaban la huelga, porque nadie se presentó en las fábricas ocupadas por militares. Entonces tuvieron que recurrir al decreto del 4 de julio, que habilitó despidos ilegales en masa, tanto en la actividad privada como en la administración pública, acompañado por la farsa de los “plebiscitos”, para doblegar la resistencia de los trabajadores.

La manifestación del 9 de julio en el centro de Montevideo fue el mayor y último esfuerzo de movilización de la CNT, el Frente Amplio y el Partido Nacional para tratar de provocar un cambio en la actitud de los militares. En las conversaciones previas, el dirigente del Sindicato de Funsa y de la ROE, León Duarte, propuso realizar una “sentada”, algo como acampar en el lugar y no retirarse, para crear un hecho más fuerte, pero la idea no fue compartida y no era posible imponerla en forma aislada.

La cautela con que la CNT encaró esta acción callejera, por el peligro de que sobrepasara el nivel de enfrentamiento definido, fue explicitado por la Comisión de Montevideo, en su Boletín Nº 7, del 7 de julio de 1973, que adjuntó a la convocatoria de la manifestación el siguiente llamado:

«A LAS FUERZAS ARMADAS

En conocimiento de las motivaciones patrióticas de la mayoría de las FF.AA., expuestas en los Comunicados 4 y 7 de febrero pasado, reconocidos por la CNT y el pueblo como la expresión sincera de dicho sector. Los hombres y mujeres laboriosos de la Patria, el lunes saldremos ala calle ... Y saldremos a reclamar la puesta en práctica de las coincidencias objetivas no concertadas de los Comunicados 4 y 7, el programa del pueblo y el de CNT.

No saldremos como enemigos de las FF.AA., sino para respaldar vuestros propios anhelos defraudados por la dictadura, y para demostrarlo saldremos en forma pacífica y sin armas ...»

La violenta represión de la noche del 9 de julio, mucho más violenta de lo que se esperaba, dadas las características de la manifestación, indicó lo que se venía. Algunos dirigentes políticos y sindicales de izquierda afirman que en

ese momento hubo un vuelco entre los militares, en el cual los «duros» dominaron la situación. Decenas de sindicalistas fueron detenidos en las 48 horas siguientes, en particular aquellos que hasta pocas horas antes estaban conversando con oficiales de las Fuerzas Armadas.

(*) En una «Cronología Documentada» publicada por el Partido Comunista en 1989 con el título «La resistencia a la dictadura. 1973-1975», Tomo I, en la página 73 se comete el error de asignar a la CNT el boletín titulado «A los trabajadores en lucha», en su edición Nº 9. La publicación fue, en realidad, un medio usado por la Coordinación Sindical de la Corriente del Frente Amplio, para divulgar sus orientaciones, diferentes a las de la dirección mayoritaria de la CNT, como sucedió con la consigna de la reocupación de los lugares de trabajo, relatada más arriba. El mismo error de autoría intelectual vuelve a cometerse dos páginas más adelante con el Nº 11 del mismo boletín.



«Diálogo», Conversaciones y Silencio

A lo largo de la huelga general, los contactos entre obreros y militares fueron permanentes. En muchos de esos casos, antes, durante o después de un enfrentamiento, se entablaron conversaciones. ¿Hasta qué punto se produjo el diálogo entre ambas partes? ¿Llegaron en algún momento a convertirse en negociaciones sobre los problemas en juego?

La dirección de la CNT y Bolentini

A partir del 27 de junio, por decisión del Secretariado de la CNT, a la sede de la calle Buenos Aires sólo debía concurrir Servando Aldrovandi, dirigente del gremio del dulce, con el fin de mantener el local abierto. En la primera mañana, Aldrovandi atendió una llamada del coronel Bolentini, quien dijo que precisaba hablar con los dirigentes de la central, y le respondió que trataría de localizarlos. El Secretariado decidió enviar esa tarde, a la sede del Ministerio del Interior, una delegación integrada por el presidente, José D'Elía, Gerardo Cuesta e Ignacio Huguet, con la orientación de escuchar el planteo que fuera a realizar Bolentini y comprometerse a trasladarlo a la dirección de la central para su consideración.

«Bueno señores, perdonen que los moleste, pero tengo instrucciones de conversar con ustedes. Dadas las circunstancias excepcionales, en función de la salvaguarda de las instituciones y la seguridad, las Fuerzas Armadas y el gobierno del país tienen interés en hablar con el sector laboral. Ustedes están haciendo una huelga; no nos tomó por sorpresa. No estamos de acuerdo, pero sabíamos que lo iban a hacer. Es necesario que esto termine de manera natural, normal. El país está parado y no hemos tomado ninguna medida, pero esto no es indefinido. Les ofrezco discutir la parte gremial; con los políticos discutiré la

parte política, fueron las primeras palabras del ministro, según el recuerdo grabado en la memoria de Huguet.

A cierta altura, la delegación de la CNT preguntó a Bolentini cuál era su propuesta. El ministro dijo entonces que la huelga debía ser levantada a la brevedad posible y que el gobierno se comprometía, en un plazo de 48 horas, a convocar las comisiones paritarias de los entes autónomos y resolver un aumento general de salarios. Bolentini aclaró que el fin de la paralización debía ser previo a las medidas del gobierno. *«Pero Sr. Ministro, nosotros no estamos aquí para venderle versos a los trabajadores»*, respondió Huguet, en forma espontánea. *«Nosotros no somos los responsables de lo que está pasando en el país»*, reaccionó también Cuesta. Cuando el tono de la conversación se volvía más áspero, D'Elía aclaró que la propuesta sería trasladada al órgano de dirección sindical y se levantó la reunión.

El Secretariado de la CNT deliberó sobre el tema esa misma noche y decidió responder a Bolentini por medio de una declaración pública, que sería entregada al ministro el día siguiente, al mismo tiempo que era distribuida a los sindicatos y a la población. La declaración comenzaba diciendo:

«Ud. expresó a la delegación nuestra que lo entrevistó a pedido suyo, lo siguiente:

1º) Que lo hacía en nombre de quienes tomaron en sus manos todos los resortes de Gobierno.-

2º) Que ésta situación Uds. tenían plena conciencia de su carácter extremo, con prescindencia de las normas constitucionales vigentes.-

3º) Que la misma sería sumamente transitoria, el tiempo suficiente para poner en vigencia las medidas de recuperación nacional expresadas en los comunicados 4 y 7 de las FF.AA.

4º) *Que Uds. entendían claramente que no era posible conducir el país sin el concurso de la clase trabajadora, y mucho menos en su contra. Por cuya razón nos convocaba, nos ofrecía esa enunciación de propósitos, y la de participar en la empresa»*.

El Secretariado de la CNT señalaba más adelante la existencia de una diferencia de contenidos entre lo expresado por el ministro del Interior y el discurso del presidente Bordaberry en la noche del 27 de junio, así como afirmaba no comprender tampoco porqué *«tan altos propósitos como los expresados por Ud. hayan tenido que arrancar necesariamente al margen de las normas constitucionales»*. La declaración de la central afirmaba que el país estaba esperando *«con impaciencia y angustia, vigilante y en lucha»*, el des-

enlace de la situación y que, para ello, se imponía una definición del Gobierno sobre estos temas:

1. Reiteración de la vigencia plena de las garantías para la actividad sindical y política, y para la libertad de expresión.

2. Restablecimiento de todas las garantías y derechos constitucionales.

3. Medidas inmediatas de saneamiento económico, cuyas prioridades hemos expuesto en el documento que en el mes de abril enviáramos a su pedido a la Junta de Comandantes en Jefes, especialmente: nacionalización de la banca, del comercio exterior y de la industria frigorífica.

4. Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, sueldos y pasividades; contención de precios subsidiando los artículos de consumo popular.

5. Erradicación de las bandas fascistas que actúan impunemente en la enseñanza, y coordinación con docentes, padres y alumnos de los caminos para la reanudación normal de los cursos.

Para Ignacio Huguet, el tema principal de la respuesta de la CNT era el restablecimiento de las libertades. *«Sobre la renuncia de Bordaberry no se habló en ningún momento, era un tema accesorio, después de lo ocurrido en febrero»*, explica hoy el dirigente textil. José D'Elía coincide con esa versión: *«lo de Bordaberry no estuvo planteado»*. ¿Porqué la dirección de la CNT dejó de lado en ese momento ante Bolentini la renuncia de Bordaberry?, presente en las últimas plataformas de la central, es una de las preguntas polémicas que surgieron en la huelga general.

En la segunda reunión con el ministro del Interior, los representantes de la CNT percibieron que la paciencia de los golpistas se estaba agotando. *«Los plazos urgen!»*, exclamó Bolentini, mientras daba una mirada a la carta de la central. La diferencia entre lo dicho por él a los dirigentes sindicales y el discurso del presidente, la despachó diciendo que Bordaberry era uno más del equipo de gobierno. Tras comentar que no creía que hubiera alguna clase de entendimiento sobre esas bases, el ministro dijo que llevaría la carta al presidente de la República y pidió a D'Elía que lo llamara por teléfono el día siguiente, para darle la respuesta oficial.

La respuesta del gobierno no llegaría por esa vía. El viernes, en cuatro lugares diferentes de la capital se afirmó que las Fuerzas Armadas querían hablar de inmediato con la CNT. En tres de las cuatro ocasiones, intervino el periodista Luis Michelini(*), diciéndose emisario de los mandos militares. Poco después, comenzó a circular la versión de que la CNT se había negado a conversar. De esta manera, se buscaba responsabilizar públicamente a los dirigentes sindicales por

la ruptura del «diálogo», para justificar la ofensiva represiva votada en el COSENA. El coronel Bolentini se cambió de traje esa noche y desplegó toda su retórica, por la cadena de radio y televisión, para emplazar a los trabajadores a levantar la huelga

Vinieron los desalojos, la disolución de la central, las reocupaciones, una mayor represión ... Del «diálogo» entre la CNT y el ministro del Interior no se volvió a hablar más. Sin embargo, en realidad, esa vía de comunicación no se interrumpió mientras duró la huelga general. Un miembro del SUANP y de la Comisión de Organización de la CNT fue designado por el Comando de Huelga para mantener el contacto. En uno de esos encuentros, Bolentini le recordó al emisario informal de la CNT que, en la misma silla del despacho ministerial donde estaba sentado, otro dirigente sindical le había dicho que no le vendiera versos a los trabajadores.

El presidente de la CNT, José D'Elía, recuerda otros contactos con jefes militares, en particular con los comandantes de la Fuerza Aérea, José Pérez Caldas, y de la Marina, Víctor González Ibargoyen, quien había sustituido a Zorrilla en febrero del 73. D'Elía tiene presente, que en las conversaciones, los militares se proclamaban «demócratas», inclusive que afirmaban que los «civiles» arreglarían rápidamente la situación, además de asegurar que los Comunicados 4 y 7 no eran improvisaciones. Lo venían reiterando desde la «crisis de febrero» en los contactos con la CNT.

La Federación OSE y el general Cristi

Los funcionarios de OSE ocuparon las instalaciones del ente desde la madrugada del 27 de junio, aplicando la resolución de la CNT para el golpe de Estado que, en este caso, preveía el mantenimiento del suministro de agua a la población. Los centros neurálgicos del sistema de agua potable de OSE se encontraban en las instalaciones de la avenida Propios, en la Capital, y en la localidad de Aguas Corrientes, en Santa Lucía.

«Advertimos a las autoridades que un intento de desalojo por la fuerza comprometería la continuidad del servicio», recuerda el dirigente sindical Rúben Villaverde. El Directorio de OSE autorizó entonces al Gerente General, Cr. Corleto, a seguir firmando las órdenes de pago a los proveedores, para que la producción no se interrumpiera, y se ofreció para poner en contacto a la dirección sindical y los mandos militares.

La Federación OSE aceptó, con la condición de que en su transcurso se respetara la ocupación gremial. Se entablaron vínculos con el Estado Mayor Conjunto (ESMACO) y con la Región Militar Nº1. El general Cristi, jefe de la región, exigió a su vez que las conversaciones tuvieran el aval de la CNT. El Secretariado de la central autorizó el contacto.

De ahí en adelante, los dirigentes sindicales de OSE entraban y salían de la sede del ESMACO y del Comando de la Región Nº1 con un salvoconducto militar. Y esto se mantuvo a lo largo de toda la huelga. Villaverde recuerda que se encontraba en el ESMACO cuando fue impartida por radio, a todas las unidades militares, la orden de captura contra los dirigentes de la CNT. Uno de los requeridos era el propio Villaverde.

Esta situación provocó un incidente con otro sector militar. En cierto momento, la Marina pidió un contacto con los dirigentes de OSE. La reunión, en una casa de Punta Gorda, fue precedida por un dispositivo de seguridad inusitado. Villaverde relata que sus interlocutores, presumiblemente del servicio de inteligencia, querían saber qué sector del ejército les estaba dando apoyo para enfrentar al golpe de Estado.

La razón de la alarma era que OSE, en la distribución de tareas de las fuerzas armadas, había sido colocada bajo la jurisdicción de la Marina pero, en los hechos, sus efectivos estaban imposibilitados de actuar y no se les permitía detener a los dirigentes sindicales del ente. Los marinos querían saber quién les había dado los salvoconductos y con qué finalidad podían entrar y salir libremente de unidades militares.

Según el dirigente de OSE, en el ESMACO se trataron sólo cuestiones relacionadas con el abastecimiento de agua. En el Comando de la Región Nº1, en cambio, las conversaciones giraron en torno a la nueva situación político-institucional, la huelga general y las salidas posibles. En estos contactos, junto con Villaverde, participaron García y Torres, de los sindicatos de CONAPROLE y de la construcción, respectivamente.

A pesar de que el contacto prosiguió durante toda la huelga, Villaverde afirma que las conversaciones con Cristi fueron similares a las sostenidas por la CNT con Bolentini. *«Cristi hablaba con ese paternalismo militar que dice que habría que hacer tal cosa y es lo que se debe hacer. Hay que hablar de conversaciones y no de negociaciones, porque no se produjo un cambio de las posiciones en juego»*, señala el sindicalista.

Villaverde llegó a la conclusión de que era muy difícil que el Ejército estuviera dispuesto a revisar la disolución del Parlamento. Cristi manejaba la idea de un Parlamento integrado en forma corporativa (patrones, obreros, etc.), al

estilo de los regímenes fascistas. «*Nosotros no podíamos pasar por encima del cadáver del Parlamento*», explica el dirigente de OSE, usando una frase de León Duarte, del sindicato de FUNSA.

Buscando explotar las diferencias

El Sindicato de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA ocupaba un lugar destacado en el movimiento obrero, por ser el sindicato de una gran fábrica, con una tradición muy combativa y solidaria, por haber participado en todas las tentativas de creación de una central única. En discrepancia con la orientación del Partido Comunista, mayoritaria dentro de la CNT, Funsa fue uno de los organizadores de la Tendencia Combativa en los años 60. Su principal líder, León Duarte, era también dirigente de la Resistencia Obrero-Estudiantil (ROE), un agrupamiento político de izquierda que se mantuvo al margen de la creación del Frente Amplio en 1971.

Por todos esos motivos, Funsa era también muy conocido en la época en los medios políticos y, naturalmente, en los militares. Al producirse el golpe del 27 de junio, el sindicato de Funsa no vaciló en iniciar la huelga general y la ocupación de su fábrica. Pero comenzó también a recorrer y a organizar la huelga y ocupación de las otras fábricas de la zona industrial de Maroñas. Para el Secretariado de la CNT era de valor político en ese momento tener a Funsa de su lado; por eso consultó en la madrugada del 27 a sus dirigentes y los invitó a reintegrarse a la Mesa Representativa. (**)

Los militares dedicaron una atención especial al sindicato de Funsa a lo largo de la huelga general. La primera situación se planteó el mismo 27, porque los obreros ocuparon la planta con integrantes del directorio de la empresa adentro. Los directivos de FUNSA avisaron por teléfono al Ejército que estaban secuestrados en su fábrica. Cerca del mediodía, un contingente militar se presentó en la puerta, preguntó a los obreros qué pasaba y éstos dijeron que, por el momento, cumplían con la decisión gremial de huelga ante el avasallamiento de la libertades y el Parlamento.

Después de consultar con sus superiores, los militares penetraron en la fábrica hasta los despachos del Directorio y formaron un cordón a través del cual hicieron salir a los directivos de la empresa, sin interferir con la ocupación obrera. El primer desalojo militar de FUNSA se inició en la noche del martes 3 de julio, con gran despliegue de fuerzas, ya que la planta y sus dependencias ocupan ocho manzanas. En cada portón se instaló una tanqueta, soldados armados con ametralladoras en diferentes puntos y ambulancias, previendo fuerte resistencia.

La desocupación se hizo la mañana siguiente y fue pacífica, pero después de largas negociaciones.

En el desalojo de FUNSA intervinieron el general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar Nº 1, y los coroneles Bolentini, ministro del Interior, Barrios, Albormoz y Goldazarena. Por el acuerdo alcanzado con el sindicato, los ocupantes al salir serían fichados por el ejército, la fábrica reanudaría su actividad en 24 horas y el estado de la planta sería verificado por una comisión con delegados de la empresa, los militares y los trabajadores. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, FUNSA estaba ocupada de nuevo. De la Región Nº 1 requirieron la presencia de dirigentes del sindicato; concurrió una delegación que fue tratada duramente por Cristi.

En forma simultánea con estos hechos, los mandos de la Región Nº 1 quisieron explotar las diferencias del Sindicato de Funsas con la mayoría de la CNT e intentaron un acuerdo por separado con respecto a los objetivos de la huelga general. Sin embargo, los dirigentes de Funsas respondieron que hablaban en nombre de la CNT o no había posibilidades de conversaciones. Uno de los delegados sindicales preguntó a un oficial porqué no despedían a Bordaberry -un aspecto que la dirección de la CNT había soslayado en los contactos con Bolentini-, pero el militar respondió evasivamente diciendo que ese no era un problema de su incumbencia ...

FUNSA fue desalojada por segunda vez en la tarde del 5 de julio, con un dispositivo militar que incluyó helicópteros, y la producción no se reanudó hasta el levantamiento final de la huelga general. Esta vez, los militares decidieron mantener la fábrica bajo vigilancia y, de ahí en adelante, los obreros no se presentaron a trabajar. El sindicato se dedicó a mantener la huelga y la organización del gremio, mientras dirigentes como Duarte se ocupaban de otras instancias de decisión sindical.

Oficiales vinculados al Servicio de Inteligencia Militar, al Comando General del Ejército, el propio Comandante en Jefe, general Hugo Chiappe Posse, entre otros, buscaron conversaciones con los dirigentes de Funsas. Según testimonios recogidos hoy (***), Chiappe Posse llegó a manifestar que precisaba una movilización en la calle, para que las Fuerzas Armadas tuvieran un respaldo popular y enfrentaran a los «infiltrados», internos y externos, que denominó «oligarcas» y «comunistas».

Para los sindicalistas, la posibilidad de un acuerdo dependía de tres temas: el reconocimiento de la central de trabajadores; el restablecimiento de las libertades públicas y sindicales; y la liberación de los huelguistas detenidos después del 27 de junio. Duarte fue detenido en la tarde del 9 de julio, en un local parroquial de la capital, junto con un numeroso grupo de militantes estudiantiles

y sindicales, sin que las conversaciones hubieran llegado a ningún lugar concreto. De estos contactos estuvo informado, en todo momento, el Comando de Huelga de la central.

Las expectativas y el silencio final

Una noción precisa sobre cuáles fueron las expectativas de la dirección de la CNT a través de estos contactos y conversaciones con los militares en el curso de la huelga general se encuentra en los boletines de la Comisión de Montevideo. El Boletín Nº 5, del 5 de julio de 1973, dice:

«En este Uruguay las discusiones entre obreros, oficiales y soldados gira, por la parte obrera, en defensa de los cinco puntos de la C.N.T. y los 4 y 7 de las FF.AA.; mientras que por la parte militar se insiste en que todavía no se han dado las condiciones para que pasen a la ofensi-va los inspiradores de los 4 y 7.

«El ejército se encuentra cansado e irritado, consecuencia de la resistencia indoblegable de la clase obrera y dicha situación no puede sostenerse mucho tiempo más ...»

La noche del 10 de julio, en la reunión de la Mesa Representativa de la CNT, la Federación OSE, integrante del Secretariado y alineada siempre con la corriente mayoritaria de la central, discrepó con la propuesta de levantar la huelga. Al igual que los delegados de FUNSA y FOEB, Villaverde creía que aún se podía obtener, por lo menos, la liberación de los presos. Al final, se acordó que se hiciera una gestión con ese objetivo.

El último encuentro de Villaverde, García y Torres con Cristi, en donde se buscaba un acuerdo mínimo para poner fin a la huelga general, fue en la mañana del 11 de julio. *«¡Nos dio cero pelota!»,* comenta enfáticamente el dirigente de OSE, porque a esa altura las ocupaciones se estaban levantando solas, fábrica por fábrica. En la reunión de la Mesa de la CNT de este día, nadie le preguntó qué había pasado con su gestión.

Villaverde recuerda que en ese momento se enteró que el dirigente de COFE (Confederación de Funcionarios del Estado), Olascoaga, también tenía un canal de conversación con Cristi en nombre de la CNT. *«No se porqué se mantenían conversaciones paralelas con el mismo jefe militar»,* confiesa el dirigente de OSE, que esta vez sí votó el levantamiento de la huelga general, por falta total de condiciones para mantenerla.

La frase utilizada en esa reunión de la Mesa por Vladimir Turiansky *«¡Con la dictadura no se negocia!»,* para dar por terminada la discusión y pasar a la

votación, era la triste constatación de que se habían frustrado todas las expectativas de frenar el golpe de Estado, de producir un vuelco favorable al pueblo en sectores militares y de generar algún cambio en la actitud asumida por las Fuerzas Armadas.

Al final de esos 15 días de intensos contactos y conversaciones entre sindicalistas y militares sólo restó un grande y prolongado silencio.

Los trabajadores de OSE refrendaron el levantamiento de la ocupación el 13 de julio. Villaverde puso a consideración de la asamblea si pasaba a la clandestinidad, como uno más de los dirigentes de la CNT requeridos, o si se presentaba normalmente a trabajar. La asamblea se pronunció por la segunda alternativa y Villaverde fue detenido poco después.

A esa altura, en el Cilindro Municipal, con más de 2.000 detenidos, se encontraban, entre otros, los dirigentes sindicales Félix Díaz, miembro del Comando y secretario de Organización de la CNT, Julio César Quinteros, Juan Antonio Iglesias, Eduardo Platero, Elbio Quinteros, Mario Trápani, Milton Montemar, Jonás Stenery, Geza Sary, Víctor Cayota, León Duarte, José Luis Cogorno, Roberto Olmos, Elena Rolandes y Manuel Liberoff.

.....
(*) Luis Michelini fue un personaje extraño de aquellos años, que circulaba con soltura por los medios políticos y de prensa más contrapuestos. 'Testimonio de una nación agredida', publicación del Comando General del Ejército, de 1978, dedica unas páginas a Gilberto Luis Michelini Schapapietra y lo define como "doble agente", del Partido Comunista y de la CIA estadounidense.

(**) En el II Congreso de la CNT, en 1971, el Sindicato de Funsa no aceptó integrar la Mesa Representativa de la central, en acto de protesta por la exclusión de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) del mismo organismo. A pesar del crecimiento de los sindicatos combativos, la tendencia mayoritaria les impuso una representación menor en los órganos de dirección de la CNT.

(***) En ausencia de León Duarte, desaparecido y asesinado por agentes de la dictadura militar, en Buenos Aires, Argentina, en 1975, la reconstrucción de estos hechos fue realizada gracias al testimonio de Hugo Cores, ex-dirigente bancario e integrante en ese momento de la dirección de la ROE, y de Luis Romero, miembro desde entonces de la dirección del Sindicato de Funsa.



La guerra del Partido Nacional

«El Partido Nacional se considerará en guerra contra el Sr. Bordaberry, enemigo de su pueblo ... y perdonarán que yo arroje al rostro de los autores de este atentado, el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo ... el vengador de la República: ¡el Partido Nacional!.»
(Wilson Ferreira Aldunate)

Estas fueron las palabras más importantes dichas en la última sesión del Senado por el líder del Partido Nacional y definieron la conducta futura de esa agrupación política tradicional. Los principales blancos antigolpistas fueron perseguidos por la dictadura dentro y fuera del país, incluso a través del secuestro y el asesinato. Aquella actitud estuvo presente, por fin, en el acuerdo que definió la vuelta al Estado de derecho en el país.

«Y tú qué vas a hacer?», preguntó el senador Alembert Vaz a Ferreira Aldunate la noche del 26 de junio de 1973. *«Mirá, yo me voy, porque no tengo vocación de preso»*, respondió el interpelado. Era una actitud personal, que no afectaba su conducta política. El «Wilson» y Carlos Julio Pereyra, el segundo líder en importancia del partido, combinaron que -si lograban salir del país-, se encontrarían en Buenos Aires para coordinar las acciones.

«Así sucedió cinco días después. Yo regresé a los 15 días y se acordó que Wilson -sobre quien pendía la principal amenaza- permaneciera allí. Comenzó desde entonces, una acción de resistencia desde el exterior y el interior, con frecuentes contactos», nos cuenta hoy el líder del Movimiento Nacional de Rocha (MNR). El senador Carlos Julio Pereyra salió por el Chuy, luego de un largo viaje en auto, por rutas poco frecuentadas.

En la madrugada del 27 de junio, Ferreira Aldunate se embarcó, en el Puerto del Buceo, hacia Punta del Este. Esa noche, desde un campo privado, Wilson viajó en avioneta a Buenos Aires, cuenta su correligionario y amigo, el senador Alembert Vaz. Tres días después, el Presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutierrez Ruiz, salió por el Puerto de Montevideo, con su documentación personal, también hacia la capital argentina.

Según el relato de Matilde Rodríguez Larreta, ella y Gutiérrez Ruiz se enteraron de la inminencia del golpe en la noche del lunes 25 de junio, en un «coctel» ofrecido por el entonces diputado Luis A. Lacalle Herrera, donde se encontraron con personalidades nacionales y del círculo diplomático. En la ocasión, la esposa de Gutiérrez Ruiz recuerda que un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos afirmó que el golpe era un hecho.

El 26 de junio, el Presidente de Diputados fue al Palacio Legislativo, pero a las 22 horas pasó por su domicilio, recogió una frazada y una radio, para ir a esconderse en casa de un amigo. Matilde Rodríguez Larreta tiene grabadas hasta hoy las imágenes de la despedida con su esposo, antes de la partida de éste hacia Buenos Aires. Le parecieron escenas de un filme de la resistencia francesa contra la ocupación de los alemanes.

Pero volviendo hacia atrás, aunque los sectores blancos mayoritarios sabían de los peligros, vieron venirse «*el malón contra las instituciones democráticas*» -usando las palabras del senador Carlos Julio Pereyra-, con cierto desconcierto y mucha impotencia. «*Había una confianza ciega en el civilismo del país, nos tomó totalmente por sorpresa. Fue una ingenuidad nuestra, un error terrible*», dice el ex-senador Alembert Vaz.

El dirigente de Por la Patria reconoce que la aprobación del «estado de guerra interna» y de la Ley de Seguridad del Estado, en julio de 1972, con los votos de su sector, cedió a los militares importantes atribuciones, aunque señala que, poco después, un informe de las FF.AA. dio por ganada la guerra contra los Tupamaros. «*Pero los militares siguieron actuando. Nosotros no creíamos que eso podía pasar*», explica el dirigente blanco.

En determinado momento, Vaz le preguntó al general Antonio Francese, cuál había sido la responsabilidad de los políticos. «*Es un grupo de militares que se fijó la idea de que tenían que llegar al gobierno desde muchos años atrás*», fueron las palabras del ex ministro de Defensa, descabezado durante la crisis de febrero de 1973. El ex-legislador dice que Por la Patria tenía un gran desconocimiento de lo que sucedía dentro del Ejército.

Alembert Vaz rememora una reunión, realizada en un escritorio de la Ciudad Vieja de la capital, en medio de los sucesos de febrero del 73, en la que estuvieron Ferreira Aldunate, Juan Pivel Devoto, el ex-comandante de la Marina, Juan Zorrilla, el ex-coronel del Ejército Ventura Rodríguez y otros militares. Según el dirigente de Por la Patria, el tema de ese encuentro era cómo gestar un movimiento de restauración de la legalidad.

El día 9 de febrero, en declaraciones a la prensa, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz informó de una gestión política realizada, en nombre de su sector

Por la Patria, ante el ministro de Ganadería y Agricultura, Benito Medero. De acuerdo con esta versión, la mayoría del nacionalismo propuso estructurar un programa mínimo de gobierno, elaborado en consulta entre políticos y militares, para ser llevado luego a un plebiscito.

Todas estas gestiones fracasaron. Matilde Rodríguez Larreta recuerda la desazón que le produjo la falta de la voz de Wilson en su audición radial diaria. A su retorno, dijo: *«estaba esperando que se juntaran»*, aludiendo a Bordaberry y a los golpistas. El líder blanco -quien denominó «15 señoritas vestidas de organdí» a las pocas personas que se congregaron entonces ante la Casa de Gobierno-, no esperaba otra cosa del presidente.

Consumado el pacto de Boisso Lanza, el Partido Nacional emitió una declaración para *«poner de manifiesto que el Presidente de la República no ejerce la totalidad de las competencias atribuidas a su cargo»* y reafirmar que *«las Fuerzas Armadas deben contraerse a la estricta observancia de los cometidos específicos que la ley impone: la defensa de la soberanía, la preservación de la paz, la legalidad y el orden institucional»*.

Entre febrero y junio del 73, Ferreira Aldunate intentó movilizar a sus partidarios, pero constató la pérdida creciente de su influencia política. *«No teníamos poder de convocatoria!»*, expresa en tono dramático Alembert Vaz, al recordar la última asamblea blanca y el último discurso de Wilson hecho en la calle. Fue el acto de la Plaza Matriz, el 22 de junio, en frente a la sede del Partido Nacional, que congregó a unas tres mil personas.

Carlos Julio Pereyra dice que los uruguayos estaban acostumbrados a ver dictaduras en casi toda América Latina; no creían sinceramente que eso sucediera en Uruguay. Pero agrega que *«los golpistas y alguna prensa, habían contribuido a que el grueso de la ciudadanía tuviera una imagen desfavorable del Parlamento: lentitud, sesiones excesivamente largas, falta de solución a los problemas y supuestos e inconcebibles privilegios»*.

«No había ninguna razón para dar el golpe de Estado. ¡Fue una infamia!», reacciona Vaz, al referirse a los privilegios atribuidos entonces a la clase política. *«Se los creyeron hasta los propios militares, quienes realizaron una exhaustiva búsqueda de hechos que no detectaron, porque no existían. A mi me reclamaron una maquineta de enganchar papeles que habría desaparecido de mi despacho»*, comenta por su parte el líder rochense.

Frente al golpe del 27 de junio, los sectores mayoritarios del Partido Nacional utilizaron todas las formas de resistencia a su alcance e incluso hicieron alianzas inéditas en la historia política del país. *«La declaración conjunta del Partido Nacional y el Frente Amplio fue emitida en los días en que yo estaba*

reunido con Wilson y otros dirigentes en Buenos Aires», nos dice hoy Carlos Julio, despejando cualquier duda al respecto.

El primer acuerdo del Partido Nacional y el Frente Amplio expresó su apoyo a la huelga general y el segundo propuso bases de una salida política democrática, a través de un gobierno provisorio, integrado por las fuerzas antigolpistas, y la realización de elecciones, para integrar una Asamblea Constituyente e instalar un nuevo gobierno. Los golpistas, sobre todo del nacionalismo, intentaron negar la existencia de esos acuerdos.

Pocos días después del golpe, comenzó a circular entre la población el boletín *«Resistencia Blanca»*. Dirigentes nacionalistas, sobre todo de Por la Patria, organizaron acciones de resistencia a partir de las Intendencias del Interior que respondían a su orientación y coordinaron con las fuerzas anti-golpistas el apoyo a la huelga general y otras formas de protesta, como el boicot a los comercios y la realización de apagones colectivos.

Los mandos militares identificaron a los sectores democráticos del nacionalismo como un enemigo político y procedieron en consecuencia. El Directorio del Partido Nacional fue disuelto por decreto y su presidente, el capitán de navío (retirado) Homar Murdoch, preso y procesado. Igual suerte corrieron los diputados Oscar López Balestra, Miguel Angel Galán, Luis A. Lacalle, Carlos Rodríguez Labruna y el senador Walter Santoro.

La detención del diputado Luis A. Lacalle Herrera es una muestra de las situaciones inusitadas que se vivieron entonces. Luego de ser encapuchado, como era la costumbre militar, Lacalle descendió por la escalera del edificio de nueve pisos en donde residía, gritando por el trayecto *«¡Viva el Partido Nacional!»*. El político expresó su rechazo al atropello de una forma que los soldados no hubieran tolerado con un preso de otra categoría.

«La prisión de diversos legisladores y políticos nacionalistas recién pareció hacer despertar a la realidad a mucha gente. Nuestra principal tarea fue encender, cada vez más, esa llama de la resistencia y hacerla efectiva, dentro de los escasos medios y en las circunstancias que lo possibilitaban», cuenta el líder del Movimiento Nacional de Rocha, al señalar la dificultad para cambiar hábitos muy arraigados en la política uruguaya.

«Los pocos dirigentes que no lo habían percibido -agrega Carlos Julio-, reaccionaron de inmediato, pero la reacción popular -más allá de la huelga general- no fue inmediata, salvo la concentración del 9 de julio». Indagado sobre las perspectivas de la huelga general de la CNT, el líder nacionalista señala la presencia de dos posturas, *«la de resistir hasta ver si era posible revertir las cosas y la de procurar soluciones menos negativas».*

«No debe olvidarse -explica el veterano político rochense- que, pese a su posición antigolpista, hubo quienes creyeron en una revolución de tipo «peruanista», es decir en una ruptura institucional para promover reformas sociales y económicas». Alembert Vaz relata un encuentro con el ingeniero Massera, del Partido Comunista, quien lleno de optimismo quiso inducirlo a hablar con militares. «¡No, de ninguna manera!», le replicó Vaz.

El ex-senador de Por la Patria comenta que no le asignó posibilidades de éxito a la huelga general, pues le pareció una respuesta restringida a los sindicatos y no al conjunto de la población. *«La huelga no influyó mucho, el golpe no sensibilizó demasiado a la gente. Tuvimos una ilusión, pero no fui siempre optimista. Hubo hasta cierta aquiescencia de la sociedad. Pero duró poco, después gobernaron solos»,* concluye Alembert Vaz.

Tres días después del levantamiento de la huelga por la CNT, Ferreira Aldunate convocó a dirigentes blancos de todo el país, en una estancia del departamento de Mercedes. Horacio Polla, miembro de la Junta Nacional de Por la Patria, integró uno de los grupos que viajó desde Montevideo y, según su testimonio, la visión transmitida por Wilson a los presentes fue de que la dictadura no podría prolongarse por mucho tiempo más.

«Nos equivocamos en esa apreciación -admite Polla hoy-. No creíamos que el sistema político pudiera estar tan desprestigiado como para que una dictadura pudiera gobernar por tanto tiempo. No tuvimos en cuenta además el impulso y los propósitos de las Fuerzas Armadas, que venían preparándose desde tiempo atrás», comenta el dirigente nacionalista. Polla reafirma que los blancos no tenían contactos con militares en ese momento.

Al retomar de la reunión de Mercedes, uno de los autos en que viajaban los dirigentes nacionalistas, el profesor Juan Pivel Devoto entre ellos, tuvo un grave accidente en la carretera, al ser embestido por otro vehículo. Los ocupantes del auto accidentado, cuyo conductor era Horacio Polla, sufrieron contusiones varias, pero consiguieron salvar sus vidas. Sería uno más de los sucesos que afectaron después a figuras del nacionalismo.

El Directorio del Partido Nacional siguió funcionando por un tiempo en la clandestinidad pero, dado el alto número de sus miembros, que dificultaba la seguridad de las reuniones, se decidió confiar la dirección de las acciones a un organismo más reducido. A fines de julio del 73, entró en funciones el primer Triunvirato del Partido Nacional, integrado por los senadores Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz, y por el diputado Mario Heber.

«Algunos «blancos» que ocupaban cargos de cierta jerarquía al servicio de la dictadura (Consejeros de Estado, Sub Secretaría del Interior, etc.)

procuraron copar la dirección partidaria ... Quizás no sea ajeno -directa o indirectamente- a este asunto el tema de las botellas de vino envenenado dirigido a tres de los que más actuábamos, atentado que jamás se aclaró», dice Carlos Julio Pereyra, único sobreviviente de ese grupo.

Pereyra se refiere a las botellas de vino enviadas al domicilio de los miembros del Triunvirato, en 1978, con el pretexto de celebrar un suceso político. La esposa de Mario Heber murió víctima del veneno, pero el resto consiguió salvarse. En 1976, Gutierrez Ruiz fue secuestrado en su casa de Buenos Aires y asesinado por agentes de la dictadura uruguaya. Desde ese momento, Ferreira Aldunate se asiló en Londres, Inglaterra.



Colorados, liberales y realistas

El ex-presidente de la República, Luis Batlle Berres, falleció en 1964. La Lista 15, sector mayoritario dentro del Partido Colorado, sufre la crisis propia de las agrupaciones políticas cuando pierden un gran líder. El hijo de Luis, Jorge Batlle Ibáñez, se perfiló entonces como el nuevo líder e inició consultas en pro de la reforma de la Constitución.

En 1965, en el Club Alemán, Jorge Batlle organizó un almuerzo con las figuras más importantes de la Lista 15 -Carlos Fisher, Ledo Arroyo Torres, Héctor Grauert, Luis Hierro Gambardella, entre otros-, para explicarles su posición. Una de las propuestas era la abolición del Ejecutivo Colegiado, en vigor desde 1959, y la vuelta al presidencialismo

«Pero Jorge, tú con ésto le regalás la Presidencia a Gestido», comentó Ledo Arroyo Torres, al final de la exposición.

«Don Ledo, en el Uruguay del futuro hay general por votación o general por 'botación'. Elija!», fue la respuesta de Batlle.

El dirigente político explica hoy, con esta anécdota, cómo veía en ese momento el proceso político futuro del país y, en consecuencia, cuál era su percepción de la posibilidad de un golpe militar. El general (retirado) Oscar Gestido, el otro candidato del Partido Colorado, ganó en efecto la «votación» para la Presidencia en las elecciones del 66, simultáneas con el plebiscito en el cual se aprobó la reforma constitucional.

«En aquel momento, en el Uruguay, más tarde o más temprano, se iba a producir el fin de un tiempo y el fin de ese tiempo se produjo», afirma Jorge Batlle y alude al contexto regional. En Argentina imperaba la dictadura del general Onganía y en Brasil la del general Costa e Silva. Según el dirigente colorado, Uruguay, más allá de algunas peculiaridades, no podía quedar al margen del proceso en curso en América Latina.

¿Esto quiere decir que el golpe de Estado era inevitable? *«Yo digo que era evitable si nos hubiéramos animado a dar un salto cualitativo, pero creo que era*

prácticamente inevitable», responde el líder de la 15. Y se explica: «Lo cierto es que los uruguayos habíamos vivido tan bien durante tantos años que, cuando el país comenzó a perder ese nivel, los sectores de la izquierda creyeron que era porque alguien se la llevaba».

«¿Quién se la llevaba? Era la «rosca» capitalista, los políticos que los apoyaban y los militares que los protegían», agrega, usando los términos de la izquierda de los años 60. La «rosca» era un núcleo de grandes empresarios responsabilizados por graves ilícitos económicos. El propio Jorge Batlle fue acusado de lucrar con información anticipada de una devaluación monetaria, en un sonado caso conocido como «la infidencia».

«Bueno, tuvieron que pasar treinta años continuados para ver que no se había robado. Que el deterioro era consecuencia de la inflación y de nuestro conservatismo. Que no nos animábamos a cambiar. Y en eso todavía estamos», expresa el dirigente colorado, quien se integra dentro de una «minoría liberal» y se siente hasta el presente como alguien que ha estado remando contra la corriente en la proposición de esos cambios.

El líder de la 15 no ignoraba lo que ocurría en los medios castrenses y enfatiza que el golpe no pudo ser el producto exclusivo de una confabulación de largos años, urdida por un pequeño núcleo de oficiales. El factor decisivo fue, a su criterio, una coyuntura política crítica, tanto en el plano nacional como internacional. Es la historia de toda América Latina; el golpe se da sólo cuando el grupo golpista arrastra a la mayoría.

Sin embargo, el dirigente colorado admite que el Uruguay tenía algunas características peculiares, como la de una separación bastante grande entre la dirigencia política del país y la institución militar. Y lo explica así: *«En nuestra existencia como nación, a diferencia de otras naciones con mayor presencia en el mundo, nosotros nunca habíamos precisado manejar a nivel político la inteligencia militar o policial».*

El sector de Jorge Batlle comenzó a preocuparse por la situación de las Fuerzas Armadas en 1971. *«Una serie de hechos de distinta índole -previos a 1972-, fueron indicios de la animosidad de algunos sectores de las Fuerzas Armadas con el poder político»,* comenta el ex-diputado Francisco Forteza. Tras la victoria electoral del Partido Colorado en 1971, la 15 aprovechó el nuevo mandato para hacer algunos cambios.

«No obstante ser el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Pérez Caldas, de confianza de nuestro sector político, se entendió del caso reforzar la conducción de las Fuerzas Armadas por el Gobierno con un eje Armada-Fuerza Aérea, capaz de contrarrestar cualquier eventual corriente

golpista que pudiera generarse», explica Forteza, quien integró el gabinete ministerial en representación de la Lista 15.

«Esta línea fue compartida por el Presidente electo Sr. Bordaberry, y culminó con la designación del C/A Zorrilla como Comandante en Jefe de la Armada, al inicio de su período de gobierno», agrega. Esta línea de acción muestra que la desconfianza mayor estaba enfocada hacia los mandos del Ejército. Para el ex-ministro colorado, el problema no era de filiaciones políticas. «No eran blancos, eran verdes ...», dice.

«Los políticos no creíamos todas las informaciones que nos trasmilian los militares», acota Batlle, sobre todo luego de proclamada la derrota de la guerrilla, en 1972. El dirigente colorado confirma las tentativas para frenar el ascenso militar pero, a cierta altura -en octubre de ese año, debido a su encarcelamiento, al denunciar ciertos hechos castrenses por televisión-, se convenció de que ese proceso era irreversible.

La prisión de Jorge Batlle marcó la ruptura de la 15 con el gobierno de Bordaberry. El líder político no acepta que su prisión hubiera sido un hecho fuera del control del presidente de la República ni que, si el mandatario lo ignoró antes de suceder, no pudiera haber tomado las medidas para sancionar a los responsables. Los ministros Francisco Forteza, Walter Pintos Risso y Julio M. Sanguinetti, dimitieron del gabinete.

«Los hechos de febrero de 1973 confirmaron la confianza depositada en la Armada y en su Comandante en Jefe ... En ningún momento el presidente Bordaberry estuvo dispuesto a renunciar. De haber ocurrido, hubiera sido sustituido por el vicepresidente, Sr. Sapelli, entre otras razones porque estimamos que a esa fecha los militares no se sentían aun en condiciones de detentar abiertamente el Gobierno», dice Forteza.

Raúl Lago relata una reunión en ese momento en el diario *«Acción»*, en donde se contempló la sustitución constitucional del presidente. La discusión concluyó con las palabras de Aquiles Lanza: *«la única posición es defender las instituciones, esté quien esté en el Gobierno»*. Lago recuerda asimismo que Sanguinetti fue hasta la Plaza Independencia y se sorprendió por la escasa respuesta al llamado hecho por Bordaberry.

«El Uruguay ha visto aparecer un poder paralelo que firmó su acta de nacimiento en la presencia callejera de las FFAA frente a los poderes constituidos», dijo «Acción» el 10 de febrero. El matutino quincista destacó «la actitud resuelta de adhesión a los principios de la República», asumida por la Armada Nacional, y señaló que «ningún cambio podrá suponer romper con instituciones que nos vienen de Artigas».

El senador Amilcar Vasconcellos, líder de la 315, un sector minoritario del Partido Colorado, quien llevó al Parlamento en 1972 la denuncia del plan golpista y la reiteró luego en una carta abierta al presidente de la República, comenta hoy: *«El golpe se dio en febrero, la mayoría no quiso verlo porque esperaba que la cuestión se diluyera. Se convocó a la Comisión Permanente de la Asamblea General y no hubo quorum ...»*

En los días previos al golpe de junio, Antonio Marchesano conversó con el ministro de Defensa, Walter Ravenna, para ver la posibilidad de modificar el pedido de desafuero de Erro. Para el diputado quincista resultaba evidente que, por sus características, el expediente enviado por la Justicia Militar no podía ser aprobado por el Parlamento. Solamente pudo confirmar que no había interés en llegar a una fórmula de acuerdo.

Ante la disolución del Parlamento, la Lista 15 expresó sus posiciones legalistas en forma coherente, si bien de manera declarativa, pues tenía la convicción de que el hecho era irreversible. Sanguinetti, Marchesano y Lago, entre otros, se dedicaron a mantener contactos políticos y sindicales para informarse de la situación, sin llegar a acciones comunes. *«No había clima para hacer nada»*, nos dice Marchesano.

«En los días inmediatos al golpe de Estado no hubo reuniones políticas, por razones obvias», relata Vasconcellos, quien no tuvo conocimiento de los acuerdos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional ni de la iniciativa de convocar a la Asamblea General. *«La huelga general -opina- no tenía en esas circunstancias posibilidades de éxito, pero constituyó una demostración del espíritu cívico del pueblo uruguayo»*.

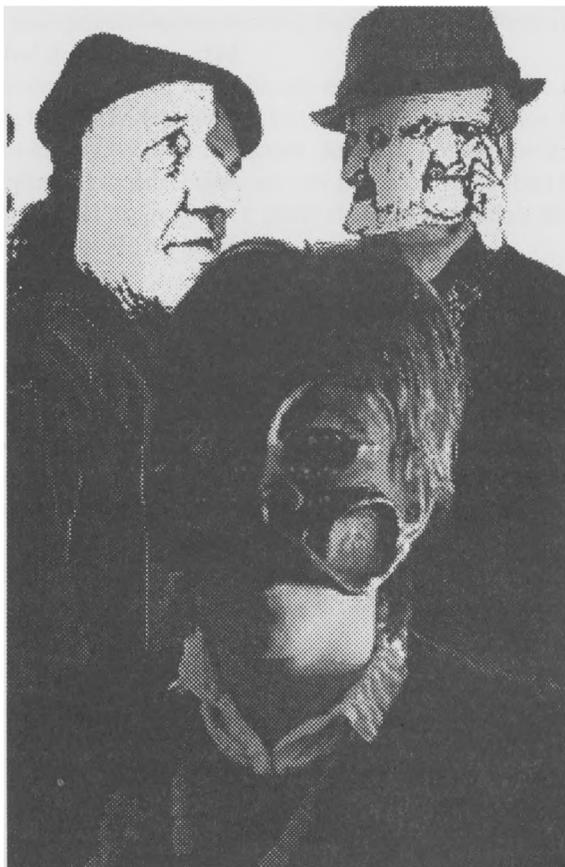
Sanguinetti confirmó a la prensa que la 15 no intervendría en ninguna iniciativa del Poder Legislativo disuelto, ni en alianzas con otros sectores políticos, ni en la integración del nuevo Consejo de Estado. *«Deseo que no quede ninguna duda en cuanto a nuestra oposición a la situación emergente del 27 de junio (...) Con la misma claridad, desmiento toda información que nos vincule al Frente»*, dijo Sanguinetti.

«Quisimos aclarar que no apoyábamos una salida del tipo «peruanista», como creían sectores de la izquierda», dice Batlle. No obstante, reconoce en la huelga general una expresión del pueblo que, a su criterio, era contra los políticos y por la libertad. La ausencia de acuerdos o acciones comunes con el Partido Nacional, Jorge Batlle la explica simplemente por la salida del país de su líder Wilson Ferreira Aldunate.

¿Cuál era el sentir de la población luego del golpe de Estado? *«Si los militares hubieran hecho un plebiscito, 90 días después del golpe, ganan por*

muerte, afirma el líder de la 15 y atribuye esa impresión a un sentimiento democrático, inclusive de la mayoría de los militares. Con esa misma idea, Batlle interpreta los conflictos posteriores de las Fuerzas Armadas con Bordaberry y con el general Alvarez.

Estas apreciaciones permiten explicar la conducta del quincismo en el período posterior al golpe. Con una larga experiencia en el gobierno del país - a diferencia del Partido Nacional y el Frente Amplio-, el Partido Colorado no mantuvo una actitud de choque frontal con la dictadura. Estuvo dispuesto y fue capaz, siempre que las circunstancias se lo permitieron, de hacer pesar sus posiciones dentro del régimen.



Los estudiantes y la Universidad

En el Uruguay de fines de los años 50, las luchas por la Ley Orgánica de la Universidad fueron la coronación de un movimiento estudiantil inspirado en la Reforma de la Universidad de Córdoba, de 1918. Fue un movimiento que buscaba convertir a la Universidad en germen de la libertad y el receptáculo de los ideales revolucionarios de la época, para lo cual era imprescindible la autonomía frente a los partidos políticos y el gobierno.

La Ley Orgánica puesta en vigor en 1959 estableció la autonomía y el co-gobierno en la enseñanza superior. Autonomía administrativa y docente, con recursos provenientes del Estado y presupuesto aprobado por el Parlamento. Co-gobierno tripartito, constituido por los órdenes estudiantil, docente y profesional, encabezado por un Decano en cada Facultad y por el Rector en el Consejo Directivo Central de la Universidad.

Esa Universidad y ese movimiento estudiantil, fielmente representado entonces por la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay), irrumpieron en los años 60 en la escena del país, no sólo para reclamar sus recursos presupuestales, sino como actores políticos. Aspiraban a influir en el destino de la sociedad uruguaya y, a pesar de las resistencias, alcanzaron una incontestable gravitación en la crisis nacional.

FEUU: ¿independencia o subordinación?

La FEUU se movilizaba frente a todo hecho nacional o internacional que atentara contra la libertad, la justicia social y la autodeterminación de los pueblos. En 1964, la protesta contra la ruptura de relaciones de Uruguay con Cuba provocó un cerco policial de cuatro días a la Universidad. En 1968, la lucha iniciada contra un aumento del boleto capitalino llegó hasta exigir la renuncia del presidente de la República, Pacheco Areco.

La solidaridad obrero-estudiantil era uno de los principios básicos de la FEUU, que la llevó a apoyar a todo gremio en conflicto y a acompañar los

esfuerzos de unificación sindical. Por esa razón, en el Primer Congreso de la CNT, al elaborar los Estatutos de la central única, no hubo ningún reparo en establecer que la FEUU sería miembro -en calidad de organización fraternal, con voz y sin voto- de la Mesa Representativa Nacional.

Inmersa en el proceso del país, la FEUU vivió la polarización política creciente en todos los ámbitos y ésta puso en cuestión su identidad como gremio. Hasta 1968, todos cumplían las resoluciones de las asambleas de facultades y del Consejo Federal. En los años posteriores, al colocarse por encima de todo la política de grupos y partidos, se debilitaron los acuerdos gremiales y el apoyo de la gran masa estudiantil.

Cuando se produjo el golpe del 27 de junio de 1973, la FEUU también tenía previsto, por decisiones de años atrás, que la respuesta debía ser la huelga general y la ocupación de los locales universitarios. Sin embargo, el grado de autonomía política de la FEUU era uno de los temas polémicos de ese momento. Para unos, la FEUU debía subordinarse a las decisiones de la CNT; para otros, debía actuar con total independencia.

Comunistas y socialistas defendían la primera posición; «26 de Marzo» y G.A.U. la segunda, pero en ambos casos se estaba pensando en la propia línea política. Un problema más: la FEUU tenía un Comité Ejecutivo, electo por corrientes políticas, y subsistía el viejo Consejo Federal, en donde cada centro estudiantil tenía un voto. El PC y el PS tenían mayoría en el Comité Ejecutivo, pero podían perderla en el Consejo Federal.

«Aún aquellos que en el momento no entendimos que lo de febrero era un golpe de Estado, el golpe de junio lo vimos como la síntesis de todo un período de deterioro del orden democrático», dice Jorge Landinelli, en ese entonces secretario general de la FEUU y miembro de la Juventud Comunista. Landinelli recuerda que supo de la inminencia del golpe en el velatorio del escritor Paco Espínola, en la noche del 26 de junio.

La ocupación de los locales universitarios se puso en marcha el propio 27 de junio, a partir de las asambleas realizadas en las facultades. Pero el Comité Ejecutivo de la FEUU demoró en tomar la resolución concreta, porque esperaba que llegara la decisión de la central obrera. *«La polémica sobre qué hacer se dio desde el primer momento»*, afirma Alvaro Jaume, representante de la FEUU ante la CNT e integrante de los G.A.U.

Para el PC y el PS, la FEUU debía actuar en apoyo a las decisiones de la CNT; para el «26 de Marzo» y los G.A.U., la decisión de huelga general contra el golpe debía aplicarse en cualquier hipótesis. El centro de discusión en los días 27 y 28 de junio fue la primera declaración de la CNT, la que llamaba a cumplir

con la resolución de los congresos, mantenerse en estado de alerta y asamblea, sin especificar el objetivo de la acción.

Según Jaume, la mayoría del Comité Ejecutivo manejaba la posibilidad de un giro «peruanista» del golpe militar. Y esta eventualidad definía el carácter del enfrentamiento, pues se estimaba que una respuesta radical del movimiento popular podía fortalecer a la ultra-derecha militar. Para la otra posición, la FEUU no podía servir de «furgón de cola» de nadie y debía desplegar todas sus fuerzas contra el golpe.

Jaume recuerda que en ese momento se pensaba que, si se desplegaban todas las fuerzas del movimiento popular, era posible impedir el golpe de Estado. «*Había mayor preocupación por las políticas de freno dentro de la izquierda, que por la fuerza del enemigo*», dice el ex-dirigente estudiantil, quien al mismo tiempo reconoce que la polarización interna había secado la frescura que mantuvo la FEUU hasta el año 1968.

Al tercer día, cuando las posiciones de Seregni, del Frente Amplio y de la CNT coincidían, en la FEUU se superaron algunas dudas, pero subsistieron diferentes expectativas. «*La huelga se largó con gran incertidumbre -explica Landinelli-, en los años precedentes se había debatido sobre su carácter insurreccional. Muchos creían que la huelga general sería el catalizador de importantes pronunciamientos políticos y militares*».

La presencia de estudiantes en los locales universitarios se calculó en unos 5.000, de un total de 32.000 inscriptos. Para Landinelli, estas cifras no indicaban una falta de apoyo estudiantil a la huelga general, sino que en las ocupaciones participaban aquellos más comprometidos. Jaume las considera, en cambio, una muestra del aislamiento interno de la FEUU, que atribuye hoy a la preeminencia de la política de grupos y partidos.

«*Cada grupo buscaba controlar para sí la organización gremial*», agrega el ex-dirigente estudiantil. Recuerda que sus intervenciones en nombre de la FEUU no eran bien recibidas en la Mesa de la CNT, porque no concordaban con la corriente mayoritaria de la central. En la huelga general, el Ejecutivo de la FEUU no recibía informaciones de la CNT a través del canal gremial, sino por las vías de comunicación partidaria de sus miembros.

La FEUU aprobó por consenso la realización de acciones para impedir la circulación de ómnibus. Levantada la huelga en AMDET, el Comando de la CNT se opuso a medidas similares propuestas por los sindicatos. En la FEUU se aprobaron a pedido de una delegación de trabajadores del transporte. Pero sin mayor efecto, porque la ejecución quedó a cargo de los militantes que estuvieran de acuerdo y no pasaron de pequeños grupos.

Landinelli explica que la FEUU tenía asimismo responsabilidades en la posición de la Universidad. *«La postura antigolpista de la Universidad tenía un perfil institucional propio y esto también imponía condicionamientos en la movilización de la FEUU, en el sentido de ocupar con responsabilidad los locales. Por todo esto, la FEUU no podía guiarse por su exclusiva dinámica de acción»*, concluye el ex-secretario general del gremio.

Todas las corrientes de la FEUU se sumaron en la manifestación del 9 de julio. Pero, con distintas expectativas cada una, fueron muy diferentes las evaluaciones hechas a posteriori. Landinelli tuvo la impresión de que se había hecho el máximo posible como acción de masas contra la dictadura. *«Una sensación de potencia, los soldados apuntaban y la gente no se movía»*, dice Jaime, quien la vivió como un refuerzo de la huelga.

Por esta razón, el delegado de la FEUU en la Mesa de la CNT, cuando se propuso levantar la huelga general -en la reunión del miércoles, porque a la del martes no fue convocado-, la sintió como una entrega. *«El compañero de la FEUU no entiende que la lucha no se agota en un único medio»*, le dijo el presidente de la reunión, Vladimir Turiansky, al cortarle la palabra con el alegato de que no había tiempo para fundamentaciones.

Fue así que la FEUU tuvo dos balances de la huelga. Una declaración del Comité Ejecutivo, que apoyaba la conducta de la CNT y saludaba el heroísmo de la clase obrera y el pueblo. Y una resolución del Consejo Federal, luego de un debate en asambleas, que criticaba a la CNT, por no haber puesto en juego toda la fuerza del movimiento sindical, y a la propia dirección de la federación, por subordinarse a las decisiones de la central obrera.

Una anécdota de Landinelli sintetiza cómo evaluó la Juventud Comunista los resultados de esta movilización. En el curso de la huelga general, la UJC experimentó una avalancha de afiliaciones de origen independiente y, en la enorme mayoría, de ex-integrantes de la Juventud Socialista. El aumento de los miembros del partido era la confirmación de que su política era justa y la garantía de su creciente influencia en el gremio.

Al término de la huelga general, la impresión del ex-secretario general de la FEUU era de que la dictadura no se encontraba consolidada. La autonomía universitaria, la legalidad de partidos y sindicatos -sólo la central había sido ilegalizada-, se mantenían. La dirección de la FEUU se preparó entonces para librar una nueva batalla en las elecciones universitarias de setiembre próximo, las primeras a realizarse con voto secreto.

Universidad: lo político y lo institucional

El Rector de la Universidad, Samuel Lichtensztejn, estaba bastante al tanto de lo que podía ocurrir en junio de 1973. Dirigentes políticos y amigos, entre ellos el vice-presidente de la República, Jorge Sapelli, y militares de mediano rango le habían advertido sobre la inestabilidad de la situación política. *«Sin saber cuándo ni cómo, de Bordaberry y los que lo rodeaban se estaba esperando cualquier cosa»*, dice Lichtensztejn.

La noche del 26 de junio, el Rector intercambió las informaciones de último momento con el diputado Hugo Batalla, con el Decano de Ciencias Económicas, Danilo Astori, y con el profesor Alberto Couriel, en un bar de 18 de Julio y Bulevar Artigas. *«Junio y julio son terribles, así como en enero y febrero no pasa nada»*, comenta Lichtensztejn, para quien la programación del golpe tuvo en cuenta esos ritmos típicos del país.

El Rector concurrió, en la tarde del 27 de junio, al Ministerio del Interior, acompañado por el Decano de Arquitectura, Carlos Reverdito. Se encontró con el senador Enrique Rodríguez, del Partido Comunista, que también había sido convocado por Bolentini a su despacho. De las palabras del ministro, *«saqué la conclusión clara de que la Universidad no era un blanco inmediato del gobierno de facto»*, nos asegura Lichtensztejn.

Bolentini no admitió que se tratara de un golpe, sino de una situación «transitoria», de «reordenamiento». *«Espero que la Universidad no enturbie más esa situación. Los estudiantes no dependen de Usted, pero es necesario tratar de moderar»*, habría dicho el ministro, quien señaló que si las cosas iban demasiado lejos se producirían daños irreparables. Hubo acuerdo en estar en contacto ante cualquier problema imprevisto.

Al hablar de «daños irreparables», Bolentini aludía a la intervención de la Universidad, amenaza que siempre estuvo presente en los momentos de enfrentamiento con los gobiernos de turno. Sin dudar del carácter dictatorial del golpe, las autoridades oscilaron entre dos posturas: la mayoría, que veía la intervención como un hecho inminente y los que consideraban que había un plazo a ser aprovechado, entre los que estaba el Rector.

El Decano de Medicina, Pablo Carlevaro, confirma que causó sorpresa la no intervención inmediata de la Universidad y que hubo algunas diferencias de

apreciación en el Consejo Directivo Central. De todas maneras, la declaración del 27 de junio exhortó a los universitarios *«a luchar conjuntamente con la totalidad del pueblo (...) contra el afianzamiento de la dictadura, por el restablecimiento pleno de la vigencia de las libertades»*.

Los estudiantes habían declarado la huelga general contra el golpe y ocupado los locales ese mismo día. En la sede central de la Universidad, la ocupación contaba con alrededor de 200 estudiantes. Lichtensztejn rehace las palabras que dijo a los representantes de la FEUU: *«Yo soy el Rector y mantendré como tal las relaciones con el Poder Ejecutivo. Me solidarizo personalmente con Ustedes, pero no estoy ocupando»*.

Lichtensztejn explica que tuvo que adoptar una estrategia dual. Era un miembro de la Universidad ocupada, pero como Rector no estaba ocupando. Dualidad provocada por la autonomía de la Universidad; entre su posición política, opuesta al gobierno y a la dictadura, y la conducta institucional, porque era un órgano del Estado. El Rector preservó de esa manera, por un tiempo más, el espacio institucional de la Universidad.

Las autoridades universitarias organizaron guardias en la sede central y en cada facultad, para garantizar que hubiera en todo momento miembros de los consejos en los locales, como una presencia disuasiva ante cualquier intento de agresión. *«Todo dentro de una gran ingenuidad, porque las fuerzas eran tremendamente dispares. La represión a la Universidad fue con 'guante blanco', comparada con otros casos»*, comenta Carlevaro.

La noche del 29 de junio, el ministro del Interior llamó al Rector y le comunicó que la Universidad debía ser desocupada. *«Apelamos a su buena voluntad, va a instalarse un pelotón militar y va a entrar. La decisión es de ustedes, porque están ocupando»*, dijo Bolentini, dando plazo hasta las seis de la madrugada siguiente para efectuar el desalojo. La comunicación se trasladó a todos los ocupantes y se inició una discusión.

Lichtensztejn recuerda la vivencia de horas de gran incertidumbre, era una situación completamente nueva. La coordinación entre la FEUU y la CNT no era muy fluida, las posturas oscilaban entre la decisión de resistir y la desorientación. A las dos de la madrugada, una delegación de estudiantes le dijo: *«Nosotros nos quedamos»*. Para los decanos, llegar a un enfrentamiento era una locura, correr el riesgo de una matanza inútil.

Dos horas después surgió una nueva posición. La decisión era quedarse hasta cinco minutos antes del plazo y, si los soldados se preparaban para el asalto al local, entonces el Rector debía salir a negociar ... *«No tiene sentido»*-respondió Lichtensztejn-, *«no van a reconocerme y atacarán igual»*. El Rector era partidario

de negociar el fin del cerco policial a cambio de la salida de los ocupantes, sin que hubiera fichados ni presos.

Al final, con el acuerdo de los estudiantes, Lichtensztejn le comunicó a Bolentini que la Universidad sería desalojada pacíficamente, pero que debía darle garantías de que no habría detenciones ni revisión de los locales. El ministro aceptó la proposición, el cerco fue levantado y los ocupantes del local central salieron en camionetas de la Facultad de Agronomía, para que no fueran detenidos en las inmediaciones del lugar.

Al hacerse el día, los locales universitarios permanecieron abiertos y fueron reocupados por los estudiantes. El Consejo Directivo Central emitió una declaración en repudio a la ilegalización de la CNT y en el mismo sentido se pronunció la Asamblea General del Claustro Universitario. La definición institucional más importante de la Universidad contra el golpe fue un acto propio en el Paraninfo y la manifestación posterior.

El acto fue concebido como una sesión abierta del Consejo Directivo Central, con el lema «Levantar el sagrado grito de la Libertad-Destruir a la tiranía», dos consignas del héroe nacional José Artigas. El Rector efectuó una sólida exposición acusatoria contra el gobierno, al que calificó como «dictatorial» y «cisplatino», esto último debido a las simpatías declaradas por Bordaberry con la dictadura militar brasileña.

El Paraninfo y las escalinatas de acceso a la Universidad se llenaron completamente. Las autoridades temieron que se provocara algún incidente grave. Lichtensztejn recuerda que el ex-Rector Oscar Maggiolo le hizo notar que el local estaba demasiado cerrado y dispuso que se abrieran todas las puertas. *«Era el primer acto público contra la dictadura»*, explica, para dar una idea de la tensión y la emoción de los presentes.

Al finalizar el acto, unas 1.500 personas salieron a 18 de Julio. Desde los edificios cercanos aplaudían a los manifestantes, encabezados por las autoridades de la Universidad, portando una bandera uruguaya y cantando el Himno Nacional. *«La idea fue ir hasta Sierra. No pasó nada y seguimos. Vamos hasta el Obelisco, dijimos después. Pero un camión de la Metropolitana nos paró en Martín C. Martínez»*, cuenta Lichtensztejn. .

«Salieron con sus pistolas ... Por suerte, la represión fue a palazos», comenta Carlevaro. El mismo y el Decano de Derecho, Alberto Pérez Pérez -quien intentó retener la bandera-, fueron hospitalizados con heridas en la cabeza. Otro funcionario universitario y el Rector resultaron con varias contusiones. Algunas horas más tarde, al salir de la sede de la Universidad, Lichtensztejn y dos consejeros fueron detenidos.

Al preguntarle a Carlevaro qué expectativas tuvo en cuanto a la huelga general, explica: *«Estábamos demasiado metidos adentro como para percibir lo que pasaba afuera»*. Y en cuanto a las posibilidades de la resistencia al golpe, agrega: *«Teníamos conciencia de que teníamos corta vida. Nos quedaba sólo la fuerza moral. Como se fueron dando los hechos y sin el apoyo de una fuerza militar, el resultado no podía ser otro»*.

Lichtensztejn coincide en que la actitud de la Universidad tuvo un valor simbólico. Su impresión era, al mismo tiempo, de que la huelga general de la CNT también tenía un sentido demostrativo, sin fuerza como para poner en peligro el golpe de Estado. El momento más difícil para el Rector fue a raíz del sepelio de Ramón Peré, entre el sábado 7 y el domingo 8, en que el cerco a la sede de la Universidad fue más prolongado.

Primero se decidió velar a Peré en la Universidad; entran el féretro y el local es inmediatamente cercado por la policía. En ese momento había más de 300 personas adentro, muchas sin relación con el hecho. Lichtensztejn había salido momentáneamente y al volver fue llevado hacia una camioneta policial estacionada en el lugar. Poco después es liberado, lo cual provoca aplausos de los presentes, y entra en el local.

Adentro de la Universidad reinaba una gran confusión. Los familiares de Peré estaban muy nerviosos, militantes y amigos discutían qué hacer con el féretro, mientras otras personas querían simplemente ver cómo podían salir del local. *«Había tensiones de todo orden -explica Lichtensztejn-. Tuve una sensación tremenda de manipulación de la situación. Al final, se aceptó la decisión de los familiares de velarlo afuera»*.

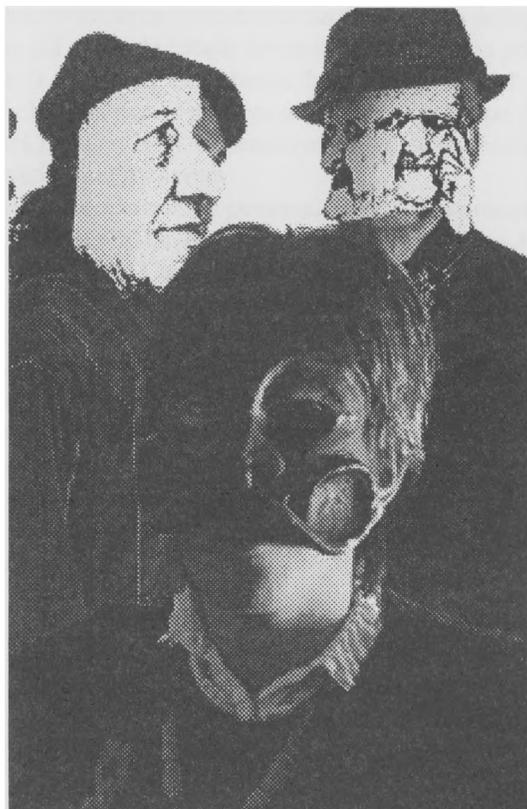
El Jefe de Policía acordó sólo la salida del féretro. Las 300 personas que seguían adentro padecieron frío y hambre. *«Fue una noche terrible»*, dice Lichtensztejn. Para calentarse un poco, hicieron fuego con maderas de una obra interior y luego se repartieron unas reservas de comida de la cantina. A la mañana siguiente, el Rector pudo salir para ir al entierro de Peré, pero los locales universitarios continuaban cercados.

Al volver a la sede central, Lichtensztejn y el Decano de Ingeniería, Julio Ricaldoni, encontraron un grupo de personas en forma de pelotón, que querían intentar salir corriendo. Fueron convencidos de abandonar la idea, pero los sitiados no aguantaban más. El Rector habló repetidamente con el ministro del Interior y el Jefe de Policía, Ballestrino, que le dieron largas, para levantar el cerco sólo a las 6 de la tarde.

Lichtensztejn considera que la Universidad aprovechó el espacio que pudo conservar. Alude a un ciclo de conferencias sobre los problemas del país,

a la integración horizontal entre sus casas de estudio y al uso de una nueva propaganda institucional. Para el Rector, el triunfo aplastante de las listas democráticas (*) en las elecciones universitarias fue el comienzo del fin. La dictadura no podía tolerar mucho más ese grado de libertad.

(*) Por primera vez, las elecciones fueron controladas por la Corte Electoral y el voto emitido en forma secreta y obligatoria. Las listas de las gremiales universitarias, del M.U.N. (Movimiento Universitario Nacionalista) y de la A.B.U. (Asociación Batllista Universitaria) representaron a las opciones democráticas en los tres órdenes. La dictadura impulsó el voto en blanco, pero obtuvo solamente 2,2, 3,3 y 6 por ciento, respectivamente, del total de estudiantes, docentes y egresados.



La conciliación imposible

Desde los primeros momentos del golpe de Estado se puso en marcha una tentativa de mediación entre los autores del golpe, por un lado, y los partidos políticos y sindicatos, por el otro. La iniciativa no cuestionaba el golpe, lo daba como un hecho, pero se apoyaba en la reivindicación por las partes del régimen democrático para llegar a alguna fórmula que hiciera posible la más rápida reinstitucionalización del país.

La tarea recayó en los abogados Adolfo Gelsi Bidart, Ramón Valdés Costa y Armando R. Malet, los tres con una trayectoria pública que los acreditaba para el intento. El Dr. Gelsi Bidart afirma haber actuado por iniciativa propia, mientras que el Dr. Valdés Costa dice haber recibido el estímulo de sectores sindicales (de AEBU y, por tanto, de la CNT) y políticos (el diputado Alembert Vaz, del Partido Nacional, etc.).

Los mediadores tuvieron que adoptar un criterio para definir quienes eran sus interlocutores. ¿El golpe de Estado había sido consumado por el presidente con los militares o viceversa? Aceptando las apariencias del momento, los mediadores se inclinaron por la primera alternativa, un golpe parecido al del presidente Gabriel Terra en 1933. Obtenido el apoyo de los partidos, había que conocer la disposición del gobierno.

Por razones de conocimiento personal, el Dr. Gelsi procuró obtener una entrevista con Bordaberry. El Dr. Malet, ex-ministro de Defensa, hizo un intento similar con el general Hugo Chiappe Pose, entonces Comandante en Jefe del Ejército. Lo que encontraron fue la más cerrada negativa, porque ni siquiera llegaron a ser recibidos. *«No había voluntad de conciliación sino de imposición sobre la Nación»*, recuerda el Dr. Gelsi Bidart.

De esta manera, efímera y abrupta, la mediación no llegó a comenzar. Más adelante fracasaría la tentativa de convocar a la Asamblea General. En pocos días, legisladores y dirigentes políticos anunciaron su intención de asilarse en Buenos Aires. Los partidos tradicionales no tenían la esperanza de encontrar una salida negociada. Algunos sectores apoyaron la huelga general, pero sin mucha convicción en su capacidad de vencer.

Para los Dres. Gelsi Bidart y Valdés Costa, la movilización sindical y popular fue dispersa y la huelga general no fue total, como para obligar al gobierno a retroceder. *«No se vio una respuesta general para un problema general, dispersión entre lo sindical y lo político»*, señala Gelsi Bidart. *«La fuerza sindical careció de contundencia, desde la crisis de febrero, cuando adoptó una sorprendente pasividad»*, agrega Valdés Costa.

«En esos instantes la palabra la tiene la fuerza», concluye el Dr. Gelsi Bidart, quien recuerda haber experimentado entonces la gran fragilidad de las instituciones democráticas. La prensa argentina informó ampliamente sobre esta tentativa de mediación. En Uruguay, la prensa dio la información el 11 de julio, junto con sendos desmentidos de la Presidencia y el ministro del Interior sobre la existencia de cualquier acuerdo

Otro intento de encontrar un camino de diálogo y de conciliación en las graves circunstancias que vivía el país partió de las iglesias cristianas. El Consejo del Presbiterio de Montevideo de la Iglesia Católica, encabezado por Monseñor Carlos Partelli, y la Federación de las Iglesias Evangélicas del Uruguay, hicieron conocer declaraciones en que exhortaban a un reencuentro de los orientales sobre bases de democracia y de justicia.

«Es indudable misión de la iglesia -decía la jerarquía católica- señalar en cada coyuntura los valores que ayuden a crear una vida humana más plena y denunciar los respectivos antivalores». Y agregaba, más adelante: *«todo orden que no tenga por fundamento la justicia, todo orden impuesto por la fuerza y no por el consenso, engendra tarde o temprano la violencia»*. No era la primera vez que la Iglesia Católica intentaba hacerse oír.

Partelli recuerda que al producirse la muerte por torturas del obrero Luis Batalla, en junio de 1972, en un cuartel militar, los obispos católicos, atendiendo el reclamo insistente de sus fieles, redactaron una carta y le pidieron una entrevista al presidente de la República, para que hiciera un gesto, se comprometiera a no repetir ese tipo de situaciones.

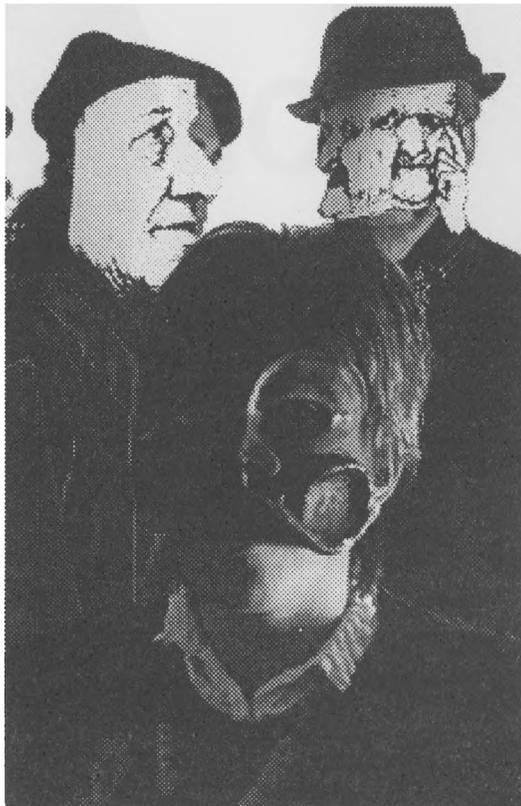
Católico practicante, Bordaberry accedió a reunirse con los obispos y éstos le entregaron en ese momento la carta para que la leyera. *«Estoy de acuerdo con todo, si quieren la firmo»*, dijo el presidente, según el relato de Partelli. La carta salió en la prensa, pero sin la firma de Bordaberry, porque en el interín éste alegó que los militares no se lo permitían.

«No queremos que el silencio de las iglesias sea interpretado como evidencia de conformidad o resignación», dijeron los evangélicos. *«Rogamos a toda la comunidad uruguaya: gobernantes y gobernados a comprometerse*

sinceramente en la urgente tarea de crear condiciones de reconciliación que hagan posible una realización plena del hombre uruguayo sobre bases de justicia, libertad y derecho», agregaba al final la declaración.

Washington Hourcade, miembro de la Iglesia Metodista y activo dentro de los movimientos cristianos de entonces, considera que la actitud general de las iglesias evangélicas después del golpe del 27 de junio fue más bien expectante. *«La mayoría del protestantismo era muy conservadora»,* comenta Hourcade, quien destaca como excepción dentro de ese marco a la figura del pastor Emilio Castro, que en junio del 73 estaba fuera del país..

En los días siguientes al golpe de Estado y, sobre todo, mientras duró la huelga general hubo otros intentos de mediación, de aproximación entre las partes y de encontrar fórmulas de acuerdo. Empresarios participaron de alguna de estas tentativas, pero todas resultaron infructuosas.





Segunda Parte

CRONICA DE LOS HECHOS

Martes 26

- EN LOS DIAS PREVIOS, REUNIONES DE LOS MANDOS MILITARES CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PREPARARON LA CRISIS INSTITUCIONAL
- EN LA VISPERA, BORDABERRY INFORMA A LOS ALIADOS DEL GOBIERNO LA DISOLUCION DEL PARLAMENTO
- EL SENADO DECIDE INVESTIGAR DENUNCIA DE TORTURAS EN UNCUARTEL DE PAYSANDU
- MICHELINI AVISA A ERRO EN BUENOS AIRES QUE SI RETORNA AL PAIS SERA DETENIDO

El presidente mantuvo en los días previos una sucesión de reuniones reservadas con los comandantes en jefe y la plana mayor de las fuerzas armadas. Según los trascendidos de la prensa oficialista, las reuniones eran para decidir la actitud del Poder Ejecutivo ante la negativa del Parlamento al desafuero y el juicio político del senador Enrique Erro. En las últimas semanas, decisiones de la Justicia Militar agudizaron el enfrentamiento de las fuerzas armadas con los partidos políticos y el Parlamento. Pocos días antes, el Capitán de Navío (Retirado) Homar Murdoch, presidente del Partido Nacional, había sido procesado por presunta *irrespetuosidad y agravio a las FF.AA.*. En los días siguientes se esperaba que la Justicia Militar pi-

diera el desafuero del senador Amilcar Vasconcellos, por un artículo suyo publicado en la prensa que denunciaba una conspiración golpista.

En horas de la mañana, Bordaberry convocó a la residencia presidencial a los senadores herreristas Martín R. Echegoyen y Alejandro Zorrilla de San Martín para informarles sobre la decisión del Poder Ejecutivo de disolver el Parlamento. Echegoyen y Zorrilla eran líderes del sector más conservador y minoritario del Partido Nacional, que había firmado un acuerdo político con el oficialismo en mayo de 1972. Con este acuerdo, llamado Pacto Chico por la oposición, el Poder Ejecutivo no ganaba la mayoría parlamentaria pero podía impedir que el Legislativo levantara las medidas

extraordinarias adoptadas por decreto, como el «estado de guerra interno» y la suspensión de garantías individuales, que requerían mayorías especiales. En las horas siguientes, el rumor de la noticia llegó a todos los sectores políticos.

En la sesión de esa tarde, el Senado aprobó la creación de una Comisión Investigadora que, en un plazo de 30 días, debía informar sobre la aplicación de torturas en una unidad del Ejército, en el departamento de Paysandú, de acuerdo con la denuncia del senador Vasconcellos. Las víctimas ahora eran funcionarios de la administración municipal, pertenecientes al sector de Jorge Batlle, acusados de cohecho en actos delictivos comprobados al jefe de la comuna local. Era la primera vez que la Cámara Alta tomaba la decisión de investigar torturas, un tema sobre el cual había recibido innumerables denuncias sin darles respuesta. La sesión prosiguió con una exposición del senador nacionalista Carlos Julio Pereira sobre irregularidades en la ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), pero quedó sin quorum porque los senadores estaban más preocupados por confirmar los rumores sobre la inminente crisis institucional.

El senador Erro se encontraba en Buenos Aires, para participar en los actos de recibimiento del ex-presidente argentino Juan Domingo Perón, que

había vuelto al país luego de un prolongado exilio en España. El retorno de Erro a Montevideo estaba previsto para esa noche, pero fue impedido por el senador Zelmar Michelini, su colega del Frente Amplio, que voló a la vecina orilla para avisarle que sería detenido a su llegada. «No, no, no...», le gritó Michelini a Erro, en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando este se disponía a tomar el avión, según una versión publicada en la prensa.

El creciente clima de tensión y expectativa por el desencadenamiento del golpe de Estado hizo que la noche del 26 se prolongara en la madrugada del 27, sobre todo en los centros de decisión política. Los preparativos del golpe se aceleraban en la residencia presidencial, los comandos y cuarteles de las fuerzas armadas. Alrededor de las 23 horas, la noticia confirmada se transmitió del Palacio Legislativo a los partidos políticos y los sindicatos, en donde comenzó a organizarse la huelga general.



Miércoles 27

- DISCURSOS EN EL SENADO CONTRA LA DICTADURA
- EL GOLPE DE ESTADO SE ANUNCIA EN LA MADRUGADA
- REQUERIDA LA CAPTURA DE ERRO Y PROHIBIDAS TODAS LAS REUNIONES POLITICAS
- ASAMBLEAS OBRERAS INICIAN LAS OCUPACIONES
- EL MINISTRO DEL INTERIOR LLAMA A LA CNT, A LA UNIVERSIDAD Y A VARIOS PARTIDOS POLITICOS
- «EL GOLPE ES PARA DEFENDER LAS INSTITUCIONES», DICE EL PRESIDENTE BORDABERRY POR LA CADENA OFICIAL DE RADIO Y TELEVISION

El Senado volvió a reunirse, a las 0 horas 25 minutos del día 27, para tratar exclusivamente el tema político del momento.

En un clima tenso y expectante, en donde todos los oradores daban como un hecho la disolución de las Cámaras, las intervenciones adquirieron un tono de dura condena a los golpistas. La sesión llegó hasta las 1 y 40 minutos de la madrugada, acompañada por algunos espectadores, que aplaudían y gritaban *¡Abajo la dictadura!* Nerviosos y apresurados, con algunos documentos bajo el brazo, los representantes abandonaron el Palacio Legislativo y se perdieron en la noche oscura que cubría la ciudad.

A esa misma hora, en cambio, la actividad era febril en la residencia presidencial de la Avenida Suárez, adonde llegaban sin interrupción coches de ministros, altos funcionarios y jefes militares. Estaban confirmadas las renuncias de los ministros José María Robaina Ansó y Pablo Purriel, de Educación y Cultura y de Salud Pública, respectivamente. La Presidencia advirtió a todas las emisoras de radio y televisión que deberían integrar una cadena oficial desde las 5 horas de la mañana.

El Secretariado Ejecutivo de la CNT se reúne a las 2 de la madrugada y emite su primer llamamiento a la clase obrera y el pueblo. *«Una nueva y*

grave crisis institucional acaba de abatirse sobre la República. Se anuncia la disolución inconstitucional del Parlamento Nacional», expresa y, luego de analizar la coyuntura política del país, convoca a los trabajadores al cumplimiento de las resoluciones del Congreso de la CNT: OCUPACION DE FABRICAS, ESTADO DE ALERTA Y ASAMBLEA, PLENA ACTIVIDAD Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES SINDICALES.

A partir de las 5, durante los primeros veinte minutos, la cadena nacional de radio y televisión sólo propala música folklórica. A las 5 y 20 se dan a conocer las dos primeras resoluciones del Poder Ejecutivo: un Mensaje dirigido a la Asamblea General y el decreto de disolución del Parlamento. El primero se refiere a recientes decisiones de las cámaras, la negativa al desafuero del senador Enrique Erro, requerido por la Justicia Militar, y el rechazo posterior del juicio político contra el mismo legislador, por supuesta violación de la Constitución.

«La gravedad de esta posición» expresa el Mensaje, aludiendo a la negativa al desafuero-, *puede significar el cuestionamiento general de todo lo actuado por la jurisdicción penal militar en el juzgamiento de los delinquentes de lesa Nación, y por el Poder Ejecutivo en la aprehensión de éstos, en cumplimiento de lo dispuesto por el propio Poder Legislativo»*.

«Este Poder manifiesta a la

Asamblea General -agrega, más adelante-, que la actividad del cuestionado Senadores representativa de la acción subversiva que, en el marco de una aparente legalidad, desarrollan actualmente quienes conspiran contra las bases mismas de la nacionalidad». *«De ahí que las consecuencias que la resolución de la Cámara de Representantes implica para el destino nacional obligan al Poder Ejecutivo, en cumplimiento de su supremo deber jurídico de conservar el orden y la tranquilidad en lo interior y de aprehender a los conspiradores contra la Patria, a estimar que dicha expresión de voluntad legislativa y la no consideración de la solicitud de desafuero planteado por la Justicia legalmente competente, constituyen violación grave de los principios fundamentales de la Constitución»*, finaliza expresando el Mensaje.

Sería un mensaje sin respuesta porque, a punto seguido, el decreto disolvía ambas cámaras legislativas que, de acuerdo con la Constitución uruguaya, conforman la Asamblea General.

El decreto afirma, en su primer considerando, que la República asiste a *«un acelerado proceso de desconstitucionalización o, como se lo denomina en la doctrina del Derecho Público, de falseamiento constitucional, originado por, la aplicación de usos contrarios o el desuso de normas básicas de la Carta, o el empleo de las*

facultades legales con desviación de sus fines propios, todo ello apoyado en interpretaciones deformadoras y por obra de una acción subversiva que paradójicamente pretende, explotando nuestra natural preocupación por la legalidad, escudarse ahora en esa legalidad cuya destrucción persiguió y persigue.

Luego de afirmar que el Poder Ejecutivo se halla en «un estado de necesidad que le impone adoptar medidas extraordinarias» ante la situación referida, el decreto establece:

«Artículo 1º - Decláranse disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes.

Artículo 2º - Créase un Consejo de Estado, integrado por miembros que oportunamente se designarán, con las siguientes atribuciones:

a) desempeñar independiente-mente las funciones específicas de la Asamblea General;

b) controlar la gestión del Poder Ejecutivo relacionada con el respeto de los derechos individuales de la persona humana y con la sumisión de dicho poder a las normas constitucionales y legales;

c) elaborar un anteproyecto de reforma constitucional que reafirme los fundamentales principios democráticos y representativos, a ser oportunamente plebiscitado por el cuerpo electoral.

Artículo 3º - Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o

televisada, de todo tipo de información, comentario o grabación que, directamente o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente Decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo (sic), o pueda perturbar la tranquilidad y el orden público.

Artículo 4º - Facúltase a las Fuerzas Armadas y Policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales.

Artículo 5º - Comuníquese, etc.»

El decreto sería complementado más adelante con la orden de captura contra el senador Erro y con el adelanto y ampliación de las vacaciones de julio en la enseñanza primaria y media (desde 27 de junio hasta el 20 de julio), con la clausura total de los establecimientos en ese período. Al mismo tiempo, se estableció que «El ejercicio del derecho de reunión en lugares descubiertos o cerrados, públicos o privados, con fines políticos, sólo podrá ejercerse con previa autorización».

Cuarenta minutos después del primer comunicado oficial, al ingresar en las fábricas los trabajadores del turno de las seis de la mañana, se realizaron las primeras asambleas. En este momento se decidieron las primeras ocupaciones de lugares de trabajo, en aplicación de la antigua resolución de la CNT contra el golpe de Estado. Los obreros textiles de Al-

pargatas reclaman ser la primera fábrica ocupada, ya en el turno de la noche cuando, desde el techo de la planta de cuatro pisos, vieron que el Palacio Legislativo era cercado por efectivos militares.

El Parlamento fue rodeado alrededor de las 5 de la madrugada por unas decenas de soldados armados a guerra, en unos carros blindados y acompañados de tanques, con algunas piezas de artillería. A las 7 y 5 minutos, los generales Esteban Cristi, jefe de la Región Militar Nº 1, y Gregorio Alvarez, jefe del Estado Mayor Conjunto, entraron al recinto y tomaron posesión de la sede del Poder Legislativo.

La mayoría de los matutinos de Montevideo informó de la inminente disolución de las cámaras. Sólo algunas ediciones de última hora pudieron agregar la confirmación del golpe de Estado. Curiosamente, los diarios oficialistas anuncian, con grandes titulares, que el gobierno estaría por dar un aumento salarial de alrededor del 50%, una cifra muy alejada de lo previsible y lo concretado después. La prensa de Buenos Aires de este día informa que varios legisladores uruguayos han viajado en las últimas horas hacia la capital argentina y que algunos de ellos están dispuestos a pedir asilo político como consecuencia del golpe militar.

En las horas siguientes se sucedieron nuevas asambleas en fábricas, oficinas públicos y centros de estudio.

En todas se dispuso la ocupación inmediata de los locales. Cerca del mediodía salieron, del local central de la Universidad de la República, las primeras manifestaciones callejeras de estudiantes en lucha contra la dictadura.

Durante toda la mañana, la cadena de radio y televisión reiteró los comunicados oficiales, alternados con música folklórica. Al mediodía, el ministro del Interior, coronel Néstor Bolentini, convocó a la prensa para informar de las restricciones en vigor. Se prohíbe la difusión de noticias, comentarios o versiones de declaraciones hechas por dirigentes políticos, legisladores o cualquier otra persona, que afecten el prestigio del Poder Ejecutivo y/o de las Fuerzas Armadas. La prohibición incluye a todas las informaciones sobre la disolución del Parlamento, así como convocatorias de reuniones, actos y manifestaciones de carácter político.

Bolentini afirmó que el propósito del Poder Ejecutivo era cumplir la responsabilidad que la Constitución le confiere, con vistas a garantizar *«los fines que se ha trazado la propia nación por intermedio de sus poderes representativos a través del Plan de Desarrollo y a través de las manifestaciones de las Fuerzas Armadas, en los Comunicados 4 y 7, cuyos objetivos se quiere lograr en el menor tiempo posible»*.

Sobre el mediodía fue allanado

el local de la Federación Obrera del Transporte (FOT) y detenidos algunos dirigentes del gremio, hecho que motivó el paro inmediato de todas las líneas de transporte colectivo de la capital. En las previsiones de la CNT, el paro del transporte había sido fijado a las tres de la tarde, con el fin de facilitar en las primeras horas el traslado de los trabajadores a los locales ocupados.

Por la tarde, el ministro del Interior convocó a su despacho al Rector de la Universidad, Dr. Samuel Lichtenzstejn, al senador Enrique Rodríguez, del Partido Comunista, a representantes de otros partidos políticos y de la CNT. En todos los casos, Bolentini argumentó que las decisiones del Poder Ejecutivo eran la mejor defensa de las instituciones y reclamó una actitud de colaboración con el gobierno.

A los representantes de la CNT, Bolentini manifestó que las acciones de protesta no lo habían sorprendido y podían tolerarse hasta cierto punto. El ministro hizo entonces una propuesta para el levantamiento de la huelga y las ocupaciones, solicitando a los sindicalistas que restringieran su actuación al plano estrictamente gremial. Los representantes de la central reaccionan de inmediato, pero aceptan trasladar el planteo y entregar la respuesta oficial al día siguiente.

Por la noche, Bordaberry utilizó la cadena de radio y televisión para explicar las medidas adoptadas. El discurso presidencial fue anunciado a

las 21 horas, pero se irradió recién a las 22 y 45 minutos. Bordaberry reiteró que la actitud del gobierno estaba determinada por la defensa de las instituciones democráticas. Para reafirmarlo, se comprometió a *«no permanecer ni un minuto menos, ni un minuto más»* del plazo que le marca la Constitución para su mandato presidencial. En una alocución de tono mesiánico y agresivo, el presidente no hizo mención a la existencia de la huelga y las ocupaciones que, a esa altura, sumaban varios centenares, contando centros de trabajo y de estudio.

Mientras tanto, en las fábricas se prepara la resistencia y no hay descanso. Se crean las condiciones en los locales para permanecer por un tiempo prolongado, se organiza el abastecimiento de alimentos y la olla común, se planea la propaganda hacia el barrio y hacia las otras fábricas de la zona que todavía no están ocupadas, se preparan las movilizaciones para el día siguiente. Las tareas son muchas, pero son muchos también los brazos dispuestos a realizarlas. En varios lugares, suman centenares los compañeros incorporados a la ocupación.



- SE EXTIENDEN LAS OCUPACIONES EN LA CAPITAL
- LA CNT LEVANTA PLATAFORMA DE 5 PUNTOS
- BOLENTINI EXIGE EL LEVANTAMIENTO DE LA HUELGA A CAMBIO DE MEJORAS ECONOMICAS
- SEREGNI DEFINE LOS OBJETIVOS DE LA RESISTENCIA
- DESIGNADO COMANDO DE LA HUELGA GENERAL
- UNIDADES DEL TRANSPORTE NO SON DISPERSADAS

El día amanece con la noticia de un nuevo decreto dictatorial. El Poder Ejecutivo declara disueltos, por la misma fundamentación que lo hizo con el Parlamento, los cuerpos legislativos municipales de la capital y el interior del país. La decisión afirma que, en su lugar, serán instaladas las denominadas Juntas de Vecinos, cuyos miembros serán designados por el poder central.

A esta altura, la huelga y las ocupaciones se han extendido en forma gradual y alcanzan prácticamente a la totalidad de los centros laborales de Montevideo. En el Interior, los gremios también adhieren a la huelga, sobre todo en aquellas ciudades capital de departamento donde la actividad industrial es más importante.

En Paysandú, capital del departamento con el mismo nombre y

segunda ciudad del país, en la tarde, una columna de más de tres mil personas recorre la avenida principal. La marcha culmina con un acto frente al local de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales. La manifestación contra la dictadura, grande para los antecedentes del lugar, es de tono combativo y muy ruidosa, lo que consigue llamar la atención de toda la población sanducera.

Los obreros de la industria textil, de la construcción y de las curtiembres, de la fábrica de cerveza «Nortea», de la industria frigorífica, del aceite, del dulce, de la fábrica de portland de ANCAP y de la filial de «Coca-Cola», los empleados municipales, los bancarios y los ferroviarios, los trabajadores del diario «El Telégrafo», los funcionarios y los estudiantes de la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía,

situadas en aquel departamento, se han incorporado a la huelga.

En Montevideo, miembros del comando de la CNT recorren las fábricas ocupadas más importantes y recogen, sin lugar a dudas, la disposición de lucha en que se encuentran los trabajadores. Al mismo tiempo, se distribuye en las fábricas un comunicado del Secretariado Ejecutivo de la central, en el cual se informa sobre la reunión realizada el día anterior en el Ministerio del Interior, el planteo hecho por Bolentini y la respuesta de la CNT, que le sería entregada al ministro esa tarde.

La respuesta de la CNT señalaba las contradicciones existentes entre las manifestaciones del ministro del Interior y el discurso efectuado poco después por el presidente de la República. Bolentini aseguró que el gobierno pondría en práctica los compromisos de los Comunicados 4 y 7, mientras que Bordaberry aludió al Plan de Desarrollo, un programa económico anunciado por el gobierno después del acuerdo de Boisso Lanza, cuyas medidas no eran concordantes con la proclama militar.

Al final de la nota, la central enumeraba los temas sobre los cuales requería una definición del gobierno: 1) plena vigencia de las libertades sindicales, políticas y de expresión del pensamiento; 2) restablecimiento de las garantías y derechos constitucionales; 3) medidas de saneamiento e-

conómico: nacionalización de la banca, del comercio exterior y de la industria frigorífica; 4) aumentos reales de salarios y pasividades; y 5) erradicación de las bandas fascistas de la enseñanza.

En la reunión con la delegación de la CNT, Bolentini dijo que se estaba acabando el plazo y comentó que no creía que sobre las bases propuestas por la central se llegara a un acuerdo. Bolentini restó importancia al discurso de Bordaberry, diciendo que el presidente era un miembro más en el equipo del gobierno. Pero dio término al encuentro diciendo que trasladaría al Poder Ejecutivo la respuesta sindical y pidió a José D'Elía que lo llamara al día siguiente, para informarle la posición del gobierno.

Sobre la media tarde, llegó a las Coordinadoras y Comités de Base del Frente Amplio un primer comunicado del general Seregni. En el mismo, el líder frentista establecía los siguientes *«objetivos de la acción»*: a) restitución de los mandatos parlamentarios; b) destitución de Bordaberry por medio de la acción popular; y c) realización, al más breve plazo, de elecciones generales y de una consulta popular, en los términos propuestos con anterioridad por esa agrupación política.

El mensaje de Seregni fue la primera definición política clara del sentido y los objetivos de la resistencia al golpe de Estado iniciada por los trabajadores y el pueblo. Sobre todo,

la decisión de luchar por la caída de Bordaberry como condición para el restablecimiento de las instituciones democráticas. La renuncia del presidente de la República era un tema incorporado antes del 27 de junio a las exigencias del Frente Amplio y de la CNT, pero que no había estado presente en las últimas conversaciones de la central con el ministro Bolentini.

«Ningún oriental puede llamarse a engaño» afirmaba Seregni: el golpe de Estado es claramente antinacional y antipopular. Ante el golpe reaccionario, el Frente Amplio levanta su inquebrantable decisión de lucha. No reconoce al gobierno de Bordaberry. Hoy convocamos a toda la militancia, a todas las organizaciones nacionales y democráticas, a todo el pueblo oriental, para salvar la dignidad de la Patria».

La convocatoria de Seregni iba acompañado de las orientaciones para redinamizar los Comités de Base, establecer una red de comunicación entre sus miembros y la dirección frentista, apoyar las ocupaciones y las movilizaciones de los obreros y los estudiantes, establecer contactos con integrantes de otras fuerzas políticas que compartieran aquellos objetivos, organizar el barrio y, dentro del mismo, el control de los abastecimientos, la recolección de los residuos domiciliarios, etc.

Esa misma tarde, el mensaje de Seregni fue llevado, sobre todo por los

sindicalistas de la Corriente, ala izquierda del Frente Amplio, a las fábricas de la capital y enviado también al interior del país, desde donde comenzó a ser reproducido en miles de ejemplares. En algunos lugares, militantes del Partido Comunista pusieron en duda la autenticidad del documento e incluso afirmaron que el mismo debía ser «apócrifo» (sic), por lo que no colaboraron en su distribución entre los trabajadores.

¿El mensaje no era coherente acaso con la prédica y los acuerdos del Frente Amplio? ¿Algún sector sindical o político estaba pensando en otra alternativa para la huelga? Si algún sector tenía una respuesta afirmativa para la última pregunta no llegó a explicitarla en ese momento, solamente trascendieron las dudas de algunos militantes. Al día siguiente, toda la izquierda acompañó las definiciones de Seregni.

De noche se reúne la Mesa Representativa de la CNT, con la presencia del Sindicato de FUNSA. En el último congreso de la central, FUNSA había sido elegido como miembro de la Mesa, pero después se negó a integrar el órgano dirigente, por discrepar con la exclusión de UTAA del mismo. En el momento de producirse el golpe del 27 de junio, la CNT consultó la opinión de FUNSA y lo invitó a reintegrarse a la Mesa.

Se integra el Comando de Huelga de la CNT, con el presidente,

José D'Elía, de FUECI, el secretario de organización, Félix Díaz, del SUANP, Gerardo Cuesta, del UNTMRA, Vladimir Turiansky, de AUTE, e Ignacio Huguet, del COT. El delegado textil ante la CNT era Adrián Montañéz, militante de la Corriente frenteamplista, quien había sufrido un accidente. Montañéz fue sustituido por Huguet, secretario general del COT y miembro del Partido Socialista. Para contemplar la presencia de la tendencia minoritaria, se incorporó entonces a Carlos Carrión, de la FUS.

Esa misma noche se produjo otro hecho de importantes consecuencias sobre el futuro de la huelga. Los ómnibus del servicio de transporte de la capital, tanto de CUTCSA como de AMDET, fueron dejados como era habitual, todos juntos en las respectivas playas de estacionamiento. Esta situación contradecía uno de los criterios establecidos con anterioridad para este tipo de situación por una comisión formada al efecto en el seno de la CNT, en la que se había acordado que las unidades del transporte colectivo debían ser guardadas en los locales de las fábricas ocupadas.

Colocando los ómnibus en las fábricas se los dispersaba, lo que hacía muy difícil o imposible su utilización, por parte de la empresa o el gobierno, para restablecer el servicio, y además se los dejaba a disposición de los trabajadores para cualquier eventualidad. Al ver los ómnibus estacionados todos

juntos, los obreros que ocupaban los Talleres propusieron extraerles el rotor del motor, una medida que, sin destruirlos, obstaculizara su uso en contra de la huelga. Los dirigentes de la Federación Obrera del Transporte (FOT), que seguían la política sindical del Partido Comunista, consideraron que no correspondía aplicar ese tipo de medidas.

Al final de la jornada, el Ministerio del Interior comunicó la clausura, por tres ediciones, del diario *Acción*, dirigido por Jorge Batlle. En la fecha se había preparado una edición especial, con diversos artículos contra el golpe de Estado. El matutino prácticamente no tuvo circulación, porque el Ejército se anticipó a su distribución y logró confiscar casi toda la edición, sobre todo la parte destinada al interior. *«Perdóneme, pero este diario no puede salir»*, dijo a Batlle el coronel Ramón Trabal, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, con un ejemplar en la mano.

El Intendente del departamento de Rocha, del Movimiento Nacional de Rocha (MNR), liderado por el senador Carlos Julio Pereira, que junto con Por la Patria conformaban la mayoría del Partido Nacional, anunció su renuncia al cargo como consecuencia de la disolución de las asambleas legislativas municipales decretada por el Poder Ejecutivo.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), junto con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), informan

que la asistencia médica a la población es absolutamente normal y se encuentra bajo el control de los trabajadores y profesionales del sector. Grupos de estudiantes distribuyen entre los comerciantes de la capital un volante, con la firma de la FEUU, en el cual se explican los motivos de la lucha y se reclama la solidaridad de todos los sectores de la población.



- LOS BLANCOS SE SUMAN A LA RESISTENCIA AL GOLPE
- DE LAS FABRICAS SALEN ACTOS Y MANIFESTACIONES
- AFIRMAN QUE LA CNT ROMPIO «DIALOGO» CON EL GOBIERNO
- EL COSENA APRUEBA PRIMERA OFENSIVA REPRESIVA
- CAMION MILITAR SE ABASTECE EN LA REFINERIA DE ANCAP
- BOLENTINI EMPLAZA A TERMINAR LAS OCUPACIONES
- COMIENZA GUERRA SICOLOGICA DE COMUNICADOS
- NUEVAS RENUNCIAS EN EL EQUIPO DEL GOBIERNO

Por una resolución de los gremios de la prensa (periodistas, gráficos y repartidores), en este día reaparecen los diarios. La decisión es justificada en la necesidad de facilitar la llegada a la población de las informaciones más importantes del momento. Todos los diarios reproducen la respuesta de la dirección de la CNT al ministro del Interior

La prensa informa que el senador Ferreira Aldunate y el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, ambos líderes del sector nacionalista Por la Patria, están en Buenos Aires. También se informa que los senadores Erro y Michelini, desde antes del golpe en la vecina orilla, han pedido asilo político en la Argentina.

Comienza a circular *Resistencia Blanca*, un boletín extraordinario del Partido Nacional, en el cual esta

agrupación proclama: «1) Su permanente defensa de la Patria, sus instituciones y las libertades; 2) Su condena al golpe de los corruptos que reniegan de la soberanía popular y avasallan instituciones; 3) Su repudio al Presidente de la República y a los actuales mandos militares por traidores a la Patria y por perjuros al instaurar la dictadura; 4) Su legítimo derecho a resistir a la opresión por todos los métodos que las circunstancias aconsejen».

En el interior del país, el Partido Nacional pone en práctica formas de resistencia a la dictadura, por medio de la paralización de las Intendencias departamentales, con los propios jefes del ejecutivo municipal al frente de la acción, pues en su mayoría son «blancos».

Mientras tanto, a medida que se van consolidando las ocupaciones de

las fábricas y centros de estudio, las movilizaciones se extienden a la zona circundante. Los ocupantes no permanecen pasivos, salen a la calle a buscar la solidaridad del barrio, organizan actos y manifestaciones.

En el Paso Carrasco, los obreros de las fábricas Fulgor, Ajax y CICSSA y del Frigorífico Carrasco realizan un acto en la calle. En el barrio del Cerro, una nutrida columna de manifestantes marcha por la calle Grecia, corean consignas contra la dictadura y golpean las columnas del alumbrado con palos y caños, para llamar la atención. En la Aguada, en el portón de la fábrica textil de Alpargatas se realiza otro acto, organizado por los gremios de la zona y los estudiantes universitarios de Química y Medicina.

En este día, a lo largo de toda la jornada, circulan diversas versiones sobre una nueva reunión entre la CNT y Bolentini. En diversos lugares de la capital se afirmó que los mandos militares querían hablar inmediatamente con la central sindical. Poco después, comenzó a circular el rumor de que la CNT se había negado a conversar con las autoridades. Al día siguiente, en primera página, el diario *«El País»* afirmó que *«Los dirigentes de la CNT no se presentaron y fue imposible localizarlos. Los representantes obreros, de esa manera, pusieron unilateralmente fin al diálogo»*.

En las primeras horas de la tarde, el Consejo de Seguridad Nacional

(COSENA) fue convocado en forma extraordinaria, para analizar la magnitud alcanzada por la huelga. La resistencia estaba cada vez más organizada y la paralización de la actividad laboral era total, con excepción de los servicios. Poco después de la reunión, se anunció que el ministro del Interior hablaría por la cadena de radio y televisión.

Según el comunicado posterior, el tema de la reunión del COSENA había sido el *«análisis de la actitud adoptada por ciertos sectores dirigentes de la actividad laboral, que pretenden arrastrar a la masa trabajadora del país a situaciones y medidas que afectan la situación de las necesidades de la población, la marcha del país y la seguridad nacional»*.

La falta de combustible en los puestos de venta se hacía cada vez más notoria, por la reducida circulación de coches particulares en las calles. En la tarde, un camión-cisterna militar, acompañado por soldados armados, se presenta en la refinería de ANCAP, en La Teja, para cargar combustible. La Federación Ancap, cuyos dirigentes coincidían con la tendencia mayoritaria de la CNT, decide no abastecer ese camión, pero no impedirle que lo haga por sus propios medios. Los militares cargan y se van.

En el discurso de esa noche, el ministro del Interior manifestó con claridad la decisión de reprimir. Bolentini no tuvo más remedio que

hablar de la huelga y de las ocupaciones, pero para decir que interferían en la labor del gobierno y que, en consecuencia, eran de contenido político. Vestido de civil e invocando el sentimiento de «*la orientalidad*», el coronel hizo un llamado dramático a abandonar la lucha de clases y sustituirla por «*el amor de la gran familia uruguaya*» (sic). En conclusión, fijó un plazo perentorio, hasta las 7 de la mañana del día siguiente, para la desocupación de los lugares de trabajo y la normalización de la actividad laboral.

Desde ese momento, la cadena oficial de radio y televisión comenzó a transmitir una serie de comunicados de tono amenazador, que tergiversan los hechos para justificar la represión. La interrupción del trabajo es atribuida a pequeños grupos, se afirma que se ha puesto en riesgo la economía del país y la vida de las personas, para anunciar el inicio de una operación dirigida a lograr la normalización de la actividad laboral.

«Mediante un grupo de agitadores sindicales se ha paralizado la refinación de combustible en el país», dice el Comunicado N^o7. «Falsos dirigentes gremiales han impedido el ingreso de todo tipo de enfermos en los hospitales públicos», miente el Comunicado N^o8. «Se ha provocado la paralización parcial de la industria, entre ellas la textil ...»; «Falsos líderes han obligado a los ferroviarios a abandonar sus tareas y han ocupado el Ente

», aseveran los comunicados Nos. 9, 10 y sucesivos.

Contrariamente a su intención, los comunicados militares fueron una eficaz manera de informar a toda la población las dimensiones alcanzadas por la huelga general, pues la censura de prensa en vigor no permitía hacerlo por los medios masivos de comunicación habitual. Por otro lado, marcaron el compromiso de las Fuerzas Armadas con el golpe, un hecho que los militares hasta entonces habían tratado de mantener oscuro, dejando que el presidente Bordaberry apareciera como único responsable.

Utilizando técnicas de la guerra psicológica, los militares buscaban a través de los comunicados contraponer a los militantes más activos, los trabajadores y estudiantes que estaban sosteniendo las ocupaciones y las movilizaciones, con los sectores pasivos de la población, los cuales podían sentir negativamente los efectos de la paralización o comenzar a temer el desabastecimiento y la falta de los servicios.

Los efectos de esta propaganda fueron contrarrestados en gran medida por los medios de información de los huelguistas, en el sentido de que los servicios públicos esenciales estaban siendo garantizados por los propios trabajadores desde las ocupaciones. La luz eléctrica y los teléfonos, el agua corriente y la asistencia en los hospitales, eran mantenidos por los

gremios y sindicatos. También fue importante en ese sentido la labor en los barrios de los comité de base del Frente Amplio, que organizaban a los vecinos para la recolección voluntaria de basura, así como para no permitir acciones de especulación y de acaparamiento de comestibles.

Trascendió la noticia de que salían del gobierno también los ministros de Obras Públicas, Tte. Cnel. Cr. Angel Servetti, y de Industria y Comercio, Dr. Jorge Presno, junto con los directores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Ricardo Zerbino, y del Plan Nacional de Vivienda, Dr. Jorge Da Silveira, quienes habían manifestado discrepancias con el curso de los acontecimientos y su decisión de renunciar, aunque aceptaban permanecer en los cargos hasta la designación del reemplazante.



- LOS MILITARES INICIAN LA «OPERACION DESALOJO»
- LA CONSIGNA DE LOS HUELGUISTAS ES «REORGANIZARSE Y OCUPAR DE NUEVO EN CUANTO SE PUEDA»
- EL FRENTE AMPLIO Y EL PARTIDO NACIONAL EMITEN LA PRIMERA DECLARACION CONJUNTA
- LA LISTA 15 SE PRONUNCIA CONTRA LA DICTADURA
- TRAS LOS DESALOJOS, LOS EMPLAZAMIENTOS A TRABAJAR
- COPAMIENTO MILITAR DE LA REFINERIA DE ANCAP
- LA FEUU EXIGE LA RENUNCIA DE BORDABERRY
- LA CNT ES DECLARADA ILEGAL POR DECRETO

Desde las primeras horas, existe una tensa expectativa. La atención está centrada en la «Operación Desalojo» anunciada por los militares. En las discusiones en las fábricas, se llegó a la conclusión de que la resistencia debía ser pasiva. No se trataba de facilitar el desalojo, pero tampoco se podía arriesgar un choque entre fuerzas tan desiguales. El Secretariado de la CNT había recomendado a los trabajadores acceder al desalojo sólo si mantener la ocupación podía generar «situaciones de violencia» y luego concentrarse en los locales sindicales.

La propuesta de ir a los sindicatos no era convincente. Esos locales

podían ser clausurados y las asambleas estaban prohibidas por los decretos de la dictadura. En medio de estas dudas, entre los trabajadores comenzó a gestarse la mejor de las respuestas: «reorganizarse y ocupar de nuevo en cuanto se pueda». Un boletín de los militantes sindicales de La Corriente, denominado *A los trabajadores en lucha*, se encargó de llevar la consigna a diversos lugares, sobre todo las fábricas más importantes, en donde la idea se asimiló rápidamente.

Nuevas manifestaciones de orden político alientan a seguir la lucha en medio de las amenazas del régimen. El Frente Amplio y el Partido Nacional

aparecen firmando una declaración común, que es distribuida en forma de volante y dice: *«Ante la ejemplar firmeza con que los trabajadores orientales vienen desarrollando la lucha por las libertades públicas y por sus reivindicaciones específicas, el Partido Nacional y el Frente Amplio declaran su más amplia y fervorosa solidaridad y el apoyo decidido a ese combate popular en defensa de los intereses del país».*

Circula asimismo un volante titulado *Muera la dictadura*, con la firma de la Lista 15, el sector colorado liderado por Jorge Battle. *«La dictadura que cierra diarios, impone férrea censura de prensa, impide el ejercicio del derecho de reunión y nos inunda con comunicados mentirosos, que impide replicar, no tiene apoyo popular»*, afirma la declaración quincista. *«Si lo tuviera -agrega-, no necesitaría de la fuerza que hoy aplica con el apoyo de una dirección militar que está comprometiendo, quizás definitivamente, a unas Fuerzas Armadas cuyos integrantes llegará el momento que no puedan exhibir públicamente su uniforme, como les pasa hoy a sus colegas argentinos».*

Estos pronunciamientos dan una idea bastante clara de la ausencia de apoyo los partidos políticos a la dictadura. El Partido Nacional nunca había firmado una declaración junto con el Frente Amplio. Por otro lado, la Lista 15 era uno de los sectores ma-

yoritarios del partido de gobierno. Daban una idea del repudio de la población a la dictadura y, sin duda, servían de aliento para la huelga general y las ocupaciones.

Se inician los desalojos. La actitud de los militares busca evitar el tener que recurrir a las armas de fuego. En la mayoría de los casos, los soldados rodean el local ocupado, derriban los portones o abren un boquete por el muro y desalojan a empujones a los obreros hacia la calle. En otros lugares, más violentos, usan bombas de gas lacrimógeno y dan golpes de bastón. En general, no se llevan detenidos.

Entre los locales afectados por la intervención militar se encuentran: casas centrales de los bancos, desalojadas; sede del sindicato bancario, allanada y detenidos sus ocupantes; sede central de la Universidad y sus facultades, desalojadas; dependencias del servicio de transporte municipal (AMDET), desalojadas con gases; el Dique Nacional, desalojado.

En forma simultánea con los desalojos, la cadena oficial continúa la transmisión de informaciones falsas y emplazamientos para restablecer el trabajo normal. En un comunicado, se acusa a los bancarios de *«impedir el pago directo de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares»*. *«Estas actitudes incalificables que tienen para el pueblo -prosigue el locutor-, no las sufren en carne propia, porque hacen las huelgas o paros después de cobrar*

sus sueldos». En otro comunicado se afirma que «la actitud asumida en las actuales circunstancias por los Dirigentes Sindicales Bancarios del Uruguay procura claramente la paralización de la actividad financiera y con ello el entorpecimiento del comercio y la producción, impidiéndose todo trámite de importación y exportación».

En la refinería de ANCAP, en el barrio de La Teja, los militares no se proponen el desalojo sino el copamiento de la planta. Los comunicados dan una idea de la cautela usada en este caso: *«las Fuerzas Armadas se hallan abocadas al cumplimiento de las consignas asignadas para la normalización del país, debiendo comenzar por ANCAP, corazón y nervio de la República (...) En conocimiento de las motivaciones patrióticas de la mayoría de los obreros pertenecientes a este ente, las Fuerzas Armadas se aproximan sin predisposición ni ánimo adverso para estos obreros, que como ya se ha manifestado no son más que parte del pueblo (...)».* La Marina no intervino en este procedimiento, a pesar de que contaba con personal capacitado para operar parte de la planta.

En este día los desalojos se concentran en dependencias de servicios estatales, fundamentalmente el combustible, el transporte y los bancos. En muchos casos, los vecinos de la zona se acercan al lugar ocupado,

alientan a los trabajadores y abuchean a los militares.

En algunas fábricas circula un volante para ser leído por los miembros de las fuerzas armadas en el momento del desalojo, que dice: *«SOLDADO: obedecer a un presidente constitucional es disciplina; obedecer a un dictador multimillonario es servilismo anti-artiguista. Todos somos pueblo. ¡Abajo la dictadura!».*

Aunque las clases habían sido suspendidas y los liceos clausurados, los gremiales de profesores y funcionarios de enseñanza secundaria habían decidido ocupar en forma simbólica uno de los locales, para expresar su solidaridad con la huelga. En este caso, fueron cercados por la policía, desalojados y todos los ocupantes detenidos.

En los centros de enseñanza superior, que habían sido cercados por la policía desde la noche anterior, las autoridades negociaron las condiciones de desalojo, para evitar la detención de estudiantes a la salida y el ingreso de fuerzas extrañas a la institución, que hubiera configurado una violación de la autonomía universitaria. Pocas horas después de levantado el cerco, las facultades volvieron a ser ocupadas.

En una declaración pública, la FEUU precisa los objetivos de la lucha. Los estudiantes universitarios apoyan los cinco puntos de la plataforma de la CNT y agregan: *«No habrá soluciones*

sin la caída del dictador Bordaberry y su gabinete. Todo ello bajo una condición: la decisión del pueblo en los nuevos destinos que hoy pueda recorrer la Patria. Sin consultas y sin participación popular no habrá apertura a la crisis, porque sólo hoy el pueblo es quien puede imponer las verdaderas soluciones.

Se comunica la clausura por dos ediciones del semanario «MAR-CHA», del Dr. Carlos Quijano, a raíz de las apreciaciones contenidas en su edición del 29 de junio, consideradas violatorias de las disposiciones del decreto del Poder Ejecutivo que disolvió las cámaras legislativas.

En las últimas horas de la tarde, mientras una delegación de la CNT esperaba para ser recibida en el Ministerio del Interior, Bolentini fue llamado apresuradamente a la Casa de Gobierno. Unos minutos después, la Presidencia divulgó un nuevo decreto por el que resolvía: «*declarar ilícita la asociación de hecho denominada Convención Nacional de Trabajadores (CNT), disponiendo su disolución, la clausura de los locales, la incautación de sus bienes y valores.*»

A la noche, el Secretariado Ejecutivo de la central da su respuesta. «*No otra cosa que la orfandad en que se mueve y la clara sensación de su fracaso en el intento de intimidar y amenazar a la clase obrera, pueden explicar tan ridícula e histérica deci-*

sión-expresa la CNT-. Solamente una mentalidad oligárquica como la del Sr. Bordaberry puede suponer que es posible 'disolver' por decreto la organización sindical de los trabajadores uruguayos.»

A esta altura, hacía 24 horas que los golpistas habían desistido de las conversaciones oficiales. El nuevo régimen mantuvo esa instancia mientras tuvo alguna esperanza de que las ocupaciones fueran levantadas en un plazo breve. La disposición de lucha de los trabajadores echó por tierra tales expectativas. El objetivo del golpe ahora era poner en retirada a la dirección sindical, a la que juzgaba responsable de la huelga. La Operación Desalojo debía proseguir el domingo y desalojar la mayor cantidad posible de lugares durante el fin de semana, para intentar restablecer la normalidad laboral a partir del lunes.



- BORDABERRY ADMITE A LA PRENSA EXTRANJERA SUS SIMPATIAS CON EL REGIMEN MILITAR BRASILEÑO
- PROSIGUEN LOS DESALOJOS EN LA INDUSTRIA PRIVADA
- LOS COMANDANTES EXHORTAN A «LAS OVEJAS» A TRABAJAR
- ANUNCIAN UN AUMENTO DE PENSIONES Y SALARIOS
- EL PARO EN LA PRENSA FAVORECE A LA DICTADURA
- * OFENSIVA MILITAR SE CONCENTRA EN EL TRANSPORTE
- DIRECCION DEL FRENTE AMPLIO AVALA MENSAJE DE SEREGNI
- LA HUELGA SE EXTIENDE EN EL INTERIOR DEL PAIS
- CAMIONES DE CARGA BRASILEÑOS ENTRAN AL PAIS

En el diario conservador *«La Nación»*, de Buenos Aires, el periodista Gustavo Landívar entrevista a Bordaberry, quien asegura que promoverá un plebiscito sobre una reforma de la Constitución en 1976, año en que debía realizarse la siguiente elección presidencial. *«No puedo negar -confesó más adelante-, que tenemos cierta actitud de simpatía con el régimen brasileño y alguna vez dije que tenemos puntos en común»*. Al preguntársele cuáles eran esas coincidencias, Bordaberry respondió: *«la defensa de la democracia y el anticomunismo»*. El dictador uruguayo adelantó que solicitaría al gobierno argentino la extradición del senador Erro.

Los desalojos continúan a ritmo intenso durante todo el día. Esta vez se concentran en las principales fábricas de la industria privada: textiles, metalúrgicas, de neumáticos, de dulce, etc. En los centros de trabajo donde existe una tradición sindical más combativa, la acción militar adquiere características especiales.

En la Fábrica Uruguaya de Neumáticos (FUNSA), el desalojo se realizó con un contingente compuesto por cinco camiones, siete tanques y helicópteros de apoyo. Al frente de la operación se encontraban el general Esteban Cristi, Jefe de la Región Militar Nº1 y el ministro del Interior, el coronel Bolentini.

A su vez, en la fábrica de Alpar-gatas, los militares rompieron todas las luces del corredor de salida, para dejarlo a oscuras, y formaron una doble fila de soldados, a través de la cual obligaron a pasar a los obreros desalojados en ese momento, que de esta manera fueron golpeados y apaleados impunemente.

En las ocupaciones del Paso Molino y Belvedere, como en la fábrica de Nervión, El Bao y otras, los militares revisan minuciosamente el local, en busca de armas aparentemente. Los militares evidencian nerviosismo y gran incomodidad cuando el desalojo debe hacerse en presencia de gran cantidad de vecinos, que llegaban a rodearlos completamente.

En algunos casos, la inventiva popular confundió a los militares. Los obreros de La Aurora, cuando se preparaba el tercer desalojo, pusieron en marcha todos los telares. Al oír ese ruido, los militares creyeron que la fábrica estaba trabajando en forma normal y se retiraron sin entrar a la planta. Pocos minutos después, las máquinas volvieron a enmudecer y la ocupación prosiguió en los mismos términos de antes.

Inmediatamente después de los desalojos, la cadena oficial de radio y televisión comienza a transmitir una serie ininterrumpida de emplazamientos de las empresas privadas y organismos estatales, en los que se conmina

a los trabajadores a presentarse en sus horarios habituales el lunes. En forma simultánea, los comunicados aseguran que para entonces el abastecimiento de combustible y el transporte serán normales.

La Junta de Comandantes en Jefe, a través de un comunicado, exhorta a reanudar el trabajo en los siguientes términos: *«Se han dado las condiciones adecuadas para que en el día de mañana, lunes 2 de julio, el país reinicie el camino del trabajo ... Corresponde de tal forma a la masa de trabajadores liberarse del sentimiento de rebaño y sumisión que han pretendido inculcarle falsos dirigentes sindicales que responden a ideologías e intereses antinacionales y entonces tomar sus propias decisiones, con la seguridad de que contarán con el respaldo de la fuerza si fuere necesario».*

La ofensiva represiva va acompañada por el anuncio de un aumento de las pensiones y jubilaciones, mientras el Equipo Económico del gobierno es convocado para estudiar un aumento general de salarios. Al mismo tiempo, el gobierno ordena suspender embarques de carne con destino a la exportación, para que sean volcados en el abastecimiento interno.

En la refinería de La Teja la situación es muy tensa. Los 200 obreros que se encontraban en la planta en

el momento del copamiento militar, son obligados a trabajar bajo amenaza de muerte y con la vigilancia de perros del plantel policial. Mientras tanto, el resto del personal de la ANCAP cumple estrictamente la huelga y no se presenta a trabajar.

La dictadura reitera a los medios de comunicación las restricciones informativas en vigor. El Sindicato de Artes Gráficas (SAG) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que agrupan a gráficos y periodistas, respectivamente, deciden parar a partir del lunes. Sin embargo, esta decisión no impedía la circulación de los matutinos *El País* y *La Mañana* y del vespertino *El Diario*, cuyas direcciones apoyaban al golpe.

El personal de los diarios mencionados no respondía, desde tiempo atrás, a las decisiones de los sindicatos respectivos. Y la venta era posible porque el Sindicato de Canillitas, controlado en realidad por un puñado de grandes distribuidores, no se había plegado a la huelga. En tales condiciones, la paralización gremial en este sector sólo servía, en los hechos, para eliminar a la prensa contraria a la dictadura.

La cuestión fue debatida, más de una vez, en el Secretariado de la CNT, pero los representantes del SAG y de la APU, integrantes ambos de la sección sindical del Partido Comunista, mantuvieron la decisión. De esta manera, bajo la apariencia de apoyar

en todos sus términos a la huelga general, se daba una importante ventaja a los medios de información de la dictadura. Más adelante, los sindicatos llamaron a aplicar un «*boicot a los diarios que salen con carneros*», pero la medida fue completamente ineficaz.

En el servicio de transporte colectivo, el objetivo principal de la ofensiva militar es CUTCSA, empresa privada organizada en forma semi-cooperativa, en donde los propietarios son obligados bajo presión a sacar sus ómnibus a la calle para trabajar. Se podían verificar ahora las consecuencias de no haber dispersado los ómnibus en las fábricas ocupadas o de no haberlos inutilizado momentáneamente, como propusieron al comienzo de la huelga los ocupantes de los talleres de la empresa.

Por otra parte, a medida que se agudizó la represión contra los obreros del transporte, todos los dirigentes de la FOT desaparecieron y perdieron el contacto con sus afiliados. La falta de información y la confusión provocadas por esa situación aceleró el desmoronamiento de este sector y contribuyó al debilitamiento de la huelga en el conjunto, pues el transporte era una pieza clave para asegurar la paralización general.

Por esta razón, desde el movimiento estudiantil y otros sectores de la Tendencia Combativa se trató de impedir el restablecimiento del servicio de transporte. Se esparcieron

miguelitos (grampas) en la calle, para inutilizar las ruedas de los automotores, se apedrearon e incluso incendiaron, usando el *cóctel Molotov*, varias unidades en circulación.

Una declaración de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio confirma, por unanimidad, su apoyo al Mensaje Nº1 de Seregni, que éste había emitido en su condición de presidente, no supeditado a una consulta previa. *«El Frente Amplio convoca a todas las fuerzas políticas auténticamente populares, a las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, a la Nación entera, a unirse en el enfrentamiento a la dictadura. Niega toda legitimidad a la nueva situación, expresa su más enérgico repudio a la disolución del Parlamento y de las Juntas Departamentales, y exige la destitución de Bordaberry»*, dice la declaración de la dirección frentista.

A esa altura, las noticias que comienzan a llegar regularmente desde todo el país dan cuenta del apoyo a la huelga general en varias capitales y localidades, como Florida, Las Piedras, Castillos, Paysandú, Minas, Dolores, Fray Bentos, Tacuarembó, Mercedes, Artigas, San José y Colonia. Nunca antes una movilización popular había llegado a tales proporciones en el interior, tradicionalmente más conservador que la capital.

Circula un volante sin firma, que denuncia el ingreso por la frontera de una caravana de camiones, con un

cargamento de vehículos militares, se presume, provenientes del Brasil. Según la denuncia, los camiones entraron por la localidad del Chuy, en el límite sureste del país.

Alanochecer del domingo, toda la expectativa se volcaba sobre el lunes. Los centros fabriles más importantes habían sido desalojados y el personal era convocado en forma insistente para presentarse a trabajar normalmente el día siguiente. Por otra parte, confirmando las dudas del sábado, los locales sindicales en su mayor parte también habían sido allanados, para impedir que los mismos pudieran ser usados después del desalojo como lugar de contacto o reunión de los huelguistas.

¿Cuál sería la actitud de los trabajadores, luego de lo vivido en los desalojos y de la campaña amenazadora de los medios de comunicación?



- EL PLAN DE NORMALIZACION ES UN FRACASO
- PACHECO ANUNCIA SU APOYO AL GOLPE DE ESTADO
- UN JUICIO A LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO
- SEPelio DEL DIRIGENTE TEXTIL ADRIAN MONTAÑEZ
- ERRO ENVIA UN MENSAJE DESDE BUENOS AIRES
- * SOLIDARIDAD EN EUROPA CONTRA LA DICTADURA
- * EL MINISTRO DEL INTERIOR REAPARECE EN PUBLICO, OTRA VEZ CON CARA DE "DIALOGANTE"

Durante la madrugada, los emplazamientos a trabajar son reiterados en forma insistente por la cadena oficial. El transporte colectivo en la calle completa la imagen de normalidad que el gobierno quiere dar. Son unas 60 unidades del servicio municipal, conducidas por policías, y la flota de CUTCSA, los dueños al volante, con custodia militar.

Sin embargo, a medida que se reabren las puertas de las fábricas, los trabajadores realizan asamblea y deciden volver a ocupar. En la mayoría de los lugares, las reocupaciones se efectúan con mayor número de personas que la primera vez. Algunas fábricas son desalojadas por segunda vez pero, no bien los militares se retiran del lugar, los trabajadores ocupan

otra vez. La Operación Desalojo ha comenzado a desmoronarse.

El plan militar de normalización laboral fracasa estrepitosamente. El despliegue de fuerza y las amenazas del fin de semana revelan su inutilidad ante la decisión de los trabajadores de volver a ocupar. Por los trabajadores de UTE (Usinas y Teléfonos del Estado) se sabe que el consumo de energía eléctrica del lunes es el mismo del domingo, o sea que las fábricas y los entes productivos estatales siguen totalmente paralizados.

En la fábrica LANASUR, propiedad del millonario Juan J. Gari, amigo personal de Bordaberry, el hijo del dueño acompaña a los militares para identificar a los militantes sindicales. Luego del desalojo, un contingente de

soldados permanece en la fábrica, de donde salen a buscar a los obreros para obligarlos a trabajar por la fuerza.

Este día llega un telegrama enviado por el ex-presidente Pacheco Areco a Bordaberry. Desde la Embajada de Uruguay en Madrid, el líder siente la obligación moral de expresar en forma pública el respaldo a su exministro y sucesor. «*HABIENDO-ASUMIDO-USTED-RESPONSABILIDAD-HISTORICA-PRESERVACION-VALORES-FUNDAMENTALES-DEMOCRACIA-URUGUAYA-(...)-EXPRESOLE-MI-ANHELO-EN-QUE-LE ACOMPAÑEN-LA-COMPRESION-Y-COOPERACION-DE-LOS-ORIENTALES*», dice el mensaje.

«*La política económica iniciada bajo el gobierno del Sr. Pacheco Areco fue llevada al extremo por el régimen que culmina con la dictadura. La actitud de estas minorías que procuran defender sus intereses fue el principal factor desencadenante de las penurias económica y financiera que ha soportado y siguen vigentes en la economía uruguaya*», afirma una declaración del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas.

«*Altos excedentes fueron apropiados principalmente por el latifundio, la banca y, en general, las grandes firmas nacionales y extranjeras -prosigue la declaración-, pero no se volcaron reproductivamente en el país, sino que por el contrario se destinaron a la especulación y alimentaron la*

fuga de capitales. Al mismo tiempo que se beneficiaron los grandes sectores capitalistas, se agravó la crisis interna, generando niveles de endeudamiento y dependencia externa hasta ahora desconocidos en la economía nacional.

En las primeras horas de la tarde, en el patio de entrada de la Facultad de Medicina, obreros textiles y de otros gremios de la zona, estudiantes y profesores, se reúnen junto al cuerpo, ya sin vida, de Adrián Montañez. Uno de los más jóvenes y brillantes dirigentes sindicales de entonces, no fue posible sacarlo del estado de coma en que quedó después de un accidente fortuito. Fue despedido con gran dolor por sus compañeros de trabajo y militancia que, en medio de los hechos trascendentes que se vivían en ese momento, sintieron aún más su ausencia.

«*La guerra la declararon los militares, la oligarquía y el imperio. A ella se le responderá con la guerra a todos los niveles. Que ningún sentimiento extraño a la lucha pueda limitar o entorpecer este compromiso que mil veces me oyeron decir que era irreversible*», expresa un saludo a los militantes, enviado por el senador Erro desde Buenos Aires. Wilson Ferreira Aldunate, también en la capital argentina, confirma su apoyo total a la declaración conjunta del Frente Amplio y el Partido Nacional.

A pesar de la censura implantada por la dictadura sobre las agencias internacionales de noticias, la prensa del extranjero informa con amplitud de la situación que se vive en el Uruguay. A su vez, noticias provenientes de Europa dan cuenta de que en Roma, París y Londres, se han formado comités de solidaridad con el pueblo uruguayo.

En un reportaje difundido a las 22 y 30 horas, el ministro del Interior no se muestra tan seguro y amenazador como en el discurso del viernes. *«Las cosas se van a encauzar en las vías normales del diálogo, de conversación, como tiene que ser...»*, expresa Bolentini. Cuando un periodista le pregunta si hablará con la CNT, responde colérico: *«La CNT no existe, ¿no se enteró Usted del decreto que la declara ilegal?»* Y finaliza anunciando que al día siguiente se aprobará el aumento de salarios.

Al llegar la noche, el transporte colectivo que había sido obligado a trabajar es retirado de circulación, porque a esa altura ha dejado de ser un factor que aliente a restablecer la actividad económica y por el temor de que se produzcan nuevas acciones de represalia. Mientras tanto, los ferrocarriles estatales y los ómnibus interdepartamentales, de la empresa privada ONDA, han permanecido totalmente paralizados.

El parte del gobierno, divulga-

do por la cadena de radio y televisión, al final de la jornada, vale la pena analizarlo para ver cómo trata de disfrazar algunos hechos y a otros simplemente los silencia:

- **Transporte urbano:** empresa privada y taxímetros, normal.

- **AMDET:** se fue regularizando en el transcurso del día.

- **Transporte interdepartamental:** normal, excepto 4 compañías.

- **ANCAP:** abastecimiento normal de combustible.

- **UTE:** solamente la sección reclamos no trabajó.

- **SOYP:** trabajó normalmente.

- **ANP:** servicio casi normal.

- **Bancos oficiales:** casas centrales, normales.

- **Correos:** trabajó muy restringido.

- **AFE:** en vías de regularizarse.

- **OSE:** abastecimiento normal.

- **Dirección de limpieza y usinas del municipio:** fueron saboteados los vehículos recolectores, pero comienza a regularizarse por esfuerzo del propio personal.

- **Telecomunicaciones:** el personal levantó el paro y comienza a trabajar en el día de mañana.

- **Ministerios:** funcionan normalmente excepto ministerios de Transporte, Comunicaciones y Turismo, y Salud Pública.

La prensa oficialista dirá ahora que las previsiones del gobierno eran

de que la normalización laboral del país podría llevar de siete a ocho días, contando a partir del 27 de junio. Según estas versiones, la operación tenía como objetivos prioritarios, primero, la distribución de combustibles y el servicio de transporte; y segundo, los bancos.



Martes 3

- SE APAGA LA LLAMA DE LA REFINERÍA DE LA TEJA
- LOS OBREROS DE ANCAP SON MILITARIZADOS
- ALGUNOS EMPRESARIOS APOYAN A LOS TRABAJADORES
- SE CONSOLIDAN OTRA VEZ LAS OCUPACIONES
- NUEVOS ACTOS Y MANIFESTACIONES BARRIALES
- ASAMBLEA DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO EXPRESA SU APOYO A LA HUELGA GENERAL
- EL VICE-PRESIDENTE NO COINCIDE CON BORDABERRY
- LOS COMANDANTES NIEGAN DIVERGENCIAS EN SUS FILAS
- ANUNCIAN UNA VEZ MAS EL AUMENTO DE SALARIOS
- LA HUELGA EN UNO DE LOS MOMENTOS MAS ALTOS

El primer hecho impactante del día es la ausencia de la llama de gas residual en la refinería de La Teja, habitual en la chimenea más alta de la planta y visible desde varios kilómetros a la redonda. Se cumplían casi tres días de la ocupación militar de las instalaciones y el “apagón” de la llama evidenció que la refinación de petróleo había sido interrumpida. Se decretó la militarización de todos los funcionarios de ANCAP, buscados casa por casa y perseguidos como saboteadores.

En su edición del 7 de julio, *«El País»* calificó la acción de los obreros de ANCAP de *«atentado criminal»*, al asegurar que la refinería *«pudo haber*

volado en pedazos» como consecuencia del cortocircuito provocado. La prensa oficialista publicó el nombre y apellido de los trabajadores del ente que fueron responsabilizados por la operación.

Aunque no tenía efectos significativos sobre el abastecimiento de combustible, porque las reservas en poder de los militares alcanzaban para varios días, la ausencia de la llama y la interrupción de la refinación fue un importante aliento para la huelga. Una vez más, los trabajadores habían probado su inventiva para alcanzar sus objetivos sin llegar al choque en un plano donde las fuerzas eran desiguales.

Paralelamente, las ocupaciones se consolidaron en toda su extensión. Se produjeron nuevos desalojos, pero fueron seguidos de inmediato por las reocupaciones. El record en este sentido lo tuvo el Dique Nacional, con cinco desalojos. La última vez, los obreros salen cantando el Himno Nacional y los oficiales de la Marina presentes en el operativo se cuadraron y hacen el saludo militar de rigor a ese símbolo patrio.

En estos días, varios empresarios expresan también su respaldo a la lucha de los trabajadores, que se traduce en donaciones de víveres y otras formas de apoyo al mantenimiento de la huelga.

Al fortalecerse las ocupaciones, los huelguistas organizan nuevos actos y manifestaciones, buscando la participación de los pobladores del barrio. En La Unión, más de 3.000 obreros recorren la avenida 8 de Octubre, coreando consignas contra la dictadura. La policía interviene y disuelve la manifestación con bombas de gas lacrimógeno. Algunos desalojos también concluyen con actos barriales, en donde los vecinos aplauden a los obreros. El Himno Nacional está casi siempre presente.

Estudiantes, docentes y funcionarios de medicina hicieron un acto en la Facultad. Al final del mismo, una numerosa manifestación, encabezada por el decano Dr. Pablo Carlevaro, portando la Bandera Nacional y can-

tando el Himno Nacional, recorre ocho cuadras de la avenida Agraciada. En los sanatorios y hospitales, la huelga mantiene los servicios esenciales a la población, con el apoyo del Sindicato Médico y de los trabajadores de la salud.

La Asamblea General del Claustro Universitario, con representantes de todas las facultades y escuelas, se reúne para analizar la situación y se pronuncia sobre la disolución de la CNT en estos términos: *«La Universidad de la República, de acuerdo con sus tradiciones y con el mandato de su Ley Orgánica, que le encomienda 'defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno', expresa su más enérgica condena a esta medida dictatorial; reitera su firme propósito de continuar y profundizar su compromiso solidario con las organizaciones populares en contra del golpe de Estado, como legítimo derecho que le asiste ante la arbitrariedad y la injusticia».*

La Sociedad de Arquitectos, el Colegio de Contadores y la Asociación Odontológica adoptan resoluciones de repudio al golpe de Estado. Junto con el Sindicato Médico, proponen un paro de los profesionales al resto de las gremiales universitarias, tal como los médicos lo aplicaban desde el 27 de

junio, manteniendo los servicios esenciales.

El vice-presidente de la República, Jorge Sapelli, en declaraciones a la prensa, reafirma su respeto por las instituciones democráticas y, de esta manera, pone en evidencia su discrepancia con las decisiones del presidente Bordaberry. Los ministros de Industria y Comercio y de Obras Públicas, junto con el Director de Planeamiento y Presupuesto, que habían anunciado su renuncia, se retiran definitivamente de sus cargos.

«En estos momentos de gran confusión y desorientación de tantos, mi posición de hoyes la de ayer y la de siempre. Por convicción y tradición, como político y como hombre, expreso una firme e indeclinable adhesión a los principios democráticos, a los postulados de libertad y justicia social, y a las instituciones por las que tanto deben luchar siempre quienes guían al país y legan el ejemplo de sus actitudes», expresó Sapelli.

La Junta de Comandantes en Jefe emite un comunicado para desmentir rumores, falsos según ellos, que hablan de la existencia de divergencias en el seno de las fuerzas armadas. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República desmiente, asimismo, unas palabras atribuidas a Bordaberry en el reportaje del diario argentino *La Nación*. Según algunas versiones, los mandos militares consi-

deraron «inconvenientes» sus declaraciones cuando admitió su simpatía por la dictadura brasileña.

Monseñor Carlos Mullin, obispo auxiliar de Minas, concurrió a Casa de Gobierno para presentar sus saludos a Bordaberry, católico practicante. Se trató de «una cordial entrevista», informó la prensa golpista, a la vez que destacó la «alta jerarquía» del prelado. Fue el único dignatario católico en hacer ese gesto. Monseñor Carlos Partelli, arzobispo de Montevideo, y su Consejo de Presbiterio divulgaron el texto «Elementos para la reflexión cristiana», con una clara postura antigolpista.

«No somos defensores de determinadas instituciones por sí mismas, pero pensamos que las ahora disueltas, a pesar de sus deficiencias notorias, eran un lugar en que se posibilitaba la expresión y el ejercicio de las responsabilidades de las diversas capas sociales y corrientes de opinión existentes en nuestra sociedad dispuestas a servir al bien común», expresó la declaración eclesiástica. Y en otra parte advirtió que «todo orden que no tenga por fundamento la justicia, todo orden impuesto por la fuerza y no por el consenso, engendra tarde o temprano la violencia».

Los emplazamientos para reanudar el trabajo no han cesado, aunque el volumen de los mismos se ha reducido notoriamente, si se lo com-

para con la frecuencia de los días anteriores. Sin embargo, mantienen la tónica. Uno de los comunicados advierte, falseando los hechos, que *«manos inescrupulosas controlan el servicio de gas, cortando y reanudando el mismo en forma arbitraria y sin previo aviso a los usuarios»*.

El gobierno autorizó un aumento de salarios de 31,48% en la industria privada y de 25% en el sector público. El aumento salarial fue acompañado por una suba de precios de varios artículos de consumo popular. El ministro del Interior, coronel Bolentini, había asegurado el sábado anterior que el aumento no sería decidido hasta que no se levantaran las medidas gremiales en vigor. Tampoco había una relación entre el aumento concedido y el 50% anunciado como factible el día del golpe ...

En el mes de junio, las estadísticas indicaban que, para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1968, el aumento de salarios debía ser de un 60%. Se preveía que el aumento de precios del mes de julio sería de un 20%, con lo que el «aumento» concedido en este momento era un mero paliativo. La decisión del gobierno no tuvo ningún efecto en las fábricas ocupadas. El fin de la huelga general no pasaba por los salarios.

Este día, la resistencia popular llegó a uno de sus puntos más altos. La Operación Desalojo y la ofensiva re-

presiva desatada hasta entonces habían fracasado en el intento de normalizar la actividad laboral. En el transcurso, los sindicalistas consiguen, en un último esfuerzo, restablecer al paro en AMDET. Las reocupaciones acrecentaron la movilización y la participación de los trabajadores, que en las ocupaciones de algunas fábricas alcanza a más del 90% de todo el personal.

Hubo indicios en este momento de que la reocupación de las fábricas fue un hecho desconcertante para los militares. Algunos oficiales de grado intermedio, a cargo de los operativos de desalojo, buscaron conversar con trabajadores de lugares ocupados en busca de una explicación. Dentro de su lógica no entendían las reocupaciones.

Las deserciones políticas y la actitud vacilante del gobierno, puesta de manifiesto en la disminución de los comunicados y emplazamientos, eran una consecuencia de la firmeza popular y contribuían al fortalecimiento de la huelga. Pero la dictadura no estaba derrotada, busca reponerse del fracaso y prepara nuevas medidas represivas.



- BORDABERRY ES ACUSADO ANTE LA SUPREMA CORTE
- FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS MANIFIESTAN EN LA PLAZA MATRIZ EN CONTRA DE LA DICTADURA
- * EL GENERAL CRISTI INTENTA DIVIDIR A LOS SINDICATOS
- DECRETO PERMITE DESPIDOS ILEGALES EN MASA
- REQUIEREN LA CAPTURA DE 52 DIRIGENTES DE LA CNT
- LOS ESTIBADORES EFECTUAN UN PARO SOLIDARIO
- LA BATALLA POR EL CONTROL DEL TRANSPORTE
- FUNCIONARIOS PUBLICOS RETORNAN AL TRABAJO

El Frente Amplio y el Partido Nacional, en forma paralela, presentan una acusación ante la Suprema Corte de Justicia contra el Sr. Juan María Bordaberry como reo de lesa Nación, por violación de la Constitución que juró defender al asumir la Presidencia de la República.

El matutino golpista *«El País»* intenta desmentir, de cualquier manera, la declaración del Frente Amplio y el Partido Nacional. En la sección SE DICE, escribe: *«QUE persisten los volantes informando acerca de una presunta declaración conjunta del Partido Nacional y del frente comunista apoyando la actitud de los sindicatos»*. En otra columna de la misma

página editorial, *«un alto dirigente nacionalista»* niega la existencia de tal declaración, pero no se divulga el nombre del alto dirigente invocado.

El semanario *«AZUL Y BLANCO»*, vocero de la ultra-derecha militar, que promovió abiertamente el golpe de Estado, aparece en este día ocupando una página completa de *«El País»*, con el siguiente texto, en los tipos mayores de letras: *«HAY tanto que decir QUE más vale ESPERAR. No tuvimos tiempo de escribir ... volvemos apenas lo tengamos»*.

Después del mediodía, una multitud de familiares de presos políticos de diferentes ideologías y creencias, unidos por una misma oposición

a la dictadura, se congregó en la Ciudad Vieja de la capital. La convocatoria fue realizada por el Comité de Familiares de Presos Políticos, una red de laicos parroquiales y otros grupos, con el fin de celebrar una misa en la Catedral, a las 13 y 30 horas. Cuando llegaron al lugar, las puertas del templo estaban cerradas y, a pesar de una gestión hecha entonces por un grupo de delegados ante el Arzobispado, la multitud tuvo que permanecer de pie fuera del recinto religioso, en la escalinata frente a la Plaza Matriz.

Llegaron efectivos de la policía y la Marina que con carros lanza-agua y bombas de gas lacrimógeno atacaron a los presentes. Las personas cantaban el Himno Nacional, lo que obligaba a los integrantes de las Fuerzas Conjuntas a hacer el saludo militar y, de esta manera, los manifestantes pudieron irse retirando. A las 18 horas, reunidos en una casa cercana a ese lugar, Elena Bernier, Luz de Fuentes de Osimani, Laura Peyrot, Elsa Rodríguez y Aramiz Tabarez, fueron detenidos por un contingente del Ejército.

Los detenidos pertenecían al Comité de Familiares de Presos Políticos y hacían un balance de la recaudación de fondos, de la distribución de ropa y alimentos, así como del dinero destinado a los viajes del interior a la capital, para la visita a los reclusos. Tenían el apoyo de entidades como Amnistía Internacional. Los militares se apropiaron del dinero donado que

se encontraban ese día en poder de los detenidos, quienes fueron llevados a un cuartel y permanecieron veintidós días presos, diez de los cuales incommunicados, hasta que un juez militar decretó su libertad.

En la fábrica de FUNSA, ocupada por uno de los sindicatos líderes de la Tendencia Combativa, los militares quieren explotar sus diferencias con la dirección mayoritaria de la CNT y proponen abrir una instancia separada de negociación. Pero no fueron muy lejos, porque los dirigentes sindicales de FUNSA dijeron que hablaban en nombre de la CNT o, de lo contrario, no había conversación. Por otra parte, cuando uno de los trabajadores le preguntó a un oficial porqué no despedían a Bordaberry, éste contestó que eran militares y que ese no era un problema de su incumbencia ...

«Durante siete días se concedió un plazo para reflexionar. Ahora ha llegado el momento de definir las cosas», expresó, según *«El País»*, un alto vocero del gobierno, no identificado. Se dan a conocer las nuevas medidas represivas. Un decreto del Poder Ejecutivo deroga todas las normas en vigor hasta entonces, incluidos tratados internacionales firmados por el país, en materia de estabilidad laboral, para permitir la realización de despidos en masa en la actividad pública y privada.

«En los organismos públicos -reza el decreto-, el respectivo jerarca

dispondrá, obligatoriamente y bajo su responsabilidad, la destitución por omisión de los funcionarios que realicen huelgas, paros o toda otra forma de trabajo irregular. En la actividad privada, continúa el decreto, las mismas circunstancias, *«constituirán notoria mala conducta y su despido no generará indemnización alguna»*. Y agrega que los instigadores de tales hechos deberán ser *«sometidos a la Justicia penal competente por la presunta comisión de delitos contra el orden público del Estado»*.

En forma simultánea, el Comunicado No. 862 de las Fuerzas Conjuntas, el comando militar unificado para el combate a la subversión, requiere la captura de 52 dirigentes de la CNT. Como es su norma, el nombre de cada sindicalista requerido va acompañado de la foto, el domicilio habitual y el documento de identidad. El texto del comunicado advierte a la población que, posiblemente, los buscados se encuentren en la clandestinidad. Es lo que los militares quieren, que desaparezcan.

La Unión Nacional Reeleccionista, al darse por enterada del telegrama enviado por su máximo líder, Pacheco Areco, apoyó al mismo por unanimidad. En otra declaración formuló, *«por mayoría»* (sic), votos por la vigencia de las instituciones y la realización de elecciones. El secretario ejecutivo de la agrupación, diputado

Raumar Jude, reveló a la prensa que discrepaba con el telegrama de Pacheco y con la declaración del sector.

Los estibadores del puerto capitalino, agrupados en la Unión Solidaria de Obreros Portuarios (USOP), un gremio independiente, no adherido a la CNT, deciden parar por 48 horas, miércoles y jueves, en repudio a la dictadura. La paralización del puerto es ahora total, pues ya se encontraban en huelga los miembros del Sindicato Único de la Administración de Puertos (SUANP). Un petrolero brasileño está fuera del puerto, sin contar con personal para la operación de descarga. En el puerto de Buenos Aires, tres barcos uruguayos están ocupados por su tripulación y adornados con numerosos carteles donde se leen frases de repudio al golpe de Estado.

En AMDET se levanta la huelga, con el aval del Comando de la CNT. Los ómnibus de CUTCSA conducidos por los dueños y las unidades de AMDET en circulación sólo alcanzan para prestar un servicio de emergencia, pero la imagen sobre la población es que el transporte colectivo de la capital no está en huelga. Las acciones de la resistencia continúan, como da cuenta, en su estilo habitual, un comunicado militar: *«Personas inescrupulosas han impulsado mediante pago de dinero a niños de corta edad a arrojar piedras y grampas sobre óm-*

nibus que circulan en Montevideo».

El sabotaje de los huelguistas es, no obstante, insuficiente como para frustrar el plan militar y, con unas decenas de ómnibus y «troleys» en la calle, aumenta la presión para la vuelta al trabajo en los ministerios y los comercios céntricos. Las gremiales de la administración central (COFE) y de la Intendencia Municipal de la capital (ADEOM) deciden presentarse en las oficinas y aplicar un «*paro de brazos caídos*». Se refuerza así la imagen de normalización buscada por los golpistas, a pesar de que la industria y el sistema financiero están totalmente paralizados.

La huelga general es una acción muy amplia e intensa a la vez, que si se estanca decae, que necesita nuevos hechos y metas que la sostengan. A esta altura, requería la definición de nuevos pasos que permitieran ver el camino hacia su objetivo final. Concientes de esa necesidad, sectores del Frente Amplio y el Partido Nacional informan en sus boletines que se está elaborando una propuesta de salida de la situación.

«Desde todas las fábricas, centros de trabajo y estudio, todos los trabajadores sabemos que debe ser condición previa en toda negociación con las FF.AA. la exigencia de destitución inmediata del dictador Bordaberry. No puede haber soluciones para el pueblo con Bordaberry y su

equipo en el gobierno», expresa el boletín *A los trabajadores en lucha* (Nº 9), del sector sindical de la Corriente. En este caso, se quería prevenir la posibilidad de que los militares buscaran negociaciones por separado con algún sector sindical y se establecían las condiciones mínimas.

Los sindicatos en huelga prevén la posibilidad de que sus direcciones puedan ser capturadas y se integran con anticipación hasta dos direcciones de recambio. Comités del Frente Amplio organizan redes de comunicación entre fábricas y centros de estudio ocupados de la zona. En algunos casos, pueden utilizar el teléfono, que sigue funcionando.

El servicio informativo internacional de la BBC de Londres brinda una amplia cobertura sobre la situación que se vive en el Uruguay, que comparó a la de los países ocupados por el nazismo durante la segunda guerra mundial, con la diferencia de que en este caso se trata del ejército nacional. Irritado con la BBC, el gobierno prohibió desde este día todas las transmisiones de los corresponsales extranjeros acreditados en el país.



- EL FRENTE AMPLIO Y EL PARTIDO NACIONAL DEFINEN LAS BASES PARA UNA SALIDA POLITICA DEMOCRATICA
- NUEVA OFENSIVA MILITAR: DE DESALOJOS, AHORA CON DETENCIONES SELECTIVAS Y MAS EMPLAZAMIENTOS
- ESTADIO MUNICIPAL ES CONVERTIDO EN UNA CARCEL
- COMIENZAN LOS PLEBISCITOS FRAUDULENTOS
- TODO EL BARRIO DEL CERRO APOYA A LA HUELGA
- EN EL PARTIDO URUGUAY-COLOMBIA: LA HINCHADA CANTA CON MAS FUERZA EL «¡TIRANOS TEMBLAD!»
- TRES LEGISLADORES NACIONALISTAS PRESOS

El Frente Amplio y el Partido Nacional dan a conocer las denominadas *Bases para la salida de la actual situación*. Es un acuerdo político de seis puntos, cuyo contenido esencial es el siguiente:

1. Restablecimiento pleno de las libertades, derechos y garantías constitucionales y legales. Erradicación de toda práctica vejatoria de la persona humana.

2. Restablecimiento y respeto pleno de los derechos de los partidos políticos y las organizaciones gremiales.

3. Recuperación del poder adquisitivo de los salarios, sueldos y pa-

sividades; contención de la carestía y subsidio para los artículos de consumo popular.

4. Compromiso en torno a un programa mínimo que elimine los privilegios de los grandes grupos económicos y libere la Nación de la dependencia externa.

5. Cese de Bordaberry y formación de un gobierno provisional, representativo de los sectores coincidentes con esta plataforma.

6. Consulta popular inmediata; instalación de una Asamblea Constituyente que elabore las bases de una nueva institucionalidad, con el fin de consolidar la democracia y efectuar las

reformas estructurales necesarias; elección del nuevo gobierno.

«El sentido de este acuerdo es el de ampliar la unión de los patriotas, fijando en común las soluciones o metas que orientan su lucha», explica el Mensaje No. 8, dirigido *A la militancia del Frente Amplio. «Al pasar de la resistencia a la ofensiva-agrega-, el Frente Amplio y el Partido Nacional se han puesto de acuerdo para coordinar sus esfuerzos».*

«El País» no sabe cómo atacar el acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. En la columna editorial, el senador Wáshington Beltrán, nacionalista y uno de los dueños del diario, cuestiona la posibilidad del acuerdo y celebra el desmentido de *«una alta personalidad»* del Partido Nacional, pero sigue sin identificarla. En la misma página, en un pequeño recuadro, Beltrán afirma que no ha tenido ninguna participación en *«la redacción, la impresión y difusión de un volante anónimo profusamente repartido ...»*. ¿Desmiente su intervención en algo que no existe?

El sector Lista 15 del Partido Colorado, encabezado por Jorge Batlle, informó que esta agrupación ha decidido *«mantener una línea totalmente autónoma de todo otro movimiento político»*.

Gallup divulgó los resultados de un sondeo de opinión pública realizado en esos días. De acuerdo con este instituto, 54% de los entrevis-

tados dieron su aprobación al gobierno y 36% se manifestaron en contra. Gallup también auscultó la opinión sobre las Fuerzas Armadas, que habrían recibido 71% de apoyo, contra apenas 14% de reprobación. Al mismo tiempo, 47% consideró al gobierno extremadamente débil en su decisión. De ser verdaderas, las cifras legitimaban una mayor agresividad del gobierno. Si eran falsas, buscaban inducir y justificar esa mayor agresividad.

Y así sucede. La dictadura desata la nueva ofensiva, apoyándose en los últimos decretos represivos. Los emplazamientos adquieren otra vez el tono insistente y amenazador, ahora con la advertencia de que los que no se presenten a trabajar serán declarados cesantes. El gobierno amenaza en forma directa también a los empresarios que no se muestren dispuestos a aplicar las penalidades anunciadas.

En los desalojos y allanamientos de locales sindicales se incorpora una nueva forma de represión, por la cual los dirigentes y activistas que se supone garantizan la aplicación de la huelga general son llevados detenidos. En muchos casos, las empresas han proporcionado la nómina de militantes usada por los militares en el procedimiento.

Los lugares comunes de reclusión policial o militar son insuficientes para albergar tanta cantidad de sindicalistas presos. En algunos casos han sido detenidos todos los participantes

en la ocupación. La dictadura inaugura entonces una nueva cárcel, es el estadio cerrado conocido como el Cilindro Municipal. Cuando llegan los primeros presos, no hay agua, inclusive en los gabinetes higiénicos. El aire y el frío se cuelan por los grandes ventanales del local, haciendo más difícil la estadía.

Como nueva forma de presión contra la huelga, la dictadura impone la realización de plebiscitos. Los trabajadores son convocados a las fábricas y, con la presencia de militares y representantes de la patronal, se pretende efectuar una votación «democrática», para decidir si se entra o no a trabajar. La farsa del procedimiento fue confirmada por el propio ministro Bolentini. Al preguntarle un periodista qué pasaba si la mayoría de los obreros votaba por no entrar, el ministro respondió: *«hay que trabajar»*.

Los «plebiscitos» fueron aplicados en primer término en el transporte urbano e interdepartamental. A los efectos de la votación, no se consideraba si el número de presentes era representativo de la totalidad del personal. De esta forma, la mayoría de los resultados era favorable a la reanudación del trabajo y eran divulgados inmediatamente por la cadena oficial de radio y televisión. Cuando los presentes en la votación eran pocos, el resultado era informado en porcentajes y no en números.

Por la tarde, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) efectúa otra reunión extraordinaria para realizar un análisis de la situación general del país y, en especial, para tomar medidas en la banca oficial y privada, según el comunicado emitido después de la sesión.

A contracorriente de la nueva ofensiva represiva, el barrio popular del Cerro dio un ejemplo de firmeza y solidaridad con la huelga. Los comercios, almacenes y bares de la zona cerraron durante todo el día, sumándose a las fábricas ocupadas, en lo que fue una demostración prácticamente unánime de repudio al golpe de Estado. En conocimiento de la decisión, los militares mantuvieron un intenso patrullaje por todo el barrio, pero no consiguieron alterar la decisión de sus pobladores.

Las Coordinadoras del Frente Amplio organizan manifestaciones en diferentes zonas de la capital. Frente al Hospital de Clínicas, un acto reúne más de mil personas. En varios lugares de trabajo ocupados se plantea la iniciativa de organizar una gran manifestación central.

Demagógicamente, el gobierno cede esa noche la cadena de radio y televisión para la trasmisión del partido de fútbol entre las selecciones de Uruguay y Colombia. Por primera vez, el partido se vio por los cuatro canales de televisión. Después de la ejecución del Himno Nacional, se per-

cibió que la mayoría de los asistentes coreó «¡Tiranos, temblad!» durante varios minutos. Al final del primer tiempo, en la tribuna Amsterdam se desplegó un enorme cartel con la consigna: **NO A LA DICTADURA**.

Los diputados nacionalistas Luis A. Lacalle Herrera, Carlos Rodríguez Labruna y Oscar López Balestra, son detenidos y reclusos en una unidad militar. El hecho es considerado una represalia por la existencia del acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.



Viernes 6

- SE DESMORONA LA HUELGA EN EL TRANSPORTE, EN EL SERVICIO PUBLICO Y EN EL COMERCIO CAPITALINOS
- LA INDUSTRIA Y LA BANCA SIGUEN PARALIZADAS
- LA UNIVERSIDAD SE PRONUNCIA EN ACTO PUBLICO Y MANIFIESTA POR 18 DE JULIO CONTRA LA DICTADURA
- RECTOR Y DOS DECANOS GOLPEADOS POR LA POLICIA
- * MEDICOS EN ASAMBLEA RECHAZAN INTIMACIONES
- NUEVAS RENUNCIAS DE INTEGRANTES DEL GOBIERNO
- REPUDIO A LA DICTADURA DESDE BUENOS AIRES
- ASESINATO DEL PROFESOR Y ESTUDIANTE RAMON PERE

La huelga en el transporte colectivo se desmorona completamente. Al levantamiento de la huelga en las grandes empresas de la capital (CUTCSA y AMDET), se le suman los ómnibus interdepartamentales de ONDA, COPSA y el ferrocarril. Al mismo tiempo, estibadores y administrativos del puerto de Montevideo deciden reintegrarse al trabajo.

También se debilita la huelga en el servicio público y en el comercio. Ante la amenaza militar de desalojar las oficinas, las gremiales suspenden el paro de brazos caídos y adoptan el *«trabajo a Reglamento»*. De hecho, el trabajo a Reglamento es de rendimiento mínimo o nulo, pero fortalece la

imagen de normalización. La represión se focaliza ahora sobre los bancos, aunque sólo abren algunas casas centrales, con personal superior y pocos carneros. El resto continúa paralizado.

El gobierno decide intervenir los entes paraestatales (Seguro de Salud, Asignaciones Familiares, etc.), para desplazar de sus puestos directivos a los representantes de empresarios y trabajadores e intimar formalmente a sus funcionarios a reanudar la actividad laboral.

En el cordón industrial de la capital y en los barrios obreros, la huelga y las ocupaciones se mantienen con total firmeza. En los barrios de El

Cerro y La Teja, las calles han sido cortadas con barricadas, para no permitir el tránsito de los ómnibus de transporte colectivo.

Cumpliendo con los decretos represivos, diversas empresas publican remitidos de prensa en los que emplazan a sus empleados a reanudar el trabajo. No obstante, la paralización de la producción industrial es reconocida incluso desde fuentes militares, según las cuales el nivel de actividad es un 20% del existente en el país al 27 de junio.

«Ciudadano: el Uruguay lo necesita y Ud. tiene que ir a trabajar. No perjudique a su país. Póngale el hombro al Uruguay y verá como salimos adelante. ¡PONGALE EL HOMBRO AL URUGUAY!», reza un anuncio de casi media página publicado en la prensa oficialista.

La resistencia en el interior del país ha sufrido algunos golpes pero no ha perdido su entereza. La huelga se sustenta, sobre todo, por la firmeza de los gremios obreros, los bancarios y los profesores de enseñanza media. En los lugares donde no ha sido posible mantener la huelga, se realizan paros parciales y otras formas de movilización.

El Consejo Directivo Central, instancia máxima de co-gobierno de la Universidad, efectúa una sesión pública en el Paraninfo, convocada con las consignas de *Levantar el sagrado grito de la Libertad y Destruir a*

la tiranía, del héroe nacional José Artigas. El Rector Lichtensztejn efectúa una sólida exposición acusatoria contra el gobierno, al que califica de *dictatorial* y *cisplatino*, por sus simpatías con el régimen brasileño. Con el Paraninfo y las escalinatas de acceso a la Universidad colmadas de público, el Himno Nacional fue cantado con gran fervor patriótico.

Al término del acto, unas mil personas salieron en manifestación por la avenida principal, 18 de Julio, en dirección al Obelisco. Los moradores de los edificios cercanos aplaudían a los manifestantes, encabezados por las autoridades de la Universidad, portando una bandera uruguaya y cantando el Himno Nacional. A la altura de Martín C. Martínez, la Guardia Metropolitana los atacó con sus bastones y gases lacrimógenos.

Los miembros del Consejo Central fueron los primeros golpeados. Los decanos de Medicina, Pablo Carlevaro, y de Derecho, Alberto Pérez Pérez, quien intentó retener la bandera, fueron hospitalizados con heridas en la cabeza. También fue herido un funcionario universitario y el Rector resultó con varias contusiones. Algunas horas más tarde, al salir de la Universidad, Lichtensztejn y dos consejeros fueron detenidos.

El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, ante la intimidación a que han sido sometidos los médicos que desempeñan cargos en Entes Autónomos

mos y Servicios Descentralizados, reafirma la resolución de la asamblea del 26/6/73 y declara que: *1) No se ajusta a derecho la intimación por cuanto es violatoria del derecho constitucional de huelga; 2) Declara los cargos en conflicto; 3) En casos de despidos por la motivación precedente, compromete su apoyo moral y económico a los despedidos; 4) A quienes no cumplan la resolución gremial previamente especificada, se les aplicará las sanciones disciplinarias más severas previstas en el Estatuto».*

Bordaberry acepta la renuncia presentada por varios altos funcionarios de la administración, muchos de ellos representantes del Poder Ejecutivo en otros organismos. También renuncian a sus cargos dos miembros del Consejo Nacional de Enseñanza (CONAE).

Un decreto del Poder Ejecutivo prohíbe a CX 30 usar el nombre «Radio Nacional», así como la frase «esta es la Radio Nacional del Uruguay», habitual en la programación de la emisora. En el momento del golpe, los propietarios de CX 30 pertenecían al Partido Comunista.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprueba una declaración de repudio a la dictadura implantada en Uruguay.

Al final de este día, Ramón Peré, de 29 años de edad, casado y con dos

hijos, estudiante de Veterinaria, profesor de Enseñanza Media y miembro del Partido Comunista, es muerto a balazos por una patrulla militar.



Sábado 7

- LA UNIVERSIDAD ES CERCADA CON EL FIN DE IMPEDIR EL VELATORIO DE RAMON PERE EN SUS LOCALES
- CONVOCAN A UNA MANIFESTACION CENTRAL DE LAS FUERZAS Opositoras A LA DICTADURA
- ES DETENIDO EL PRESIDENTE DEL PARTIDO NACIONAL
- EL RESPALDO BRASILEÑO AL GOLPE DE ESTADO
- BORDABERRY HABLA A CORRESPONSALES EXTRANJEROS
- LA HUELGA GENERAL SUFRE UN DEBILITAMIENTO
- FAMILIARES Y ARTISTAS EN LAS FABRICAS OCUPADAS
- FEDERACION SINDICAL MUNDIAL LLAMA A UN BOICOT INTERNACIONAL CONTRA EL URUGUAY

El Comunicado Nº 100 de las Fuerzas Conjuntas, emitido en este día, afirma que Ramón Peré y otra persona no identificada fueron sorprendidos por una patrulla militar cuando atentaban contra un ómnibus, se les dio la voz de alto y se habrían dado a la fuga, cuando se produjeron disparos.

Esa mañana, familiares y amigos de Ramón Peré llevaron su cuerpo al local central de la Universidad, para velarlo en ese lugar. La policía montó inmediatamente un cerco, para impedir toda entrada o salida del local. Tras una discusión de los órdenes universitarios, el Rector acuerda con el Jefe

de Policía el traslado del féretro para realizar el velatorio en otro lugar

La Comisión de Montevideo de la CNT, en su Boletín Nº 7, informa que:

«Por acuerdo de las fuerzas sindicales de Montevideo, de trabajadores y de profesionales (médicos) y organizaciones populares (mesas zonales y movimiento femenino) y a consideración de las fuerzas políticas: se ha resuelto realizar una concentración de las fuerzas opositoras a la dictadura, PACIFICA Y SIN ARMAS, durante la cual se garantizará, conciente del papel en las mismas de las masas participantes, la exhibición

de pancartas y banderas y entonando consignas; no realizando ni permitiendo realizar actos voluntaristas de violencia de cualquier especie.

Y el gobierno es conciente, las FF.AA. son concientes, y la policía es conciente de que cuando la CNT compromete su posición ¡CUMPLE!.

La manifestación es convocada para el lunes 9 de julio, a las 17 horas, en «18 de Julio», la principal avenida de la capital.

El Mensaje Nº 10, dirigido *A los militantes de la resistencia*, informa que, como resultado de los acuerdos políticos adoptados, el Frente Amplio y el Partido Nacional apoyan la manifestación convocada para el lunes 9, así como la preparación de otras movilizaciones conjuntas.

El capitán de navío (retirado) Homar Murdoch, presidente en ejercicio del Directorio del Partido Nacional, es puesto bajo arresto. Era otra acción de represalia por la posición antigolpista de este sector político tradicional y por el acuerdo alcanzado con el Frente Amplio. Murdoch fue detenido en la tarde, en la ruta que une las ciudades de Minas y Montevideo, cuando volvía de una gira política por el interior del país.

Fuentes confiables aseguran que el régimen militar brasileño apoya de varias maneras a los golpistas uruguayos. Bordaberry y las fuerzas armadas habían conseguido la colaboración de técnicos del país vecino

para reanudar las operaciones de la refinería de ANCAP en La Teja, que estaba parada por la acción de los huelguistas. Y contaban también con ese apoyo para efectuar una importación de combustible en carácter de emergencia.

En un nuevo reportaje de la prensa extranjera, Bordaberry asegura que la mayoría del pueblo uruguayo lo apoya, poniendo como prueba de ello que «*sin ningún contralor se ha mantenido la normalidad*» (sic). Luego de reiterar que las medidas tomadas por su gobierno han sido «*para afirmar las instituciones*», Bordaberry define a la democracia como «*El gobierno auténticamente representativo del pueblo, mediante su pronunciamiento periódico, regular y libre, con pluralidad de partidos políticos ...*».

«*Ha nacido un nuevo sindicalismo*», anuncia por su parte el ministro del Interior, en una entrevista exclusiva del diario «*El País*». Bolentini asegura que a partir del miércoles 11 se habrá normalizado prácticamente toda la actividad laboral del país. Y agrega: «*Cuando la paz social se asiente, se levantará el paréntesis que se ha impuesto a la actividad política y, con una nueva estructura constitucional que elegirá el pueblo, iniciaremos una nueva etapa en la vida del Uruguay*».

El canciller Juan Carlos Blanco (actual senador de la UCB) informa el pedido de renuncia a cuatro diplomá-

ticos, para reducir los gastos de ese sector del gobierno, en el marco de una reestructura del servicio exterior acordada en febrero entre el presidente y los mandos militares. Pero los involucrados declararon que no renunciarían y *«El País»* se quejó de que la mayoría respondía al nacionalismo. *«Es de esperar que no se trate de reorganizaciones flechadas»*, comentó el diario oficialista.

En forma simultánea, la Comisión de Represión de Ilícitos Económicos (CRIE), órgano creado por el gobierno para controlar la investigación de los escándalos en esa área, informa de la detención de diez estancieros en el departamento de Salto, cuyas propiedades totalizan más de 200.000 hás. de tierras, por estar involucrados en maniobras dolosas..

A diez días de su iniciación, la huelga general atravesó por múltiples vicisitudes y experiencias. El enfrentamiento ha servido a unos sectores para templar su firmeza y su combatividad, mientras que otros han puesto en evidencia sus deficiencias o sus flaquezas. Aunque en lo sustancial sigue en pie, la huelga general ha decaído en los últimos días, como consecuencia de la deserción de diversos gremios.

Durante el sábado y el domingo, se promueve la concurrencia de las familias a las fábricas ocupadas. También se organiza la participación de artistas populares en los fogones de

los trabajadores. La presencia de los familiares, junto con el canto y las representaciones artísticas sirven de estímulo para proseguir la lucha.

Desde el exterior se informa que la Federación Sindical Mundial (FSM) ha llamado a realizar un bloqueo comercial internacional contra el Uruguay. No será descargado ni reparado ningún barco que haya tocado el puerto de Montevideo y se bloqueará el transporte de combustible al país en conflicto, establece la resolución sindical.



Domingo 8

- ES MULTITUDINARIO EL ENTIERRO DE RAMON PERE
- LLEGAN A DOS MIL LOS PRESOS EN EL CILINDRO, QUE DEBEN HACER FOGATAS PARA CALENTARSE
- ESFUERZO DE REORGANIZACION DE LA HUELGA EN ALGUNOS LUGARES MAS DEBILITADOS
- FRACASA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
- EL DIPUTADO JULIO M. SANGUINETTI PRECISA LOS LIMITES DE LA OPOSICION DE LA LISTA 15 AL GOLPE MILITAR
- REALIZAN UNA MANIFESTACION MASIVA EN PAYSANDU

Por la mañana continúa el cerco militar a los locales universitarios, para impedir que el velatorio de Ramón Peré pueda realizarse en alguna de las facultades. Los restos del estudiante asesinado se encuentran desde el sábado en el local de una empresa funeraria particular. La convocatoria para concurrir al entierro corrió de boca en boca.

«Miente la dictadura», afirma el titular de un volante *«Ramón Roberto Peré fue vilmente asesinado por 'tiras' -explica el texto-, que lo siguieron de la Facultad de Veterinaria donde era docente y que como todo el pueblo uruguayo ocupaba su lugar de lucha contra la dictadura. Estaba desarmado y fue asesinado por la espalda».* El volante informa además que el entie-

rrero de Peré se efectuará a las 9 horas del domingo.

En el lugar indicado, desde las primeras horas de la mañana comenzó a congregarse gran cantidad de personas. A la salida del cortejo fúnebre, una inmensa multitud acompañó al estudiante. Se canta el Himno Nacional y, al grito de *«¡Tiranos Temblad!»*, los puños en alto expresaban la decisión de proseguir la lucha hasta sus últimas consecuencias.

La presencia masiva de personas dispuestas a desafiar la represión, en el entierro de Peré, fue un anticipo de lo que sería la concentración del día siguiente. Las tareas organizativas de la manifestación fueron coordinadas entre la CNT, el Frente Amplio y el Partido Nacional. El sábado y el do-

mingo, la convocatoria de la concentración llegó a todos los sectores involucrados en la lucha. La consigna era: *«Todos a 18»*.

El cerco militar fue levantado en casi todos los locales universitarios a las 19 y 30 horas. Permaneció sitiada solamente la sede central, en donde se encontraban el Rector, los miembros del Consejo Directivo Central, 60 funcionarios y unos 370 estudiantes.

El número de militantes detenidos en el Cilindro Municipal ya llega a los dos millares. Las visitas autorizadas de los familiares de los presos no pueden tener más de dos minutos de duración. Los propios reclusos se han ocupado de acondicionar mejor el lugar. Las gradas del estadio sirven de camas y grandes fogatas contrarrestan el frío.

El fin de semana es utilizado también por los huelguistas para tratar de reorganizar la lucha en los lugares debilitados. Se busca, por lo menos, reducir el número de personas que ha retornado al trabajo. Se realiza gran cantidad de reuniones para afirmar la huelga e incluso los militantes entran en algunos centros de trabajo, para convencer a los que están trabajando de que deben salir y reincorporarse a la huelga general.

El boletín *Resistencia Blanca* Nº6 informa que ha fracasado el intento de realizar una reunión de la Asamblea General Legislativa. La convocatoria buscaba que el máximo órgano legis-

lativo asumiera los poderes legales que le habían sido retirados por los primeros decretos dictatoriales. Falta-ron legisladores para dar validez al intento, en especial de la Lista 15, del Partido Colorado, liderada por Jorge Batlle.

El diputado Julio María Sanguinetti, entrevistado por *«El País»*, en su edición de la fecha, confirma la negativa de la Lista 15 a participar en algún reclamo del Poder Legislativo disuelto y desmiente a la vez que el sector fuera a integrar el nuevo Consejo de Estado. *«Deseo que no quede ninguna duda en cuanto a nuestra oposición a la situación emergente del 27 de junio (...) Con la misma claridad, desmiento toda información que nos vincule al Frente»*, declaró Sanguinetti. La 15 se había definido en contra del golpe de Estado, pero también de cualquier tipo de alianza en ese momento, sobre todo con *«los marxistas»* (sic) del Frente Amplio.

En la misma edición de *«El País»*, el senador Wáshington Beltrán vuelve a escribir un editorial sobre el tema de los acuerdos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, para transmitir su preocupación de que *«sea equivocada»* la versión, atribuida entonces a una alta fuente nacionalista, que desmentía la existencia de cualquier acuerdo de ese orden.

En el centro de la ciudad de Paysandú, a las 11 de la mañana, se congregaron más de dos mil personas.

La manifestación partió de la plaza pública y recorrió la principal avenida. Intentaron dispersarla con gases lacrimógenos, pero las personas se reagrupaban y proseguían. Al final, la disolución estuvo a cargo del Ejército, por medio de disparos al aire.



Lunes 9

- ASESINATO DEL ESTUDIANTE WALTER MEDINA
- UNA MASIVA MANIFESTACION ANTIDICTATORIAL OCUPA POR VARIAS HORAS EL CENTRO DE LA CAPITAL
- LA POLICIA ES SUPERADA, INTERVIENE EL EJERCITO, CON AMETRALLADORAS Y CARROS DE GUERRA
- HAY CIENTOS DE DETENIDOS Y DECENAS DE HERIDOS
- MILITARES FRENTISTAS SON ARRESTADOS
- LA HUELGA GENERAL RECUPERA POSICIONES

En las primeras horas, la dictadura cobra una nueva víctima. El joven Walter Medina, de 16 años, vendedor de diarios («canillita») y estudiante del Liceo Nocturno, es muerto a balazos cuando pintaba consignas contra la dictadura en un muro de Piedras Blancas. La bala entró por la espalda, sin orificio de salida. Su cuerpo llegó al Hospital Militar frío y desangrado.

A las cinco en punto de la tarde, pareció que todo el pueblo se había lanzado a la calle. Decenas de miles de montevideanos cubrieron la avenida 18 de Julio, en el centro de la ciudad. La asistencia superó los cálculos de los propios organizadores. Hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños, obreros, estudiantes, empleados, profesionales, amas de casa, jubilados. Todas

las edades y sectores sociales estaban representados.

En los balcones y ventanas de la zona, grupos de personas apretujadas aplaudían a los manifestantes. Se desplegaron numerosas banderas de los Treinta y Tres Orientales, con la consigna de *Libertad o Muerte*. También apareció un gran cartel con la sigla CNT. Simultáneamente, los obreros en las fábricas ocupadas hacían sonar las sirenas. «*Tiranos Temblad!*», fue el lema común coreado por todos los manifestantes.

Enseguida vino la represión. Buscaron una disolución inmediata de la multitud, pero no lo consiguieron. La gente se dispersaba y rápidamente se reagrupaba con nuevos bríos. La policía volvió a la carga con saña, se

oyeron muchos disparos, pero la concentración se mantenía y los manifestantes gritaban «¡Libertad! ¡Libertad!». Las fuerzas policiales están sorprendidas y superadas por el mar de gente que cubre la avenida.

Hombres y mujeres resistían impávidos las arremetidas de los carros anti-motín, los fuertes chorros de agua y los gases lacrimógenos. Un grupo de manifestantes consigue subir encima de un carro lanza-agua y desviar el chorro dirigido contra la gente. Cuando es evidente que la Policía ha sido desbordada, interviene el Ejército. Se oye el tableteo de ametralladoras, disparando sobre la cabeza de los manifestantes.

Al final, entraron en escena 15 carros blindados de asalto, armados con una ametralladora de grueso calibre. De esta forma consiguen desalojar finalmente a los manifestantes, todos los comercios son clausurados y el centro de la capital es declarado zona militar. A esa altura, no obstante, la demostración había alcanzado su propósito. Durante una hora, la multitud se adueñó del centro de la capital.

Los destrozos provocados por la represión en bares y comercios de la zona son cuantiosos. Aún después de finalizada la concentración popular, los transeúntes solitarios son perseguidos con la misma severidad. El diario *El Popular*, perteneciente al Partido Comunista, fue rodeado por el Ejército y baleado desde la calle. El

local es allanado más tarde y son detenidas todos sus ocupantes. Los daños aquí también son cuantiosos. Al final de la tarde, el edificio central de la Universidad y la Facultad de Medicina son nuevamente cercados por contingentes militares armados.

Los manifestantes detenidos suman unos centenares y son trasladados en cinco unidades del transporte colectivo. La información sobre los heridos, obtenida a través de los trabajadores de la salud, es la siguiente: Hospital de Clínicas, dos heridos leves; Sanatorio del Banco de Seguros, ocho heridos leves y uno con fractura de pierna expuesta, provocada por una granada; Centro Napolitano, un herido leve; Sanatorio del Sindicato Médico, cuatro heridos, uno de bala en una pierna; Médica Uruguaya, dos heridos leves y uno en estado de coma, con herida de bala en el cráneo; Hospital Británico, un herido grave en la cara. La información sobre los heridos trasladados al Hospital Militar no pudo ser obtenida.

Esa noche, un contingente de la Región Militar Nº 1 arrestó a Seregni y al general Víctor Licandro, también militar frentista, en la residencia del coronel Carlos Zufriategui, en el centro de la capital. «*Tengo a Zorro 1 y Zorro 2*», dijo el oficial a cargo del operativo, al comunicarse por radio con sus superiores. Los militares no percibieron a los miembros del Co-

mando de la CNT que se encontraban en el mismo lugar.

El coronel Zufriategui, secretario particular de Seregni, no estaba en su casa y pudo informar de lo sucedido a la Presidencia del Frente Amplio. Luego decidió presentarse a las autoridades militares. *«Mi jefe cayó en una parte de su lucha, yo debo estar a su lado»*, explicó. Los detenidos fueron llevados al comando de la Región Nº1 y después, en la madrugada siguiente, trasladados hacia la Región Nº4, en Minas.

«Turbas organizadas trataron hoy de dar una asonada en el centro de la ciudad», afirmó el Comunicado Nº 119, emitido al final de la jornada. En el mismo se informó que el diario *«El Popular»* había sido ocupado militarmente y detenidas alrededor de 100 personas en el local. Dos días más tarde, el ministro del Interior admitió a los periodistas que había dos policías y dos civiles heridos de bala por los hechos del lunes.

Como resultado de la actividad desplegada en el fin de semana y a lo largo de este día se ha producido una importante recuperación de la huelga general. En los lugares donde la actividad había comenzado a «normalizarse», la asistencia se redujo en forma significativa. La banca oficial y privada se mantuvieron paralizadas. Incluso en el transporte dio resultados el esfuerzo de los militantes para disminuir la actividad.

Para el día siguiente se prepara una paralización total, que incluya a los comercios de la capital. Sin embargo, la Federación de la Carne, gremio de los obreros frigoríficos, decide levantar la huelga.



Martes 10

- MILES DE PERSONAS EN EL SEPELIO DE WALTER MEDINA
- ASAMBLEA DE MEDICOS, CERCADA POR EL EJERCITO, RATIFICA DECISION DE ADHESION A LA HUELGA
- CENTRO DE LA CAPITAL ES DECLARADO ZONA MILITAR
- EL COMANDO DE LA CNT PROPONE EL LEVANTAMIENTO DE LA HUELGA GENERAL PERO, POR FALTA DE ACUERDO, NO SE LLEGA A LA VOTACION

El entierro de Walter Medina, en horas de la mañana, volvió a mostrar la disposición de lucha popular. A escasas horas de la manifestación del día anterior, miles de personas volvieron a salir a la calle, para acompañar los restos del canillita muerto, entonando el Himno Nacional.

«El general Seregni ha sido detenido por la dictadura. Una razón más para la lucha», expresa una declaración de la dirección del Frente Amplio. Y agrega: *«Junto a él, ni un paso atrás. Nada detendrá la rebeldía de un pueblo dispuesto a luchar por su liberación. La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio llama a todos a redoblar su militancia e incentivar la lucha por la libertad».*

La asamblea del Sindicato Médico, convocada a las 15 horas de este día, en la Facultad de Medicina, es

cercada por el Ejército, que impide el ingreso y la salida del local de cualquier persona. No obstante, con unos 500 médicos presentes en la facultad, la asamblea decidió, por unanimidad, *«que mantiene irrefutable su adhesión a los principios democrático-republicanos de gobierno, reafirmando su oposición a toda situación que conculque el orden institucional democrático-representativo».* Y, en conclusión, *«declara que mantiene el paro médico decretado en la Asamblea General del 27/6/73».* Cinco horas más tarde es levantado el cerco militar.

Desde las primeras horas de la tarde, la zona céntrica de Montevideo fue ocupada por el Ejército, con gran despliegue de armas, soldados y carros blindados. El propósito de la acción militar parece ser el disuadir cualquier intento de repetir la manifestación del lunes.

Esta noche se reúne la Mesa Representativa de la CNT, la segunda vez desde el golpe de Estado. En un balance de la situación, el comando concluye que la huelga general ha alcanzado sus objetivos fundamentales, al lograr desenmascarar a la dictadura y quitarle bases de apoyo social y político. La propuesta en consecuencia es que la huelga debe ser levantada antes de que sufra un desgaste mayor, para preservar las fuerzas del movimiento y seguir la lucha por otros caminos y métodos.

La propuesta del comando es cuestionada por varios integrantes de la mesa. Los representantes de FUNSA y la Salud, por la corriente en minoría, y la Federación OSE, miembro del Secretariado Ejecutivo de la central, alegan que la huelga general no puede ser levantada de esa manera.

En caso de optar por el levantamiento, consideran que se cuenta con fuerza como para liberar a los presos y obtener ciertas garantías mínimas, suspensión de despidos y represalias, respeto de otros derechos sindicales, etc.

Frente a las discrepancias existentes, la Mesa de la CNT no llega a la votación en esta reunión. Se acuerda realizar una tentativa de obtener las garantías señaladas, a través de una gestión encomendada al delegado de OSE, que desde el comienzo de la huelga tenía un canal de conversación

con el general Cristi. La sesión pasa a cuarto intermedio, hasta el día siguiente.

La información sobre la situación de la huelga que daban entonces el boletín de la Comisión de Montevideo de la CNT y *Noticias*, el homólogo del Sindicato Médico del Uruguay, es coincidente:

No hay diferencias sustanciales entre uno y otro boletín en cuanto a la situación de la huelga general en ese momento. Tampoco hubo divergencias en este aspecto en la reunión de la Mesa de la CNT de esa noche. Por lo tanto, era una evaluación política la que llevaba a proponer el levantamiento de la huelga. Pero, aún en el caso de admitir la necesidad o conveniencia de tomar esa decisión, ¿porqué hacerlo de esa manera, sin condiciones, no de gracia, sino exigidas con la fuerza del movimiento?



Miércoles 11

- LA MESA REPRESENTATIVA DE LA CNT LEVANTA, POR MAYORIA ABRUMADORA, LA HUELGA GENERAL
- DESCONCIERTO Y BRONCA EN VARIOS SECTORES
- ATENTADOS CONTRA COMITES DEL FRENTE AMPLIO
- MENSAJE DE RADOMIRO TOMIC A LIBER SEREGNI
- LLAMADO DE COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS
- DECLARACIONES DE REPUDIO AL GOLPE DESDE PERU
- LLEGAN MAS PRESOS Y TORTURADOS AL CILINDRO

Durante la mañana, entre militantes de los gremios textil y bancario circuló la versión de que el levantamiento de la huelga general había sido decidido en la noche del martes. Es más, sin estar formalmente aprobado aún, el Mensaje de la CNT a los Trabajadores Uruguayos, explicando los motivos del levantamiento, fue distribuido por miembros del Partido Comunista esta mañana en varios lugares ocupados.

La Mesa Representativa de la CNT se volvió a reunir al mediodía, en el sanatorio ocupado de IMPASA. No se agregaron elementos a la discusión del día anterior. No se informó sobre el resultado de la gestión encomendada al delegado de OSE. El Comando de la Huelga se limitó a repetir la propuesta de la víspera. Esta vez, los 27 integrantes

de la corriente mayoritaria votaron en bloque, sin dar mayores explicaciones.

«¡No hay que negociar con la dictadura!», expresó entonces Vladimir Turiansky, secretario de la Agrupación UTE, para justificar su voto por el levantamiento. Frase cargada de cinismo, porque ningún sector político o sindical había descartado la posibilidad de una negociación. Obviamente, negociación no entendida como claudicación, sino búsqueda de puntos en común a partir de posiciones de fuerza.

La Federación de la Bebida (FOEB) y el Sindicato de FUNSA votaron en contra. La Federación de la Salud (FUS) pidió una consulta a las bases pero, ante la votación, marcó su abstención. Los tres gremios mencionados y el Congreso Obrero Textil (COT) harían después un balance de

la huelga y las condiciones del levantamiento. La Mesa de la CNT decidió que el trabajo se reanudara a la 0 hora del jueves 12 de julio.

Pocas horas después de adoptada, la resolución de la CNT llegó a los sindicatos y a los lugares ocupados, donde se discutió inmediatamente en asambleas. En muchos centros de trabajo, sobre todo los más fogueados y combativos, la decisión levantó bronca y agudas resistencias. No obstante, se mantuvo la unidad y disciplina sindical. A esa altura sí que era suicida pretender detener o modificar esa resolución.

Las discusiones se prolongaron hasta el día siguiente, sobre todo en el interior, por la demora en la trasmisión de la resolución de la CNT. En la ciudad de Paysandú, el miércoles de tarde, se realizó una manifestación de unas cinco mil personas, fuertemente reprimida por la policía, con un saldo de más de cien detenciones. En este lugar, el conocimiento de la decisión de levantar la huelga produjo un desconcierto general.

El Frente Amplio denuncia tres atentados cometidos contra locales de sus comités de base. De acuerdo con la versión de los vecinos, los autores de los atentados llegaron en coches particulares, violentaron la entrada de los locales y después se dedicaron a destrozar e incendiar los muebles y otros elementos existentes en el lugar.

«Encarcelado por la dictadura es Usted ahora el mejor símbolo en la lucha del pueblo uruguayo por la democracia y la justicia. Para Ud. y el Frente Amplio mi admiración y mi solidaridad», expresa un cable enviado al general Seregni por Radomiro Tomic, dirigente del ala izquierda de la democracia cristiana chilena.

La Comisión Internacional de Juristas, organismo de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, hizo un llamado por el restablecimiento de la legalidad democrática en el Uruguay. *«La alternativa que se plantea hoy al Uruguay -afirma la comisión en su documento-, es la guerra civil y una represión brutal o el retorno a la democracia»*.

La Federación Médica de Perú, la Federación de Empleados Bancarios de Perú y la Confederación Sudamericana de Bancarios, envían expresiones de repudio al golpe de Estado y de solidaridad con los trabajadores uruguayos. Al mismo tiempo, hacen un llamado para que se amplie el apoyo internacional a la lucha antidictatorial.

Bordaberry cubre las vacantes en su gabinete: en Educación y Cultura, profesor Edmundo Narancio; en Industria y Comercio, Dr. José Etcheverry Stirling; en Obras Públicas, Ing. Eduardo Crispo Ayala; y en Salud Pública, Dr. Juan Bruno Iruleguy. La designación de Narancio fue un reconocimiento de su labor como redactor responsable de *«El País»* entre 1967 y

1973. En ese período, el matutino fue vocero de la ultraderecha, blanca, colorada y de cualquier color, hasta abrazar finalmente el golpismo.

Un comunicado emitido por la Junta de Comandantes en Jefe de las FF.AA. reitera su decisión de propiciar el cumplimiento de los objetivos trazados en los Comunicados 4 y 7.

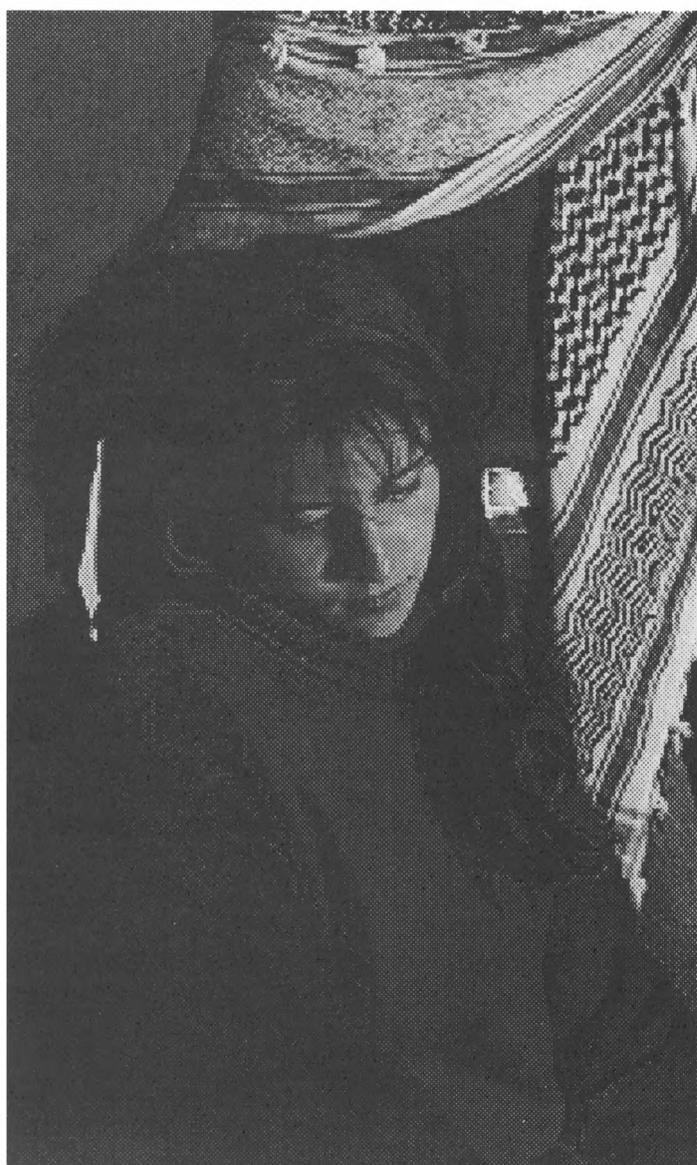
La declaración precisa, sin embargo, que las decisiones corren por cuenta de *«la civilidad»* (sic), que se mantendría al frente del país y cuyo respaldo asumen por entero las Fuerzas Armadas en las presentes circunstancias. De esta manera, los comandantes insisten en la imagen de un régimen civil con respaldo militar.

La prensa divulgó este día la noticia sobre el intento de mediación de los abogados Gelsi Bidart, Valdés Costa y Malet, sin explicar que el mismo había fracasado. Desde la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior se desmiente la existencia de cualquier tipo de acuerdo con los sectores laborales que se están reintegrando al trabajo.

El ministro del Interior declara ante la prensa que *«la reanudación del trabajo en todo el país no es un triunfo del Gobierno»*. Según Bolentini, *«los trabajadores han tomado esta resolución por ellos mismos, sin ningún tipo de presiones ni de condicionamientos»* (sic).

Mientras tanto, en el Cilindro Municipal está ingresando un promedio de 90 personas por día, algunos heridos incluso, como consecuencia de las torturas a que han sido sometidos. Los detenidos se agrupan por gremios para recibir las visitas de los familiares, de cinco minutos de duración. Ahora se duerme también en el suelo del estadio, la comida se reparte por igual entre todos y el agua sigue siendo escasa.





Tercera Parte

REFLEXIONES

El levantamiento de la Huelga General

La manifestación del 9 de julio en el centro de la capital, fue un hecho absolutamente inédito e impactante, tanto para sus observadores como para sus participantes, aunque las consecuencias políticas que se podían extraer de la misma no eran coincidentes. Fue la demostración más amplia posible, política y socialmente hablando, del repudio de la ciudadanía al golpe de Estado, pero fue también la confirmación de que no se crearían condiciones para impedir la consolidación del golpe militar. Para unos había que iniciar el repliegue más rápido y ordenado posible de las fuerzas que seguían desplegadas. Otros pensaron que era posible aún con éstas fuerzas obtener garantías mínimas para un levantamiento de la huelga en mejores condiciones.

El estado de la huelga general

En la noche del martes 10 de julio, cuando se reúne nuevamente la Mesa Representativa de la CNT, la información acerca de la situación de la huelga que reflejaban en ese momento los boletines de la Comisión de Montevideo de la CNT y «Noticias», del Sindicato Médico del Uruguay, fue la siguiente:

C.N.T. - Comisión de Montevideo
Boletín Nº10
10 de julio de 1973

LA SITUACION DE LA HUELGA

Transporte: Tanto en AMDET como en CUTCSA, sendas asambleas de trabajadores más firmes, resolvieron llegar al resto y llevar el transporte nuevamente a su situación tradicional en las luchas.

En MADERA, METAL, TEXTIL, CONSTRUCCION, INDUSTRIAS FRIGORIFICAS, BEBIDA, RADIO, ELECTRICIDAD, CUERO,

DULCE, GRAFICOS (excepto El País y La Mañana), etc., etc., firmes: ocupando sus fábricas o en huelga.

En las desocupaciones, en general no se constatan violencias físicas contra los ocupantes, pero en ALPARGATAS derribaron los dos enormes portales de la fábrica y los asaltantes de la fuente de trabajo paralizada se retiraron, con su botín de ropas y productos industriales de la firma.

Las zonas informan de contactos cada vez más frecuentes con oficiales de las tres armas, donde se discute la situación y probables salidas -muchas de estas entrevistas son con altos jefes.

LA HUELGA GENERAL DE RESISTENCIA A LA DICTADURA CONTINUA!»

Noticias - Nº 11

11 de julio de 1973

«MARCHA DE LA MOVILIZACION GENERAL

Fábricas: Informaciones llegadas el lunes de noche dan cuenta de numerosas fábricas y centros de trabajo ocupados o realizando otras medidas de lucha. La lista no es completa pero da idea de la extensión de la resistencia.

Ocupadas: Eternit, Cotisa, Oyama, Lapenur, Vesubio, Metalosa, Mopresa, Automotora Santa Rosa, Engraw, Sedafina, Iasa, Curtiembres de Maroñas (2), el resto sin trabajar, Inlasa, La Aurora, Musa, Fibratex, Ferrés, La Mundial, Acodike: asamblea mantuvo la ocupación, Electroweld.

Sin trabajar: Quimur, Maltería de La Paz, Cuopar, Sadil, Hytesa, La Popular, Duray, Sapriza, Tejidos Elásticos, Inca, Curtiembres de Belvedere y Nuevo París, Atma, Centro Metal, Siam, Ajax.

Se agrega a esta lista la información recibida ayer de noche, que confirma el mantenimiento del paro durante el día.

Ocupadas: Decovid, Barraca CAIE, Ardea, Fábrica Nal. de Envases, Grundel.

Sin trabajar: Jane, Phuasa, Cir, Lusa, Cristalerías del Uruguay, Suitex, Ultra, Martí, desalojada resolvió volver a ocupar, Curtiembre Montevideo, Funsá.

Sintéticos Slowak. Hubo un plebiscito publicado por televisión y radio que salió 70 a 50 por entrar a trabajar. Entraron, hicieron una asamblea y resolvieron ocupar. Es de destacar que la organización sindical en esta fábrica era de reciente formación y todavía muy débil en el momento de largarse la Huelga General.

Banca privada. La situación es muy buena. Se afirma la Huelga General en los bancos donde había aflojado; mediante asambleas se consigue que nadie entre a carnerear. A título de ejemplo para no citar a todos: el Mercantil, que por su situación (de intervenido) se tenía dudas sobre el éxito de la huelga, está funcionando con el 10% de su personal. En la mayoría de los bancos hay 5 o 6 personas trabajando.

Banca oficial. La situación mejora sensiblemente a la del viernes. Caja Nacional de Ahorros y Descuentos no abrió el lunes. En el Banco República se logró que gran parte de los que habían entrado el viernes, salieran el lunes.

Banco Hipotecario. Sigue sin variación, 40% de carneros.

Banco de Seguros. El día viernes la gran mayoría había entrado; mediante el trabajo de los militantes el día de ayer se habría sacado del banco la mayor parte del personal.

A.F.E. Hoy no corrieron los trenes.

F.U.S. Se mantienen todos los centros asistenciales ocupados, salvo uno o dos sanatorios en los que se aplican medidas de lucha. Permanecen detenidos 19 compañeros de diversas gremiales de la FUS. Ingresaron fuerzas represivas varias veces a varios centros asistenciales y en todos los casos la firmeza de los compañeros fue ejemplar. El nivel asistencial brindado se coordina siempre con los médicos y es excelente, dando garantías al pueblo de una buena asistencia mientras funcionarios y técnicos controlen los sanatorios y mutualistas.

Laboratorios farmacéuticos. Hoy seguían firmes compañeros de Dispert, Gramón pese a ser desalojados tres veces, Liofil, Hayman y otros. Otros laboratorios como Roche, Warner y Rhodia que trabaja con mayoría de personal amarillo, comandado por elementos del IUES y embajada americana no han cumplido ninguna medida solidaria.»

No hay diferencias sustanciales entre uno y otro boletín en cuanto a la situación de la huelga general en ese momento. Tampoco hubo divergencias en este aspecto en la reunión de la Mesa de la CNT de esa noche. Por lo tanto, era una evaluación política la que llevaba a proponer el levantamiento de la huelga. Pero, aún en el caso de admitir la necesidad o conveniencia de tomar esa decisión, ¿porqué hacerlo de esa manera, sin condiciones? Este fue el debate que se produjo en la dirección sindical.

Salida propuesta por las tres F

En esa ocasión, una vez realizada la propuesta del Comando de la CNT de levantar la huelga general, la Federación de la Bebida, La Federación de la Salud y el Sindicato de Funsu (conocidos como las Tres F), integrantes de la tendencia minoritaria en la dirección de la CNT, presentaron por escrito las denominadas «Bases de salida de la Huelga General».

«Sean cuales sean las resoluciones que se adopten con respecto a las medidas de lucha, esas resoluciones deben garantizar que no se concede a la dictadura una tregua para recomponer sus fuerzas y lanzarlas nuevamente contra el pueblo; que no se procede a una legitimación de la dictadura que desconoció todas las expresiones de la voluntad popular; y que, por el contrario, se asegura la continuidad de la lucha contra la dictadura», decía el documento de las Tres F en el primer párrafo.

Y agregaba, más adelante: «Mientras los decretos del dictador ponen al gobierno al servicio de los empresarios, facultándolos para destruir las organizaciones sindicales mediante despidos represivos, las declaraciones reiteran el criterio de que las FF.AA. no serán el brazo armado de intereses económicos o políticos.

Para que estas declaraciones se transformen en hechos es necesario proceder a dar garantías de que: 1) se anulará el monstruoso decreto del 4 de julio que transforma a los empresarios en fuerzas de represión contra los sindicatos; 2) se asegurará el libre funcionamiento de todos los locales sindicales y la recuperación de los bienes correspondientes; 3) se anulará el decreto que declara ilícita a la CNT y que requirió a sus dirigentes como si hubieran cometido delito; 4) se dispondrá la libertad de los detenidos por razones políticas o sindicales con posterioridad al 27 de junio de 1973; 5) se restablecerá la libertad de prensa e información; y 6) se reconocerán los derechos de las organizaciones y los partidos políticos consagrados en la Constitución de la República».

Ya que esta era la primera reunión de la Mesa desde la designación del Comando de Huelga, la propuesta de las Tres F concluía con cinco preguntas dirigidas a la dirección ejecutiva de la CNT:

- ¿Por qué en las entrevistas con el ministro Bolentini no se reclamó nunca el cese de Bordaberry, posición definida por la CNT antes del golpe de Estado y aprobada por cientos de miles de trabajadores en todas las jornadas de lucha realizadas desde febrero en adelante?

- ¿Cuáles fueron las razones para que los sindicatos levantara la huelga general en el transporte, en el puerto, en la carne, en municipales, en AFE, en la administración central, etc?

- ¿Si la huelga general no fue formalmente levantada en algunos de estos lugares por el propio sindicato, qué ha hecho éste para reintegrar a los trabajadores al cumplimiento de la huelga?

- ¿En qué casos de los mencionados u otros el Comando de la CNT concedió autorizaciones para que se levantara el estado de huelga?

- ¿Cuál fue la posición adoptada por la Federación Ancap y el Comando de la CNT con respecto a la posibilidad de no entregar combustibles mediante la mezcla de crudos y refinado?

Ninguna de estas preguntas tuvo respuesta formal, nunca.

En esta reunión de la Mesa no se tomó la decisión de levantamiento, no tanto porque no hubiera los votos necesarios, sino porque algunos representantes sindicales de la tendencia mayoritaria, inclusive miembros del Secretariado de la CNT, no apoyaron la propuesta.

El levantamiento inevitable

«Entre los militantes sindicales del Partido Comunista hubo distintas expectativas en cuanto a las posibilidades del golpe y la huelga, que eran continuación de las polémicas internas surgidas en la crisis de febrero», explica Luis Iguini. Según el ex-dirigente de la CNT, al comienzo de la huelga algunos altos dirigentes tuvieron la ilusión de que los sindicatos pudieran llegar a un acuerdo con los mandos militares, pero al final concluyeron que no se podía salir de la huelga con una negociación.

Iguini explica así la abrumadora mayoría en la reunión del miércoles 11 para levantar la huelga sin condiciones. Sin embargo, el tiempo entre una y otra reunión de la Mesa se dedicó a convencer a los «comunistas rebeldes». En la

votación se criticó a la minoría por cifrar expectativas falsas en los militares. Los que votaron contra el levantamiento de la huelga realmente creían que el movimiento tenía fuerzas para imponer algunas condiciones como, por ejemplo, la liberación de los presos.

Iguini estima que, a esa altura, la huelga general se había debilitado mucho, sobre todo por lo sucedido en el transporte y en la administración pública, y mantenerla ponía en riesgo la continuidad del movimiento. Juan Angel Toledo, integrante de la delegación textil, dice que su propio gremio se encontraba en condiciones difíciles para seguir aplicando la decisión de la CNT. En dos fábricas importantes, ILDU y FIBRATEx, se había vuelto a trabajar y la noticia impactó al resto del gremio.

En cuanto a la situación general, Toledo señala que la huelga se había desmoronado en sectores claves e intentar continuar, inclusive para tratar de negociar las condiciones de salida de la misma, hubiera traído como consecuencia una disolución progresiva de la resistencia, con efectos más graves aún de los que se produjeron en los gremios y sus militantes, como resultado de la ola de persecuciones y represalias agudizada en numerosos lugares tras el levantamiento de la huelga general.

«A la altura en que fue levantada, sea por errores de conducción o por falta de condiciones, no había otro recurso», afirma Héctor Rodríguez. «No había negociaciones en curso, continuar la huelga general era imposible», dice Víctor Semproni, coordinador sindical de la Corriente. «No se podía prolongar indefinidamente, gremios importantes la habían levantado, no se podía continuar», opina hoy un ex-dirigente de la FUS, si bien aclara que la salud sólo lo hizo después de la decisión de la CNT.

Luis Romero mantiene hasta hoy la posición de entonces. «Entendíamos que por libertades públicas, el reconocimiento de la CNT y la liberación de los presos, era posible seguir peleando, aún con la fuerza de la actividad privada, donde la huelga seguía firme», expresa. Tal vez para entender esta posición deba recordarse la combatividad especial de los trabajadores de Funsa que, levantada la huelga por la CNT, dijeron que no volvían a trabajar con compañeros presos y, solos, lo consiguieron.

Reflexiones de hoy, por el ayer y el mañana

A lo largo de las entrevistas, surgieron muchas reflexiones. Algunas entraron directamente en los relatos y otras quedaron afuera. A veces era el fragmento imperceptible de una frase, que se convertía después en un fogonazo, la síntesis del sentimiento y las ideas de su autor. Por eso nos pareció útil reunir las y brindarlas todas juntas aquí:

Antonio Adourrián - "En sectores más radicales de la izquierda se dio la discusión de hacer todo lo posible en la huelga general, pero ya faltaba la decisión y la organización de los años anteriores. En realidad, muy pocos creían que ese momento llegaría algún día y luego cuando llegó se cuidaron demasiado. Se tiraron algunos 'miguelitos', pero no dio para nada".

Daniel Baldasari - "No fuimos consecuentes (los comunistas) con ciertas cuestiones básicas de la historia del país. Influenciaron otras experiencias, como las de Bolivia, Perú, etc. Perdimos de vista que la ciudadanía uruguaya tenía un acuerdo en sostener la legalidad (determinadas reglas de juego) y las instituciones democráticas. Para mí lo principal no es si la información sobre la correlación interna de las Fuerzas Armadas era correcta, sino la defensa de determinadas conquistas democráticas del pueblo uruguayo. La huelga general condensó todas las luchas populares de aquellos años, pero expresó asimismo lo mejor de la herencia de los partidos tradicionales, lo mejor de las tradiciones democráticas del Uruguay".

Hugo Batalla - "Nadie estaba preparado para el golpe ... el golpe de Estado le dio a los militares una visión del país que hasta ese momento no tenían ... Había una marginación de toda la estructura militar de lo que era realmente el país y, sobre todo, su estructura política ... suponían que los políticos eran unos seres malévolos, que escondían la botella de «whisky», las mujeres y a los ladrones".

debajo de la mesa ...Y lo peor de los gobiernos militares son los civiles que los rodean, oportunistas ... individuos que pretenden obtener por medio del golpe lo que serían absolutamente incapaces de conseguir en un régimen democrático ... Más allá de que se pueda decir que tuvo defectos de instrumentación y demás la huelga general tuvo una heroicidad que no tuvo el sistema político del país, el movimiento sindical dio una batalla que debió haber dado el movimiento político... todos los partidos políticos, inclusive el Frente Amplio, habían perdido capacidad de convocatoria»

Jorge Batlle - «No digo que me haya sorprendido, pero conmovió mucho mi manera de apreciar las cosas del pasado una declaración ... a comienzos de 1992, en donde un dirigente del Partido Comunista denunciaba la existencia de un formidable aparato armado ... Cuando los militares nos decían las cosas que nos decían, realmente no creíamos, pero resultó que era todo verdad, era mucho más ... El Uruguay necesitaba un cambio muy profundo para revitalizar el sistema político y ese cambio no se logró a través de los instrumentos institucionales votados en 1965, porque debió ser seguido de una acción ... todo el sistema político estaba muy debilitado y quedó al alcance de ser volteado, eso lo percibió también el movimiento sedicioso ... no fuimos capaces de ofrecer caminos nuevos y esos caminos iban en contra de lo que los uruguayos habían tenido en los últimos 50 años como las mejores soluciones de vida, no se podía darles más Estado ... hay que hacer cambios, y mientras la gente no se convenza de que hay que hacer cambios y en qué sentido hay que hacerlos, la sociedad puede deteriorarse y, si la sociedad se deteriora, en un contexto internacional favorable, el riesgo de volver a una situación similar puede repetirse».

Eugenio Bentaberry - «La huelga general no consiguió lo perseguido pero, por lo menos, las Fuerzas Armadas no tuvieron la impunidad de dar un golpe sin que pasara nada. No les permitió crear una base política para sobrevivir ...La juventud que resistió al final a la dictadura, esta juventud eran niños que iban a la escuela en el 73. ¿De dónde sacaron esa conciencia? Lo habían cosechado en su casa, de sus padres, y así salieron después».

Leopoldo Bruera - «Contribuimos a que se consideraran (los Comunicados 4 y 7) algo positivo sí, pero ahora qué? ¿Para qué sirve insistir con ésto? Esta es una polémica que fastidió a la izquierda. A mí no me interesa, en ésto no me meto. La historia mostró que no ganamos, ¿ahora qué vamos a decir?. En América Latina, en Uruguay, la olla estaba muy caliente ...»

Gerónimo Cardoso - "El famoso 'apoliticismo' de las Fuerzas Armadas es la mejor manera de politizarlas, para que en las crisis se inclinen en favor de los factores de poder. Por eso, la concepción democrática debe ser la del 'militar ciudadano', que distingue entre su función profesional y el ejercicio de todos los derechos políticos en tanto individuo. Es lo que se aplicó, por ejemplo, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial".

José Pedro Cardoso - "Tengo presente las discusiones y juicios enconados de entonces ... comprendo las posiciones adversas, pero comprendo también la responsabilidad de los que tomaron las decisiones ... por encima de nuestras diferencias tácticas, sigo pensando que la huelga general en aquel momento fue una acción que colocó a la clase obrera a la vanguardia de la lucha por la defensa de las libertades y la democracia".

Pablo Carlevaro - "La huelga general empieza como expresión de fuerza que va decayendo porque no está acompañada de otros elementos. Hubo sectores que no quisieron profundizar y, sobre todo, faltó una capacidad de respuesta militar, que le diera mayor apoyo ... la respuesta de la huelga general, de la Universidad y la resistencia ciudadana, expresada el 9 de julio, también la de partidos alejados de la resistencia, pero fieles a su postura democrática, está en la base de la resistencia ulterior".

Hugo Cores - "El viraje del Partido Comunista (en febrero del 73) trastocó al conjunto de alianzas del sistema político tradicional ... Hubo limitaciones desde la partida, como la de apoyar una medida tan grave (la huelga general) con una dirección sindical en la que no se creía ... pero hubiera sido mucho más negativo no responder. Hay batallas que hay que darlas, aunque no se puedan ganar ... Lo contrario, hubiera sido una pérdida de identidad. La huelga general se perdió y no fue madre de derrotas, sino de dignidad, influyó en la reconstrucción de la CNT y el Frente Amplio ... el triunfalismo, sobre todo, impide encontrar los caminos de la victoria, aunque el derrotismo también ... en los años 84 y 85, hubiera sido más fácil decir la verdad, un hecho como la huelga general es demasiado auténtico como para cubrirlo con cualquier manto ...".

José D'Elía - "Los partidos tradicionales quedaron paralizados. El mito de la democracia era muy fuerte y actuaron con cierta ingenuidad. Pensaron que en este país no podía haber una dictadura, que el golpe de Estado se había dado para disolver el Parlamento y llamar a elecciones. Por eso no se avinieron a actuar

en conjunto con los sindicatos. Planteamos una acción común con los blancos, pero no hubo un compromiso mayor».

Salvador Escobar - "Triste y lamentablemente, nosotros (comunistas) no discutimos el tema de la huelga general después, ni hasta el día de hoy. No para sacarle la cabeza a nadie, pero para algo hemos querido transformar la sociedad. Con aciertos y errores debimos discutir, para sacar enseñanzas y experiencias para el futuro. Dentro del partido había sectores que no creían que fuera posible el golpe, creían que seguía siendo el Uruguay de siempre. Esto influyó para que no se preparara bien la huelga general".

Eleuterio Fernández Huidobro - «El plan antigolpista del 71 quedó archivado el mismo día de las elecciones, porque todo plan militar que se ha puesto en marcha llega a ser conocido por miles de personas y no puede volverse a repetir. En el momento histórico del pueblo uruguayo, en junio de 1973, toda la dirección del MLN estaba presa en el Penal de Libertad ... si no se producía alguna división militar o entraba en acción el aparato armado del Partido Comunista, la huelga general estaba condenada al fracaso ».

Francisco Forteza - "Los golpistas) no eran blancos, eran verdes ... Los hechos de febrero de 1973 confirmaron la confianza depositada en la Armada y en su Comandante en Jefe ... En ningún momento el presidente Bordaberry estuvo dispuesto a renunciar. De haber ocurrido, hubiera sido sustituido por el vicepresidente, Sr. Sapelli, entre otras razones porque estimamos que a esa fecha los militares no se sentían aún en condiciones de detentar abiertamente el Gobierno"

Adolfo Gelsi Bidart - "Hay instantes en que la palabra la tiene la fuerza. Había una gran descoordinación entre lo sindical y lo político. No se vio que hubiera una respuesta general para un problema general. La democracia es muy frágil, depende sólo de la conciencia de los ciudadanos".

Ernesto Goggi - "Aunque seamos críticos de la forma cómo son usadas, en muchos casos, las instituciones democráticas, no podemos debilitarlas al punto de facilitar la instalación de una dictadura".

Federico Gomensoro - «En la huelga general, la voluntad de los trabajadores no se pudo expresar con la fuerza necesaria por falta de preparación, más

allá de fue un fenómeno muy complejo, sobre todo en el transporte y Ancap ... la unidad, el proceso de madurez del movimiento sindical uruguayo hizo posible esta respuesta muy original; la gente se plegó naturalmente, fue una resistencia civil con características no comunes en la historia, aunque no se logró ampliar suficientemente ... desde el movimiento sindical se hizo lo que había que hacer, pero era desde otros sectores políticos, etc., que debía partir la posibilidad de detener o frenar el golpe de Estado».

Washington Hourcade - «Se podía decir que todo el país estaba en contra, pero no existió esa unanimidad. Faltó un liderazgo que proviniera de diferentes sectores y que pudiera agrupar a todos ... Mi experiencia en la Revolución de enero del 35 (intento de levantamiento armado contra la dictadura de Gabriel Terra, con la participación de diferentes sectores políticos) fue muy diferente. En aquel momento, todo el mundo estaba realmente comprometido y aportaba su parte ... En 1973 estábamos todos dispersos; no había pasta, gente, nada para hacer una revolución».

Ignacio Huguet - «Febrero de 1973 fue, a mi juicio, el momento en que el movimiento sindical perdió la brújula. Me considero corresponsable de ello. Era un momento difícil, las licencias anuales, la novelería del 'peruanismo', el odio contra Bordaberry. Pero estábamos frente a un evidente golpe militar, los tanques estaban en la calle contra el gobierno del país, gustara o no».

Luis Iguiní - «Al comienzo de la huelga general, entre dirigentes de la CNT existió la ilusión de poder llegar a algún acuerdo con los militares ... pero al ver que eso no era posible, se entendió que la huelga general había que levantarla sin condiciones ... porque de lo contrario quedaría en el aire la expectativa o la impresión de que algo se podía negociar»

Alvaro Jaume - «En ese momento, la vivencia era de que si dábamos una respuesta de confrontación existían chances de cambiar lo que estaba en curso. Se dudaba más de las políticas de freno en el movimiento que de la fuerza del enemigo ... Hoy creo que, en el momento del levantamiento, la huelga general no tenía condiciones para proseguir, un conflicto de tamaña envergadura necesita de una gran unidad interna. No había un suficiente apoyo de masas, pero fue un testimonio de que había sectores del pueblo con otra disposición. Es preferible un gesto de lucha que el silencio, la pasividad habría sido caótica ... no me olvidaré más de la manifestación del 9 de julio, son muestras de

resistencia y de fuerza que la gente saca de abajo de la tierra. No sé si será posible repetirlo»

Raúl Lago - «Los dirigentes políticos de entonces estaban muy lejos de los militares ... No había en realidad dentro de los militares sectores afines al «peruanismo» ... El sistema político estaba completamente trabado. Había un desgaste muy grande, no se podían encontrar acuerdos ... Cuando no se pueden compartir responsabilidades, ni encontrar consensos, se caen las esperanzas en el sistema político ... La reacción de la gente en la huelga general desbordó las expectativas de todos los sectores, incluso los que llamaron a resistir, pero no se podía ir más lejos ... La izquierda estaba comprometida, los partidos sin capacidad de convocatoria, el desenlace era inevitable ... Los militares tenían un espíritu de cuerpo muy sólido, lo contrario de lo que sucedía en la sociedad civil»

Jorge Landinelli - «En su momento, entender que la huelga general era una medida en un proceso (la Universidad conservaba su autonomía, los partidos no ilegalizados, etc.) no era tan disparatada ... La idea de que las Fuerzas Armadas se podían fracturar persistió después de la huelga general. No se percibió el control existente dentro de las Fuerzas Armadas ni la situación de los partidos tradicionales ... Muchos pensaron que no les tocaba, adoptaron una actitud de prescindencia. Aquí también los militares hicieron su trabajo de inteligencia, hubo ingenuidad de varios lados ...»

Víctor Licandro - «La reacción de algunas fuerzas políticas de los partidos Colorado y Nacional fue tardía, y otros estaban de acuerdo. Ferreira Aldunate reaccionó tarde. Hubo una omisión muy grande del Parlamento frente a las insubordinaciones de las Fuerzas Armadas. No se informó claramente al país lo que estaba sucediendo con las instituciones. El Frente Amplio señaló las responsabilidades de Bordaberry y ésto tal vez confundió, porque no era un apoyo a las Fuerzas Armadas. Los ex militares que nos integramos al Frente Amplio no nos confundimos ante el plan de los golpistas. Sí fue una sorpresa, por la visión que tenía de la forma de ser de nuestro pueblo y de las Fuerzas Armadas, la extensión y la dureza de la dictadura.

Samuel Lichtensztejn - «Había una gran disgregación de la sociedad, que estaba completamente polarizada, cada uno tenía su camiseta puesta ... Casi todos los partidos, las propias organizaciones sociales, buscaban más las diferencias que los puntos en común ... Cuando llega la dictadura, se enfrenta a

una sociedad sin puntos de unión, juzgándose unos a otros sectores entre sí ... No había flexibilidad ninguna y esto hacía muy difícil llegar a mínimos acuerdos de sentido político y humano muy simples».

Antonio Marchesano - «Hasta último momento se creía que «esto no puede ocurrir», «aquí no va a pasar nada» ... Bordaberry y las Fuerzas Armadas marchaban al margen de la clase política ... Se había creado un estado policial, los movimientos eran muy difíciles ... No había clima para hacer nada ... el país, la clase dirigente no conocía un régimen de facto ... nadie tenía espíritu conspirativo. El sistema político uruguayo se basaba en un permanente espíritu de negociación, no se conocían situaciones sin salida ... esa actitud fructificó recién en 1981, luego del plebiscito del 80 ... al mismo tiempo, se dio una respuesta muy coherente de todos los políticos, cuando se planteó presentarse para levantar la proscripción, no se presentó nadie, sin que hubiera habido ninguna concertación previa».

José Luis Massera - «Recuerdo que Rodolfo Ghioldi, dirigente histórico del Partido Comunista argentino, en un viaje que hice a Buenos Aires, me dijo que no conocía un caso semejante en la historia del movimiento obrero internacional, de una huelga concientemente política que durara tantos días como la de Uruguay ... Había una buena dosis de ingenuidad. (En el Partido Comunista), no teníamos un cuadro objetivo de la situación».

Luz de Fuentes de Osimani - «El pueblo quería estar en todos lados. La huelga general no la tomé como algo capaz de parar el golpe, pero fue una forma de expresar que el pueblo estaba en contra de la dictadura».

Carlos Partelli - «Nuestro país es en gran medida privilegiado, hay una base para ver con optimismo el futuro, un pueblo honesto, sensible. Nuestro país fue arrastrado por otras fuerzas. Tenemos que preservar el valor del orden institucional, de la democracia. Apreciar lo que es valioso y jugarse por esos valores. La Patria la hacemos todos o se va a pique. Es necesario forjar un sistema de convivencia en donde haya justicia, que lo que tengamos alcance para todos».

Carlos Julio Pereyra - «Si puede repetirse o no aquella lamentable experiencia depende de muchos factores, pero no debemos formular afirmaciones rotundas en uno u otro sentido, en razón de la experiencia que ya vivimos ... Creo que, en este momento, no existe intención ni aspiraciones golpistas en el seno

de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no deben dejarse prosperar climas o realidades que puedan degenerar en situaciones de desprestigio del régimen democrático. Las violaciones, aunque no sean profundas, de la Constitución; las dificultades reales o creadas para el buen funcionamiento de los gobiernos surgidos de elecciones populares; la falta de soluciones efectivas a los problemas económicos y sociales, pueden ir creando el descreimiento -primero en los políticos y luego en el sistema- que pueden generar situaciones de desesperanza o desesperación, de las que puedan surgir aquellos que, en esas circunstancias, pueden aparecer como los «salvadores» u hombres providenciales».

Jaime Pérez - «Con la situación generada en el país a partir del 14 de abril de 1972, que facilitó la declaración del 'estado de guerra interna' y luego la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado, se generaron los elementos de vulneración de la legalidad democrática ... Surge una interrogante, ¿hubiera habido golpe sin la acción del MLN? La posición del Partido Comunista no fue producto de mala información, sino del desconocimiento de cómo funciona el Ejército, de cuál es la mentalidad de los militares. En general, para ellos la vida es blanco o negro. Después lo tuve que aprender en carne propia. En diez años de prisión, tendría que ser más que burro para no entenderlo. Esto no quiere decir que hoy tenga un sentimiento antimilitarista, es una profesión entre otras. Aquello de que sean 'el baluarte de la libertad y la democracia' no se compadece con la experiencia de la vida. Hay casos excepcionales ... en Uruguay, el único ejemplo es Artigas y, en la época moderna, Seregni. Esto no significa que no haya civiles cuya cabeza funciona también en blanco y negro. La formación militar facilita esta conformación mental.»

Américo Plá Rodríguez - «Hubo quienes pensaron que el factor de mayor desequilibrio eran las actitudes de Erro y que resolviendo este problema no pasaría nada. Pero ésto era una ilusión, el senador Washington Beltrán, con una postura conservadora, votó contra el desafuero de Erro. No podía haber arreglo, los militares no contaban con la posibilidad de un acuerdo político ... La expectativa generada dentro de la izquierda en torno a los militares fue una novelería comunista. Yo era totalmente escéptico, la experiencia me decía que no iban a retroceder.»

Mario Plasencia - «Tal vez en febrero hubo una apreciación excesivamente optimista pero, teniendo en cuenta las tradiciones civilistas del país, había una preocupación en las Fuerzas Armadas sobre para dónde iba el país. Las Fuerzas

Armadas participaban también de esas tradiciones del país ... La huelga general no estuvo al margen del proceso de identidad política del Uruguay, es algo más que haber defendido una posición, es haber cumplido con el país, con las instituciones, como parte del pueblo ... Más allá de que se hubieran conseguido otros apoyos sociales y políticos, la derrota de la huelga estuvo determinada por su carácter civilista, frente al hecho militar».

Eduardo Platero - «Como la huelga general no era insurreccional, se podría haber levantado al segundo o tercer día, pero ahí las masas nos contaban ... Había determinados umbrales que no podíamos traspasar ... Se actuó en el marco de esa lógica ... En cambio, si no la levantábamos el 12 de julio, las masas nos pasaban por arriba ... La gente nos agradeció la orden ... el Partido Comunista tenía un gran control del sentimiento de las masas».

Horacio Polla - «La resistencia inmediata al golpe tuvo una repercusión a largo plazo. La gente no estaba dormida y fue conciente de que sucedió algo en el escenario nacional con lo que no estaba de acuerdo. La paralización de la huelga, sin la manifestación del 9 de julio, pudo quedar como algo aislado. Superado, ese momento tuvo un efecto positivo, sirvió para abrimos los ojos y aleccionarnos en que deberíamos ser muy tenaces».

Héctor Rodríguez - «Al principio, la unanimidad de la huelga general obligó a los que tenían el poder a negociar ... nunca se concibió a la huelga general como una huelga insurreccional, para cambiar el régimen político-social en el país ... bien conducida, hubiera logrado una diferenciación o negociación que, por lo menos, definiera un plazo para el restablecimiento de las instituciones democráticas, en los términos colocados por el Frente Amplio y el Partido Nacional ... la huelga general fue muy pasiva, salió poco a la calle, y ésto tuvo que ver con el estilo de conducción, salir a la calle significaba choques y problemas difíciles de controlar».

Matilde Rodríguez Larreta - «Me parece que valió aquello de Unamuno, de que «no era tan malo el gobierno como la oposición». Se dividió la oposición ahí, hubo mucha gente que se embolsó con los militares. Hubo un período de gran confusión entre febrero y junio, la oposición no encontró un consenso lucido para enfrentar la situación ... La vivencia era que había -y es peligroso porque de alguna manera lo estamos repitiendo- un gran desprestigio del sistema político y del Parlamento ... De alguna manera todos nos habíamos embalsado ... lo

repetíamos en aquel momento: que «la democracia está en decadencia», que «las garantías formales no sirven para nada» ... Luego que faltaron nos dimos cuenta de que sí importaban ».

Luis Romero - «Nunca estuvimos preparados para una huelga general, para dar un enfrentamiento con esas características, de contenido político. Fue una carencia general, con mayor responsabilidad de algunos, los que eran mayoritarios ... La huelga general dejó importantes lecciones, dejó una rebeldía en los jóvenes, que después se organizaron para enfrentar a la dictadura, que permitió crear el PIT y reorganizar el movimiento sindical ... Lo que nunca saldamos fue la deuda de hacer el análisis de la huelga sin el dogmatismo de querer tener siempre razón ... A pesar de haber hablado tanto de la huelga general, no se trabajó para eso, no se creía que podía llegar ese momento ... Quedó un saldo negativo, al no haberse analizado, no se lo ve como un instrumento de lucha hoy, por otros motivos. Esta es la secuela negativa que nos quedó, como un tabú de la huelga general».

Victor Semproni - «Yo entendí que la huelga general hubo que aplicarla en febrero, pero la madurez y la conciencia fue mayor en junio, tanto que en este momento se largó sin discusión. La huelga general hirió de muerte a la dictadura, porque predispuso al pueblo contra el golpe, pero cambiar el curso de los acontecimientos a esa altura no era posible».

Líber Seregni - «Hubo un desarme, una aquiescencia del Parlamento, como cuerpo, una entrega, una resignación de las fuerzas políticas. Se sabía que no podía haber una resistencia armada. La estrategia de la resistencia tenía que ser defensiva, pero no importaban sólo las fuerzas de ese momento, sino para el futuro. La decisión de la huelga general fue como la decisión del voto en blanco -en las elecciones para designar las autoridades de los partidos políticos, en 1982, con la dictadura. Hitos distintivos de la voluntad popular y del Frente Amplio, que permitieron que seamos hoy lo que somos».

Jorge Suárez - «Para mi la crisis de febrero fue igual al «Tacnazo» en Chile, una prueba del plan militar y de sus posibles reacciones, antes de dar el golpe definitivo ... en el momento del golpe, en lugar de aplicar el plan, la orden fue de «esperar» ... estábamos en huelga pero no sabíamos por qué ... nunca se quiso discutir lo que había pasado ... en el XXI Congreso del PCU, en 1988, hubo una moción sobre la huelga que, más allá de considerarla un acto heroico de

resistencia, reconocía su derrota como tentativa de frenar el golpe militar, pero fue rechazada por amplia mayoría»

Juan Angel Toledo - «Del exilio, volví (en 1985) más sectario que nunca ... se cometieron errores graves (en el movimiento sindical, cuando se produce la fusión PIT-CNT) ... Toledo sufrió un proceso de cambio y sus reflexiones son ahora bastante diferentes: «El golpe no había sido en febrero del 73? Por las razones y las condiciones, febrero del 73 o agosto del 68, cuando la muerte de Liber Arce, hubieran sido un momento más coherente para la CNT y más apropiado para la huelga general. ¿Cuál habría sido su resultado? Sobre esto obviamente no puedo hablar, no soy adivino ...»

Amilcar Vasconcellos - «Lo más grave del hecho es que, por segunda vez en el transcurrir del siglo, eran abatidas las instituciones y la indiferencia con que el pueblo vio caer al Parlamento y a la organización democrática. Lo lamentable es que existen sectores de opinión con 'saudades' de esos tiempos y sus procedimientos. La lección es que hay que estar ALERTAS».

Alembert Vaz - «Existía una confianza ciega en el civilismo del país, el golpe militar tomó de sorpresa a todo el mundo. Fue una ingenuidad nuestra, un error terrible. Nosotros teníamos muy poco conocimiento de las Fuerzas Armadas. En aquella época, partidos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad eran compartimientos estancos. La dirigencia política del país no se vendió, la resistencia fue creciendo hasta llegar al 80. La sociedad civil hoy es mucho más permeable que antes del golpe militar».

Eduardo Viera - «La posición del Partido Comunista fue justa, más allá de que algunas apreciaciones del momento, algunas frases trasmitiesen algún contenido ilusorio. El vaciamiento de las instituciones era tal que apoyar a Bordaberry era defender a 'la rosca', por eso discrepamos con la posición de Quijano en MARCHA, diferente a la de la CNT y del Frente Amplio. Quizás se tendría que haber planteado con más agudeza el tema de las libertades pero la política, en lo fundamental, estuvo bien».

Ruben Villaverde - «La huelga general fue un acto heroico de resistencia, pero no se puede hablar de victoria. En todos estos años, nadie me preguntó que había pasado en las conversaciones con Cristi. Sirve volver a hablar de esos hechos, pero no para repetir simples visiones apologeticas».

Hasta aquí el relato, las historias y reflexiones de este conjunto de protagonistas de los sucesos de junio y julio de 1973. Como decíamos al comienzo, nos propusimos reconstruir algunos hechos y abrir un debate fructífero entre todos, porque todos estuvimos y estamos involucrados.

Ahora, la palabra la tienen ustedes.





Impreso en forma cooperativa en los talleres gráficos de *Edinor-Comunidad del Sur*,
Av. Millán 4113, tel. 35 56 09, fax: 38 16 40, 12900 Montevideo, Uruguay. Invierno de 1993.
Edición amparada en el art. 79 de la Ley 13.349 (Com. de Papel) Depósito Legal: 285.978/93.

...viene de primer solapa

En 1990 y 1991, redactor de la agencia española *EFE*, en Río de Janeiro. En 1991 y 1992, redactor y jefe de redacción de la "*Guía del Mundo*" 1993/1994", publicada por el Instituto del Tercer Mundo (ITeM), de Uruguay. En la actualidad es jefe de redacción de la "*Revista del Sur*" y del boletín "*Tercer Mundo Económico*", editados por la misma institución.

Otros trabajos

- "*Geopolítica, Conflictos fronterizos y Guerras locales en América Latina*", publicado en "*Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana*", del primer semestre de 1984 (Cuadernos Semestrales del Instituto de Estudio de Estados Unidos, del CIDE, de México) y en la revista del *CIDOBd*: "*Afers Internacionals*" de Barcelona, España, en el verano de 1984.
- "*El desmoronamiento político de un Ejército: la Guardia Nacional Somocista*", seleccionado entre los diez mejores trabajos del Primer Certamen Latinoamericano de Ensayo Político sobre "Las Fuerzas Armadas y la Democracia", organizado por la revista "Nueva Sociedad" de Caracas, Venezuela, publicado en su No. 81, de enero / febrero de 1986.
- "*Cuba: ¿Quién perdió el juicio'?"*, un análisis de los procesos de La Habana contra un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de ese país, publicado en "Nueva Sociedad", No. 104, de noviembre diciembre de 1989.

Instituto del
Tercer Mundo
editorial

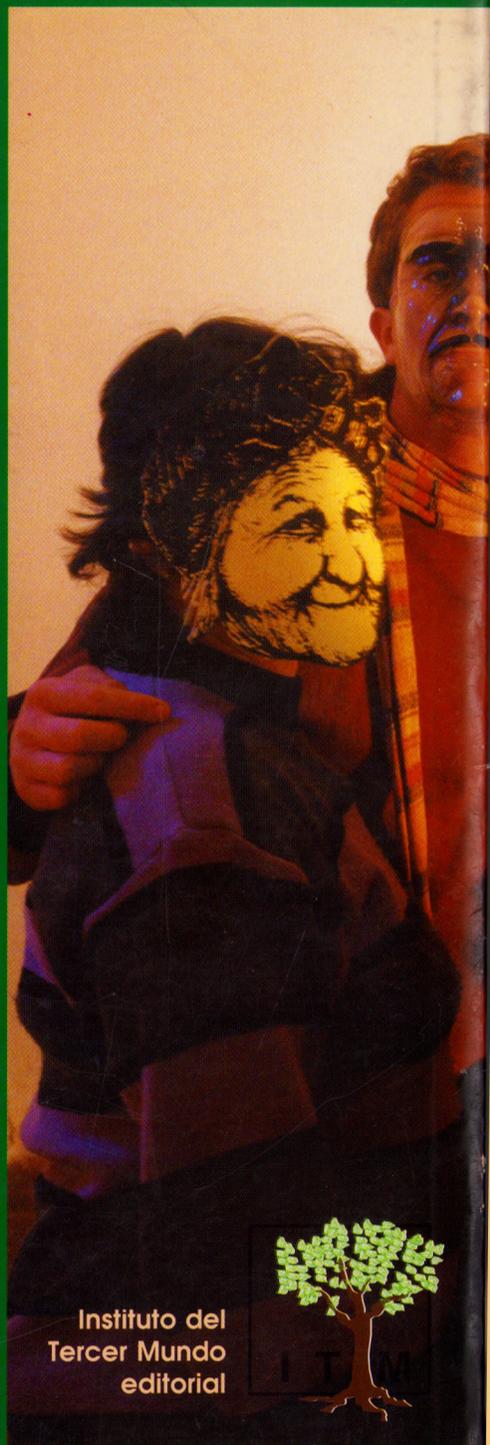


LAS HISTORIAS QUE CUENTAN

"N o es posible vivir del pasado, pero es preciso conocerlo para encarar el futuro.

El horror y el error que lo hizo posible tienen sus propios medios de negación. Si reconstruir la memoria es un requisito para la salud personal y social, romper los silencios de la historia es la condición para recuperar la salud de una nación y creer en un proyecto de país". Este es un aporte a la reconstrucción de algunos hechos decisivos del golpe de Estado de junio y julio de 1973 que hasta hoy han permanecido en la oscuridad. Vea cómo esos momentos fueron vividos y son reflexionados por los principales protagonistas de entonces:

Antonio Adourían	Samuel Lichtensztein
Daniel Baldasari	Antonio Marchesano
Hugo Batalla	José Luis Massera
Jorge Batlle	Luz F. de Osimani
Eugenio Bentaberry	Carlos Partelli
Leopoldo Bruera	Carlos Julio Pereyra
Gerónimo Cardoso	Américo Plá Rodríguez
José Pedro Cardozo	Mario Plasencia
Pablo Carlevaro	Eduardo Platero
Hugo Cores	Jaime Pérez
José D'Elía	Horacio Polla
Salvador Escobar	Héctor Rodríguez
Eleuterio Fernández Huidobro	Matilde Rodríguez
Francisco Forteza	de Gutiérrez Ruiz
Adolfo Gelsi Vidart	Luis Romero
Ernesto Goggi	Víctor Semproni
Federico Gomensoro	Líber Seregni
Washington Hourcade	Jorge Suárez
Ignacio Huguet	Juan Angel Toledo
Luis Iguini	Ramón Valdés Costa
Alvaro Jaume	Amílcar Vasconcellos
Raúl Lago	Alembert Vaz
Jorge Landinelli	Eduardo Viera
Víctor Licandro	Rúben Villaverde



Instituto del
Tercer Mundo
editorial



Testimonios para una
reflexión inconclusa